

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

ESCUELA DE POST – GRADO



TÍTULO DE LA TESIS

**LA PRISIÓN PREVENTIVA JUDICIAL Y LA VULNERACIÓN DEL
DERECHO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL INVESTIGADO EN EL
DISTRITO DE PADRE ABAD, UCAYALI, 2014-2015.**

TESISTA : Gabriela Marleni Serrano Vega

MENCIÓN : Derecho Penal

ASESOR : Dr. Erasmo Santillán Oliva

**HUANUCO – PERÚ.
2015**

DEDICATORIA

A mis padres, quienes me han
donado su vida y su amor día
a día y quienes me instruyeron
creer en mí.

AGRADECIMIENTO

A nuestro divino creador del universo, a la Escuela de Post Grado de la Universidad de Huánuco y a mis inalcanzables y adorables padres por su sabiduría y su soporte incondicional.

RESUMEN

El tema en investigación ha tenido como finalidad establecer si la cárcel preventiva judicial como régimen de refuerzo de la propósito de la causa penal quebranta el derecho de presumir de inocencia del averiguado en el Distrito de Padre Abad, Ucayali, 2014 - 2015, planteándose como una hipótesis que, la prisión provisoria judicial como medida de fortalecer de la intención del proceso vulnera significativamente el derecho de presumir de inocencia del investigado, siendo de tipo de investigación básica y el nivel descriptivo- correlacional, el diseño es no experimental en su forma transversal, la población se consintió por 08 autoridades (magistrados) del Distrito de Padre Abad Ucayali que laboran durante el periodo 2014 - 2015 y 17 abogados que laboran como abogados libres en el Distrito de Padre Abad, es decir, 25, entre magistrados y abogados, siendo las técnicas empleadas el análisis documental, fichaje y las encuestas.

Los resultados nos han permitido concluir en que, los magistrados y abogados coincidentemente refieren que, la prisión preventiva judicial del investigado, antes recaer una sentencia firme, es inconstitucional, porque, se sospecha de inocente del investigado, así también, significa efectos perjudiciales, definitivos e irreparables, al existir una concordancia directa entre la prisión provisoria judicial y de presumirse de inocencia, en la misma manera, no consideran correcto mandar la preventiva prisión judicial sobre los argumentos sobre el aprieto de la pena que se aguarda como consecuencia del modo, riesgo de huida y riesgo de obstaculización.

En lo concerniente a la presumirse de inocencia, tipificado en la Constitución Política del País como ley de leyes, donde claramente se advierte el presumirse de inocencia de todo ser humano mientras judicialmente no se compruebe lo contrario con sentencia firme, al respecto, los magistrados y abogados conocen perfectamente las disposiciones Constitucionales, pero sin embargo, los magistrados, contrariamente a la Constitución, ordenan la preventiva prisión judicial a requerimiento del Ministerio Público, como se verifica de las consecuencias en la investigación presente, sobre éste mismo punto, el presumirse de inocencia, comporta la destrucción de cualquier medida que arrastré sujeción en contrario de la libertad de sujeto, este derecho termina cuando se impone la preventiva prisión judicial a un investigado, antes del veredicto final, relacionado a éste concepto, tanto los mismos magistrados y abogados refieren estar totalmente de acuerdo, con la argumentación de que, la preventiva prisión judicial no desdice al presumirse de inocencia, pues no trata de una pena, sino es medida provisoria personal, lo que para los mismos magistrados y abogados, no sería correcto tal justificación, porque, en la praxis, esta medida es una condena antes de juicio sea cualquiera su fin.

Por otro lado, cuando primero se procede a la aprensión de un sindicado mediante la preventiva prisión judicial, luego se investiga por la inocencia o la culpabilidad del investigado, se trasgrede inevitablemente el derecho a presumir de inocencia consagrado en la Constitución Política de nuestro país, ésta afirmación lo vierten los propios jueces, fiscales y abogados que han apoyado en la investigación en comento.

Finalmente, los magistrados, quienes imparten justicia, detentan la necesidad de efectuar un análisis a nuestra Constitución, relacionado a de presumirse de inocencia, sabiendo que, la preventiva prisión judicial acarrea efectos perjudiciales, invariables para la persona del investigado, más aún, después de una larga investigación se determine su inocencia de dicho investigado. Los facultados de administración de justicia, deben implementar programas para difundir los parámetros de este importante ente legal y constitucional de presumirse de inocencia, para crear conciencia en la sociedad, respecto a una cultura de avenencia y capacitación en técnicas relacionadas a la de presumir de inocencia, dotarlos de las herramientas ineludibles para una correcta aplicación de éste mecanismo que tiende a la mejora de conflictos en materia punitivo.

SUMMARY

The present investigation has had the aim to determine whether the judicial remand as a measure of assurance of the purpose of the criminal process violates the right to presumption of innocence of the investigated in the District of Padre Abad, Ucayali, 2014 - 2015, posing as a hypothesis that, the judicial remand as a measure of assurance of the purpose of the process significantly violates the right to presumption of innocence of the person under investigation, being the type of basic research and the descriptive level, correlational, experimental design is not in your way across, the population was composed of 08 judges of the District of Padre Abad Ucayali that working during the period 2014 - 2015 and 17 lawyers working in its condition Free of lawyers in the District of Padre Abad, i.e. 25, between judges and lawyers, being the techniques used the documentary analysis, chance and the surveys.

The results led us to conclude that the judges and lawyers refer that coincidentally, the judicial remand of the investigated, before a final judgment, is unconstitutional, because, it was presumed to be innocent of the investigated, as well also, means harmful effects, irreversible and irreparable, because, there is a direct relationship between the judicial remand and the presumption of innocence, in the same way, do not consider correct sort the judicial remand with the arguments of the seriousness of the penalty that is expected as a result of the procedure, the danger of leakage and danger of obstruction.

VIII

With regard to the presumption of innocence, typified by the Political Constitution of the State as a law of laws, where clearly warns the presumption of innocence of any person as long as there is no judicial proof to the contrary with a verdict, in this regard, the judges and lawyers are perfectly aware of the constitutional provisions, but however, the judges, contrary to the Constitution, sorted the judicial custody at the request of the Public Ministry, as it warns of the results of the present investigation, on this same point, the presumption of innocence, involves the exclusion of any measure that involves coercion against personal liberty, this right ends when detention is pronounced to a judicial investigation, before the Final judgment in relation to this concept, both the same judges and lawyers refer to totally agree with the contention that the judicial remand does not contradict to the presumption of innocence, because, it is not a penalty, but an interim measure staff, which for the same judges and lawyers, is not correct such justification, because, in practice, this measure is a sentence before trial whatever the order.

On the other hand, when first stops to a syndicated through the judicial custody, then investigated by the innocence or guilt of the investigated, it is inevitably transgresses the law of presumption of innocence, enshrined in the Constitution of the State, this assertion only dump the own judges and lawyers who participated in this research.

Finally, the magistrates, who administer justice, have an obligation to analyze the political Constitution of the State, insofar as it relates to the presumption of innocence, taking into account that the judicial remand carries harmful effects,

irreversible and irreparable to the person of the investigated, even more, after a long investigation determined his innocence of the investigated. Responsible for the administration of justice, they must implement programs to disseminate the scope of this important institution of the presumption of innocence, in order to create awareness in the society with respect to a culture of compromise and training in techniques on the presumption of innocence, equipping them with the tools necessary for the implementation of this mechanism for conflict resolution in criminal matters.

INTRODUCCIÓN

Desde muchas décadas, la justicia de nosotros se encuentra dentro de un transcurso de innovación judicial, en estos tiempos actuales, con la validez del novísimo sistema de proceso penal (CPP), promulgado mediante Decreto Legislativo N° 957, del 29 de Julio de 2004, que ha venido implementándose de manera progresiva desde el primero de julio de 2006. El indicado Código adjetivo, de modernización, busca mejorar la gestión pública y establecer normas destinadas a ofrecer mejores servicios con un modo racional de recursos estatales, atendiendo constantemente los intereses y prosperidad de la persona mediante una ordenación de la ayuda con los beneficios ciudadanos, en correspondencia con los componentes básicos de nuestra Carta Constitución. Desde el ingreso en vigor de la nueva norma legal en el Distrito de Ucayali, se inició una renovación no de solamente en el cuerpo normativo sino además en la causa penal de ámbito local, pues que la reforma pernal ha venido implementándose en forma paulatina, pues son muchos los factores que justifican que nuestro país cuente con una nueva norma procesal, radicando la causa central en la miseria de que los pueblos de América Latina adecuen su legislación a los estándares mínimos que establecen los Tratados Internacionales de “Derechos Humanos” (“Declaración Universal de Derechos humanos”, “Convención Americana de Derechos Humanos” y “Pacto Internacionales de Derechos Civiles y Políticos”). En ese sentido, nuestra Constitución, otorga la potestad al poder judicial, específicamente al magistrado (juez) de ordenar o no la compostura de prisiones preventiva judicial del investigado, por lo que dicha facultad le obliga adecuar el proceso penal a la exigencia constitucional en cuanto

se concierna con presumirse la inocencia; siendo que la política legislativa de modo similar que en la régimen comparado está orientada a disminuir el congestionamiento de la gravamen procesal y por ende la saturación del método de justicia penal ordinaria, pues la referida norma adjetiva prevé una gama de vías alternativas que permiten diversificar las especialidades procedimentales por la aptitud de la personas y por cognición de la materia. Entre ellos, es menester hacer mención a las causas por conciencia de la ocupación pública, la preventiva prisión del investigado y de presumirse de su inocencia amparado en nuestra Carta Constitución; empero en la gama del contexto normativo el artículo 268º del código adjetivo penal vigente, relacionado a los presupuestos materiales de la preventiva prisión judicial, lo que faculta al magistrado considerar la denuncia que ha recogido, consecuentemente el requerimiento fiscal; ello comporta que en ocasiones sea rechazado liminarmente, lo que impide sea tramitada por no contar con contenido o relevancia penal, lo que también significaría una saturación de carga procesal de Gestión judicial, evitando una oportuna indagación y juzgamiento. Bajo estas premisas la jurisdicción judicial, en su afán de brindar un mejor servicio y contribuir a la intendencia de justicia, no ajena al proceso de modernización y dinamización del estado como un ente a la ayuda de los más necesitados, poniendo en práctica una organización más dinámica acorde con los adelantos científicos y tecnológicos que el cuadro legal impone a estas nuevas reformas de administrar equidad en el Perú.

El presente estudio está estructurado en cinco capítulos que se presenta a continuación:

El capítulo I: La situación problemática de las Investigaciones, detallándose situaciones de la realidad respecto de la cuestión de la preventiva prisión judicial y la transgresión del derecho de presumirse de inocencia del procesado en el Distrito del Padre Abad, Ucayali, 2014 – 2015, donde planteamos la identificación del problema, descripción y caracterización del problema, formulación del problema, alternativa de solución, trascendencia teórica, factibilidad, antecedentes y metas de la investigación.

El capítulo II: Contiene el Marco teórico y conceptual, donde se desarrolla la referencia histórica evolutiva del tema investigado, los sistemas políticos y paradigmas procesales, así como teorías de corte científico que sustentan la investigación, los tipos de coerción penal, definiciones, los planteamientos sobre su justificación, regulación y fundamentos, la naturaleza jurídica, el derecho de presumir de inocencia, su significado, su regulación normativa, su contenido y como mandato de libertad.

El capítulo III: Contiene las metodologías de investigación utilizada, tipos de estudio, procedimientos que su desarrollo ha abarcado, así como su población, muestras y inventivas de investigación.

El capítulo IV: Resultados, donde se muestra los resultados del presente trabajo investigativo, con aplicación de estadísticas como instrumento de medida.

El capítulo V: Discusión de resultados, mostramos la contrastación de la exposición de campo con los antecedentes, bases teóricas, prueba de hipótesis y la aportación científica de esta investigación.

Finaliza el estudio de investigación con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos

ÍNDICE

	Pág.
Caratula.....	I
Dedicatoria.....	II
Agradecimiento.....	III
Resumen.....	IV
Summary.....	VII
Introducción.....	X
Índice.....	XIII
Capítulo I: Situación problemática.....	16
1.1 Identificación del problema.....	---
1.2. Descripción y caracterización de problema.....	2
1.3. Formulación problema.....	4
1.4. Planteamiento del problema	4
1.5. Trascendencia teórica técnica o práctica.....	5
1.6. Factibilidad.....	6
1.7. Antecedentes de la investigación.....	7
1.8. Objetivos.....	8
Capítulo II: Marco teórico y conceptual.....	9
2.1. Breve referencia histórica evolutiva	9
2.1.1. Teoría del proceso penal en un sistema constitucional.....	9
2.1.2. Sistemas políticos y paradigmas procesales.....	11
2.1.3. El paradigma Constitucional del proceso penal actual.....	27
2.2. Teoría científica que sustenta la investigación.....	28
2.2.1. Teorías de medidas de coerción penal.....	28
2.2.2. Modelos de medidas de coerción penal.....	29
2.2.3. Definiciones.....	34
2.2.4. Planteamientos sobre su justificación.....	34
2.2.5. Regulación y fundamentos.....	37

2.2.6. Diferencias con la medida de detención	38
2.2.7. Naturaleza jurídica.....	39
2.2.8. Derecho a la presunción de inocencia.....	40
2.2.9. Significado de derecho a la presunción de inocencia	52
2.2.10. Regulación en el Derecho positivo	54
2.2.11. Contenido del Derecho de presunción de inocencia.....	56
2.2.12. Presunción de inocencia como mandato de libertad.....	57
2.3. Definición operacional de palabras clave	58
Capítulo III: Metodología de la investigación	62
3.1. Método, nivel y tipo de investigación.....	62
3.2. Operacionalización de la hipótesis y variables.....	64
a) Hipótesis.....	65
b) Sistema de variables.....	65
c) Esquema del diseño.....	66
3.3. Cobertura de estudio.....	67
a) Población	67
b) Muestra.....	67
c) Delimitación geográfico-temporal y temático	68
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	68
3.4.1. Encuesta.....	68
3.4.2. Entrevista.....	68
3.4.3. Documental.....	68
3.4.4. Fichaje de información doctrinaria.....	68
3.5. Procesamiento y análisis de los resultados.....	69
Capítulo IV: Resultados	70
4.1. Guía de entrevista para los señores magistrados que laboran en el Distrito de Padre Abad, Ucayali.....	70
4.2. Guía de entrevista para los señores abogados libres que laboran en el Distrito de Padre Abad, Ucayali.....	72
4.3. Prueba de Hipótesis.....	71
Capítulo V: Discusión	79
5.1 La prisión preventiva judicial y la presunción de inocencia según los magistrados y abogados en el distrito de padre abad, Ucayali.....	79

5.2 Aporte Científico.....	79
Conclusiones	79
Sugerencias	79
Referencias bibliográficas	79
ANEXOS	79
• Anexo N° 01: Matriz de consistencia.....	80
• Anexo N° 02 Operacionalización de variables.....	82
• anexo N° 03: Cuestionario Nro. 01.....	84
• anexo N° 04: Cuestionario Nro. 02.....	86

CAPÍTULO I

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

1.1. Identificación del problema

El problema ha sido identificado en los diferentes juzgados penales del Distrito Judicial y Fiscal de la Región Ucayali, empero la presente indagación se orienta a investigar netamente el problema judicial relacionado a la disposición represiva de preventiva prisión judicial y la infracción del derecho de presumir de inocencia en el Distrito de Padre Abad durante el periodo del 2014 al 2015.

1.2. Descripción y caracterización del problema:

Las más graves y persistentes preocupaciones de siempre, se ha transfigurado en una aspiración y en un clamor comunes a toda la humanidad, es el de lograr el completo reconocimiento y el acatamiento efectivo de un mínimo de derechos, libertades y garantías fundamentales, consustanciales a la existencia, la libertad, seguridad y decoro de la persona.

En nuestro país, actualmente se observa la entrega de la confrontación de dos instituciones jurídicas, que revisten una importancia trascendental y que forman a su vez preocupación fundamental de todo ciudadano que de alguna otra forma están vinculadas directa o indirectamente, nos referimos a la medida de preventiva prisión judicial frente al derecho de afectación de inocencia, ambas figuras jurídicas se ven involucradas en cuestiones concretas, por ejemplo cuando alguien es detenida por mandato judicial y

luego de un determinado tiempo es declarada inocente, lo que constituye una vulneración innegable del derecho de presumirse de inocencia de concordancia con los derechos previstos en la Constitución Política del Perú.

Es así que, a partir una representación práctica y teórica la práctica de preventiva prisión fue, es y lo sigue siendo una ocasión de confrontación, un lugar de conflicto, donde se contradicen dos intereses. Por un lado, la representación del ser humano al respeto irrestricto de la libertad individual y, en un sentir más amplio a presumirse de su inocencia, y por otro, el interés que inviste el Estado a la duda del crimen y la persecución de la delincuencia.

Ahora bien, a partir de un perspectiva de la persona, poseyendo en cuenta la gravedad e importancia que para su autonomía personal representa la compostura de preventiva prisión, está entre las diferentes medidas limitadas de la libertad es, y se afirma, en un aspecto problemático, ello por dos razones fundamentales, a saber: primero, porque, se asigna a un individuo contra el cual sólo existen fundadas sospechas, indicios razonables que permiten suponer ha perpetrado o participado en el cometido de un ilícito punible con pena corporal, o lo que es igual, se aplica cuando una persona aún no declarada culpable mediante sentencia firme; y, segundo, *porque si a todo individuo se le debe presumir de inocente mientras no ocurra plenamente establecida su culpabilidad, no se le logra privar de su libertad contra quien no existe todavía sino simples presunciones, aplicándole una medida que, en su fondo, no difiere de aquella al que fuere sometido si se declarase su culpabilidad. En tal virtud,*

prisión preventiva judicial, antes de juicio, durante este, y previo a la condena definitiva, es considerada como una violación innegable del derecho fundamental del individuo a que se sospeche su inocencia.

1.3. Formulación del Problema.

Problema General:

¿De qué manera la “prisión preventiva judicial” como medida de “aseguramiento de la finalidad del proceso”, “vulnera el derecho de presunción de inocencia del investigado”, en el Distrito de Padre Abad, Ucayali, 2014 - 2015?

Problemas Específicos:

- ¿Qué relación existe entre la “prisión preventiva judicial” y el “derecho de presunción de inocencia” del investigado?
- ¿La prisión preventiva judicial, al “vulnerar el derecho de presunción de inocencia del investigado”, es constitucional?

1.4. Planteamiento del problema o alternativa de solución

El problema central del estudio de investigación lo constituye si el derecho de presumirse de inocencia tiene como contenido esencial la liberación del procesado durante el decurso de la causa penal, entonces cómo resulta cierto que se procede a la privación de su independencia a través de la preventiva prisión judicial primitivamente de la sentencia firme.

En definitiva, ningún Distrito Judicial, es ajeno a este problema, por cuanto está inmerso en la praxis cotidiana de las privaciones judiciales preventivas, más aun que de un número determinado de detenidos

preventivamente, una cantidad considerable de ellos son declarados inocentes, de lo que se advierte, que contra ellos se han cometido excesos referidos al cumplimiento de sus derechos y del principio imperante en la generalidad de legislaciones del mundo, el cual también está estipulada en nuestra carta constitucional, cual es el derecho de presumirse de inocencia.

1.5. Trascendencia teórica técnica o práctica

Una cuestión que justifica la realización del presente trabajo, es la crítica a la dirección de justicia en el régimen procesal peruano, específicamente en el escenario de la carga de la medida de preventiva prisión, vale decir, orden de preventiva prisión, esto pues puede ser prorrogado, ante la presunta comisión de un ilícito, por parte del imperio judicial o Juez, pese a que nuestra Constitución consagra el derecho a presumir de su inocencia, es decir, el tema materia de tratamiento se justifica porque permitirá analizar en hondura la institución procesal de la régimen de preventiva prisión frente al derecho esencial de presumirse de inocencia, ello conlleva concretamente a expresar la pregunta ¿Por qué se dicta prisión preventiva contra una persona por el supuesto cometido de un delito pese que cuenta con el derecho de que su inocencia se presuma o es que este derecho es un simple enunciado declarativo? ¿Por qué se prorroga la medida de preventiva prisión pese a que existe un derecho humano, como el plazo razonable a ser juzgado y la necesidad del Estado para garantizar sentencias penales justas, rápidas y plenamente ejecutables?; así también, el presente tema constituye un aporte a la doctrina procesal en lo concerniente a la situación de preventiva prisión judicial frente al derecho de presumirse su inocencia del

investigado. Por otro lado, también podemos agregar que, el presente tema se justifica tomando en recuento los siguientes criterios:

- **Relevancia Social.** Dado que el tema en comento, beneficiará a toda la población, especialmente a todo aquél que se ha visto relacionado con la medida preventiva prisión en el Distrito de Padre Abad, Ucayali, quienes se vieron vulnerado algún derecho fundamental, relacionado a presumirse de inocencia.
- **Implicancia Teórica.** En lo teórico, se justifica porque constituye un antecedente para otras investigaciones, pues en el Distrito del Padre Abad, Región Ucayali, no existen trabajos referentes al problema materia de investigación.
- **Implicancia Práctica.** La contemporánea investigación busca viabilizar soluciones relacionados a la preventiva prisión judicial frente al derecho de presumir de inocente prevista en nuestra Constitución.

1.6. Factibilidad

Es factible porque, no se pudo presentar ninguna dificultad en la exposición de las instauraciones de justicia en que se desarrolló.

En lo referente a la bibliografía, existe información al respecto, en las Bibliotecas tanto de Pre y Post Grado de las Facultades Universitarias de la Región Ucayali, Huánuco y de la capital, además se cuenta con meritoria información en las diferentes páginas de Internet. En lo referido al tema económico, es de conocimiento general que para este tipo de trabajo de

investigación, por su misma naturaleza y finalidad, no cuenta con presupuesto proveniente del Estado ni de establecimientos públicos y privadas; por cuanto éste es solventado enteramente con recursos del responsable del presente proyecto de investigación.

1.7. Antecedentes de la investigación.

A nivel Internacional.- No se han hallado investigaciones relacionados a la contemporánea investigación.

A nivel Nacional.- Específicamente en la región de Huánuco, según los datos obtenidos, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Unidad de Postgrado de la Universidad de Huánuco (UDH) y la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”, no encontramos investigaciones similares a la contemporánea investigación. Sin embargo, en nuestra patria, según la averiguación obtenida de las escuelas de derecho, postgrados de distintas universidades del país mediante el Internet, no existe investigación alguna que haya abordado el estudio sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva frente al derecho de presumírsele su inocencia. Empero, sí tenemos libros, manuales, tratados, ensayos, artículos, etc. escritos por autores nacionales y extranjeros sobre las medidas cautelares de carácter real y personal en el contorno penal, el derecho de nivel constitucional de presumirse la inocencia y el ser procesado en un tiempo razonable, así como de los fallos de la Suprema Corte de la República y Tribunal Constitucional respecto de la preventiva detención y la de presumirse de inocencia.

1.8. Objetivos.

Objetivo General.

“Determinar, si la “prisión preventiva judicial” como “medida de aseguramiento de la finalidad del proceso penal” “vulnera el derecho de presunción de inocencia” del investigado, en el Distrito de Padre Abad, Ucayali, 2014 – 2015”.

Objetivos Específicos.

- “Determinar, la relación que existe entre la prisión preventiva judicial y el derecho de presunción de inocencia del investigado”.
- “Determinar, si la prisión preventiva judicial”, al “vulnerar el derecho de presunción de inocencia del investigado”, “es constitucional”.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1. Breve referencia histórica evolutiva.

2.1.1. Teoría del Procedimiento Penal en un sistema Constitucional.

“La necesidad de un procedimiento constitucionalizado, eficaz, justo en un tiempo razonable representa en estos tiempos el principal clamor de la ciudadanía peruana, especialmente cuando se conoce de un proceso penal” (Velez, 2007, pp.01).

“Toda vez que supone la limitación de un derecho fundamental de la persona como es el derecho a la libertad previsto en el artículo 2 numeral 24 de la Constitución Política del Perú” (Velez, 2007, pp. 01).

“Y en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre otros no obstante de la existencia y regulación normativa del derecho a la presunción de inocencia” (Velez, 2007, pp. 01).

“En consecuencia, en un proceso penal el derecho a la libertad es restringido cuando se dicta la prisión preventiva —mandato de detención contra el imputado— no obstante de la valor del derecho a la presunción de inocencia” (Velez, 2007, p.01).

“Gracias a ello el inculpado, se encuentra impedido de ejercitar varios de sus derechos conexos a la presunción de inocencia tales como: derecho a la libertad, dignidad, al trabajo, al libre tránsito y libre comunicación, etc” (Velez, 2007, pp. 01). Es más adquiere la misma situación que un sentenciado.

Si recordamos lo sostenido por Asencio Mellado, citado por Velez, (2007): *“El proceso es un método de determinación de hechos y responsabilidades, para la consecución de este fin ha de permanecer en la más absoluta neutralidad (...)”* (Velez, 2007).

Es de verse que al amparo de la medida de prisión preventiva por parte del Estado esa neutralidad la cual hace alusión termina encapsulándose o aniquilándose, pues al investigado se le pone en similar situación jurídica de un condenado y con ello se ve bloqueado de ejercer sus demás derechos análogos a la presunción de inocencia. Es por ello que:

“La ciudadanía peruana observa que la justicia en nuestro país es lenta, ineficaz y que se siguen procesos ritualistas, incómodos, escritos que no conllevan a una solución pronta y justa a sus problemas dejando en muchos casos una impresión de impunidad y corrupción que repercute negativamente en la imagen institucional del Poder Judicial, y los otros operadores de justicia” (Correo, 2009, prr.04).

Para reflejar esa sensación, es necesario recordar la frase de una conocida obra literaria, recordado por Velez, (2007): *“Pertenezco, pues, a la justicia (...). Entonces, ¿para qué puedo quererte? La justicia nada quiere de ti. Te toma cuando vienes y te deja cuando te vas”* (p. 02).

Por lo vertido, “debido a las implicaciones y efectos del procedimiento penal en los justiciables: imputado – víctima, es obligatorio como urgente una

auténtica transformación en el sistema del procesal penal que vaya más allá de una simple modificación de normas penales” (Velez, 2007, p. 02).

Este cambio no se va lograr con la concesión de códigos, sino que hay que iniciar de la razón del cambio del total del aparato político, económico, social imperante en nuestro territorio y somos conscientes: mientras el patrimonio de producción continúen estando en manos un sector privilegiado —quienes se sirven de la pobreza, la miseria de los otros en una colectividad como la nuestra— la incidencia delictiva tendrá aun mayor repercusión que vemos ahora en nuestros días. Por eso para nosotros de ninguna forma significa una medida al problema la creación del Nuevo Código Procesal Penal (NCP) promulgado por Decreto Legislativo N° 957 y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de julio de 2004, pero sí constituye un cuerpo normativo que estampilla el inicio de la nueva norma proceso penal de corte acusatoria garantista y adversarial de la justicia penal.

Además, “implica la consonancia de la legislación procesal penal en nuestro país, ya que actualmente los procesos penales se tramitan, en algunos distritos judiciales, bajo tres Códigos Procesales: Código de Procedimientos Penales de 1940, Código Procesal Penal de 1991 y Nuevo Código Procesal Penal D.L 957” (Velez, 2007, p. 02).

La reciente investigación no pretende dar solución a los altos índices de la delincuencia, sino pretende afianzar un tipo de procedimiento penal constitucionalizado, respetuoso de los derechos fundamentales, constitucionales y humanos de la persona.

2.1.2. Sistemas Políticos y Paradigmas Procesales.

El maestro Rosas Yataco (2011), citando a Cafferata Nores indica que “El proceso penal está íntimamente relacionado con el modelo político en el que se exterioriza y bajo un sistema de valores que nutre éste” (p. 07).

“Según el papel que una colectividad le asigne, el valor que se reconozca a la persona y reglamentación que se haga de las relaciones entre ambos, será el concepto que desarrolle de delito y del prototipo de proceso que se admita (Rosas, 2011, p. 07).

“En el decurso de la historia, la primacía de aquél, dio lugar a un paradigma llamado “inquisitivo”; la del individuo, a otro denominado acusatorio” (Rosas, 2011, p. 07). “Y pensando en la convivencia de lograr una síntesis entre las virtudes de ambos, se desarrolló el procedimiento penal llamado mixto o inquisitivo mitigado” (Rosas, 2011, p. 07).

Fundamentos.

Una sociedad organizaba políticamente bajo el principio *salus pública suprema lex est*, genera un sistema (y un proceso) penal que, aunque no lo exprese abiertamente, castigará la mera apariencia de delito que, en esta concepción totalitaria, es considerada, por sí misma como lesiva a la autoridad del Estado (por la desobediencia —aun aparente— que implica)¹ ¿Y si lo aparente no fue real? ¡No importa porque castigo es lo determinante! “quien lo sufre mala suerte, es el costo que debe soportar por vivir en la sociedad”. Es preferible la punición de un inocente a la absolución o liberación

¹ CLARIA OLMEDO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal, T I Pág.14, señala que el orden jurídico queda desintegrado “entre el conocimiento oficial de una conducta afirmada como sancionable”. Citado por Pilar Carbonel Vilchez: “Valoración de la confesión sincera en las sentencias emitidas por los magistrados superiores en los procesos ordinarios en los distritos judiciales de Lima, Ica y Junín durante los años 2007 y 2008” Lima Perú 2011. Disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/194/1/Carbonel_vp.pdf. pág. 109.

de un culpable es el ideal que de un Estado aplicador de un proceso inquisitivo².

En el extremo opuesto, y como reacción, está la concepción contraria, que pone al individuo al centro de acción política, es decir es el Estado vigente de derecho como finalidad la custodia y eficacia de los derechos fundamentales del ciudadano, reconociendo el valor de la dignidad de la persona, que lo hace susceptible —por ese único motivo— de ser titular de derechos inalienables, y tiene como máxima “es preferible la liberación de un culpable a la punición de un inocente” es el modelo acusatorio.

La raíz de sus diferencias: Problema de poder.

Es necesario y útil darse cuenta la diferencia esencial entre estos paradigmas opuestos radica en el modo de definir cada uno, la correspondencia del Estado y los ciudadanos, en la oportunidad que uno resuelve la resistencia entre el poder penal reconocido a aquél, y las garantías individuales concebidas como límites a dicho poder (concepción propia del Estado de derecho). El proceso penal del momento de derecho debe captar esta realidad, pues, por un lado, es una única manera que dicho poder puede ejercitarse; pero por otro, es el instrumento para condicionarlo en resguardo de la dignidad humana: las disposiciones constitucionales, o legales comunes que le dan la vida, escénicamente procura evitar se imponga una pena anticipada en perjuicio de un ciudadano.

Presunción de culpabilidad o inocencia.

² Pilar Carbonel Vílchez. Ob. Cit. Pág. 110.

La diferencia esencial entre ambas perspectivas políticas se pronuncia en el ámbito del proceso punitivo, generando dos modelos paradigmáticos, cada uno con su propia columna vertebral: de una parte esta presunción de culpabilidad; y, en otro la inocencia, respectivamente. En el modelo “inquisitivo”, para poder castigar la apariencia de culpabilidad, se elabora la ficción de presumirla en tanto no se demuestre lo contrario. En el acusatorio, que sólo tolera penar la culpabilidad acreditada, se inicia del pensamiento de la inocencia expresamente se la presume, hasta que el *Ius Puniendi* pruebe lo contrario³.

Sistema Procesal y el Estado de Derecho.

“El Perú es un Estado de Derecho como proclama el Art. 43 de la Constitución” (Huanca, s.f., prr.17).

Ello significa que en nuestro país es un “Estado que está regido por una Ley Suprema que consagra determinados derechos fundamentales, inherentes a la persona humana que limitan y establecen un sistema eficaz de control ante los Tribunales, cuando se produzca una violación, ataque o menoscabo” (Huanca, s.f., prr. 18).

“Los Estados que reconocen a sus ciudadanos la titularidad de derechos fundamentales y, lo que es aún más importante, el ejercicio de estos derechos, tienen con seguridad instituciones sólidas y democráticas vibrantes que resguarden el cumplimiento de éstos” (Huanca, s.f., prr. 19).

³Libro Homenaje a la Escuela Procesal Penal de Colombia. Disponible en: Perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20150408_01.pdf.

“Así pues, la prevalencia de un Sistema Acusatorio en un Juicio Oral según BINDER representa que el Juicio sea la etapa más importante y plena del proceso penal pues todo el sistema procesal en su conjunto” (Huanca, s.f., prr. 20).

Es decir, “no es ajeno al Juicio oral sino está encaminado a ello, por ello la idea y la organización de un Juicio contradictorio sería inconcebible sin la vigencia de un principio acusatorio y de un Estado de Derecho” (Huanca, s.f., prr. 20).

“El proceso penal debe tener como faro orientador el respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales, que se llevará a cabo bajo el respeto de un principio acusatorio que sigue una concepción democrática” (Huanca, s.f., prr. 21).

“Significa en lo esencial que son personas distintas quien acusa –sea un órgano oficial o un particular, ofendido o no por el delito que debe promover y atender una acusación contra otra– y el juzgador” (Huanca, s.f., prr.21).

“Aquel obligado a pronunciarse sobre la acusación, pero limitándose a los hechos esenciales que constituyen el objeto del proceso con imposibilidad de alterarlos” (Huanca, s.f., prr. 21).

“En ese marco de ideas, la configuración del sistema acusatorio –propio de un Estado de Derecho– se deriva de la Constitucionalización de los principios procesales” (Huanca, s.f., prr. 22).

Y “Del texto constitucional, podemos apreciar que ésta recoge en su normativa importantes derechos y principios de carácter procesal penal, cuya

aplicación directa viene encomendada a todos los juzgados y tribunales quedando el último control a cargo del Tribunal Constitucional” (Huanca, s.f., prr. 23).

“Como muestra, tenemos al principio de presunción de inocencia señalado en el Art. II del título preliminar del NCPP 2004 toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal” (Huanca, s.f., prr. 24).

“El título preliminar, sólo recoge la regulación ya existente en el ámbito constitucional” (Huanca, s.f.).

Pues, “así lo establece en su Art. 2 inciso 24 literal e, en la cual señala que (...)toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad” (Huanca, s.f.).

“Del mismo modo, en el Art.139 inciso 9 establece “el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos”, regulando otro principio aplicable al proceso” (Huanca, s.f.).

“Asimismo se ha recogido en la Constitución el tema de la competencia judicial penal señalada en el Art. V del T. P del NCPP 2004 donde se establece que le corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia” (Huanca, s.f., prr. 25).

“Especialmente, del juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la ley y que nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por la ley” (Huanca, s.f., prr. 25).

“En ese sentido se encuentra también plasmada la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional en el Art. 139 inciso 1 de la Constitución Política del Perú” (Huanca, s.f., prr. 25).

“Siguiendo el análisis de la norma procesal y constitucional, el principio de legalidad penal establecido en el NCPP 2004 Art. VI del T P llamado también legalidad de las medidas limitativas” (Huanca, s.f., prr. 26).

“A su vez se encuentra constitucionalizado en el Art. 2 inciso 24 literal d del NCPP 2004” (Huanca, s.f.).

El cual establece que: “Nadie será procesado ni condenado por acto omisión que al tiempo de cometerse no esté plenamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”⁴.

“Asimismo, en el Art. VII sobre la vigencia e interpretación de la ley procesal penal, también se recoge en la Constitución en el Art. 103 “Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo” (Huanca, s.f., prr. 26).

“De esta manera también el derecho de defensa que ha sido recogido por el Art. IX del T.P del NCPP 2004 Artículo IX” (Huanca, s.f.). Que establece:

“Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su

⁴ Disponible en: antoniohuanca Pacheco.blogspot.pe/2012/10/sistema-acusatorio-adversarial-e-el.html. párrafo 25.

caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala” (SPIJ, s.f).

Del mismo modo el inciso 2 establece que: “Nadie puede ser forzado o incitado a expresar o admitir culpabilidad contra sí mismo, su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad” (SPIJ, s.f).

“Al respecto la Constitución Política en su Art. 139 inciso 14 recoge el derecho de no ser impedido de derecho de defensa en ningún estado del proceso” (Huanca, s.f.).

“Que todo individuo goza del derecho a ser comunicado inmediatamente y por escrito del motivo o razones de su detención” (Huanca, s.f.).

“Asimismo goza del derecho a informarse en persona con un defensor de su nombramiento y a ser aconsejado por este a partir de que es citado o detenida por cualquier autoridad” (Huanca, s.f.).

- Los Sistemas Procesales.

El modelo o sistema Inquisitivo.

“El régimen inquisitivo surgió sobre el imperio de la Iglesia Católica e involucra que la acción de acusación y enjuiciamiento se hallen reunidas en uno, el juez, frente al cual la persona está en posición de inferioridad” (Velez, 2007, p. 03).

Las particulares de este sistema, según Velez, (2007) son las siguientes:

1. *“El comienzo del procedimiento no pende de un acusador. Rige el brocardo “procedat iudex ex officio”.*
2. *“El Juez establece subjetiva y objetivamente la acusación”.*
3. *“La indagación de los hechos y el establecimiento de las pruebas a ejercer las realiza el juez-acusador”.*
4. *“No coexiste afinidad entre acusación y sentencia. El Juez puede en cualquier momento perturbar la acusación”.*
5. *“No hay refutación ni igualdad. No existe partes. Las atribuciones del juez son totales ante un inculpado indefenso ante él. Lo normal es la detención”.*
6. *“La detención preventiva se dispone por regla general, como un gesto punible íntegro e inmediato⁵, instaurado en la simple sospecha o, como mucho, en la esencial convicción del inculpado en un delito”.*
7. *“La presuposición de la responsabilidad que lo caracteriza es preservada de interferencias de cualquier posibilidad defensiva” (p.3).*

⁵ SCHMIDT, Eberhard, Fundamentos Teóricos y Constitucionales del Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 1957

“El sistema reconoce a la idea absoluta del poder central y al importe que se fijaba a la autoridad” (Velez, 2007, p. 03).

“En el régimen inquisitivo no se da el interés debido al derecho de defensa” (Velez, 2007).

“Es más, la presunción de inocencia se encuentra por debajo de la imaginación de culpabilidad, el cual sólo se desvanece si el imputado logra soportar las torturas que se empleaban para que admita la responsabilidad en el delito” (Velez, 2007).

“Por lo señalado, en el en el Perú el 90% de la carga procesal son procesos sumarios predominantemente escritos” (Velez, 2007).

Es decir, “son guardados en los que el juez en virtud de las diligencias sumariales, emite la resolución que incumba soslayando la etapa esencial del proceso, que es el juzgamiento” (Velez, 2007).

“Es por eso, que este arquetipo de procedimientos son pensados en el claro modelo de los procedimientos gestionados sobre el régimen inquisitivo” (Velez, 2007, p. 03).

En este sentido Velez, (2007) dice que: “en los procedimientos sumarios no hay etapa de juzgamiento, lo que violenta contra los principios jurídicos de presunción de inocencia inmediación, oralidad, publicidad y contradicción, ya que el juez emite fallo a razón de lo procedido, sin insuficiencia de efectuar audiencia” (p. 03).

“Ciertamente, el argumento de la oralidad es hondamente significativa por la intermediación y contradicción que es necesaria en todo procedimiento

penal, ya que es el insuperable momento en el que el Juez puede tener contacto personal con el procesado” (Velez, 2007, p. 04).

“El NCPP intenta acabar con los procedimientos sumarios, donde el Juez no goza mayor relación con el inculminado quebrantándose los principios procesales mencionadas líneas arriba” (Velez, 2007, p. 04).

“Se plantea un solo régimen sobre el cual habrán que gestionarse todos los procedimientos inclusive en el artículo 271 se prevé el fundamento de la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva” (Velez, 2007).

“De este modo, el apropiado y pertinente uso de la oralidad establece una inmediata interrelación humana, que admite una mejor comprensión mutua y propia respeto de los que intervienen en el juicio oral” (Velez, 2007).

El Sistema Acusatorio.

Dice, Velez (2007) que “Este régimen prevaleció en el mundo vetusto, se desplegó en Grecia y la República Romana, y en la Edad Media hasta el siglo XIII” (p. 04).

“El principio bajo el cual se sustentaba era el de la preeminencia de la persona y la inactividad del Estado” (Velez, 2007, p.04)

“El enjuiciamiento acusatorio se desarrolló determinando y fijado visiblemente los deberes de cada sujeto procesal” (Velez, 2007, p. 04).

“Así asumimos que el acusador, y sólo él, alcanzaba perseguir el delito y practicar el imperio demandante; el inculcado poseía amplias posibilidades

de refutar la acusación por medio de la declaración de sus derechos de defensa” (Velez, 2007, p. 04).

“Y por último el tribunal, practicaba el poder decisorio” (Velez, 2007, p. 04)

“El inculpado es estimado como un sujeto de derechos, y su visión relación al inculpado es de igualdad, desglosándose de este escenario principios como el in dubio pro reo, y la presunción de inocencia” (Velez, 2007).

“Asimismo, en tanto que la libertad es la regla, la detención es la excepción” (Velez, 2007, p. 04).

“Siendo este régimen más provechoso para el inculpado, por cuanto supone el respeto al debido proceso, es el admitido por nuestra Constitución” (Velez, 2007).

Así, como señala San Martín Castro, citado por Velez, (2007) “nuestra Carta Magna impone un sistema acusatorio o contradictorio, y la ley debe tener en claro dos puntos esenciales”:

“(1) El Ministerio Público conduce la investigación del delito y es el director jurídico funcional de la Policía y (2) el proceso judicial es indispensable para imponer una pena a una persona, el mismo que debe ser público, y a partir de él rigen imperativamente una serie de principios propios de la judicialización del enjuiciamiento, a decir: inmediación, contradicción, oralidad y concentración” (Velez, 2007).

“En este sentido, al aplicar el nuevo código habrá que entender que la superación del molde inquisitivo implica mucho más, significa por ejemplo enfrentar el sobredimensionamiento del proceso escrito” (Velez, 2007).

Así “garantizar la vigencia práctica y no formalista de los principios de oralidad, concentración, inmediación entre otros, haciendo que el peso del proceso se ponga en las partes” (Velez, 2007).

De manera “principal el ministerio público y la defensa y donde la función del juez es arbitral y equilibradora del rol asumido por los sujetos procesales.” (Velez, 2007, p. 05).

Modelo Mixto.

“Este sistema, surgido al calor de la Revolución Francesa, es la ruptura de los sistemas anteriores, es decir, la persecución judicial de delitos no es un derecho de los particulares y el juez no puede ser al mismo tiempo acusador” (Velez, 2007, p. 05).

Velez (2007), señala citando a “Joan Verguer Grau”, son:

1. *“La separación entre la función de acusar, la de instruir y la de juzgar, confiadas a órganos distintos, esto es, al fiscal, al Juez de Instrucción y al tribunal con jurado, respectivamente”.*
2. *“Excepto para el Tribunal con jurado, rige el principio de la doble instancia”.*
3. *“También rige el principio del Tribunal colegiado”.*
4. *“La justicia está a cargo de jueces profesionales, excepto cuando interviene el jurado”.*

5. *“La prueba se valora libremente”.*
6. *“La acción penal es indisponible y rige el principio de necesidad en todo el curso del procedimiento. La acción penal también es irrevocable”.*
7. *“El imputado deja de ser objeto de la investigación, y adquiere el status de sujeto de derechos. En ese sentido, el Estado asume la carga de la prueba.” (p. 05)*

“Es importante mencionar que, el sistema procesal penal peruano ha sido considerado por un sector de la doctrina como sistema mixto toda vez que, coexisten en nuestra legislación el modelo inquisitivo y el acusatorio” (Velez, 2007).

“Sin embargo, como señala Neyra Flores pese a todas las modificaciones el Código de Procedimientos Penales contiene un modelo “inquisitivo reformado”” (Velez, 2007, p.05).

En efecto, como menciona San Martín, el Código de 1940 “privilegió la instrucción y transformó el juicio oral en un mero juicio leído” (Velez, 2007, p. 05).

“Así, hasta antes de la dación del Decreto Legislativo N° 959 publicado el 17 de agosto de 2004 que introdujo importantes modificaciones al Código de Procedimientos Penales de 1940” (Velez, 2007).

Claro está “impulsando la oralidad en las audiencias, se puede sostener que el juicio oral era meramente simbólico” (Velez, 2007, P. 05).

Modelo Propuesto por el Nuevo Código Procesal Penal.

“Los alcances y límites del derecho de penar del Estado, en un tiempo y lugar determinado, responden, necesariamente, a la naturaleza y esencia del sistema político imperante” (Velez, 2007, P. 06).

“Si el régimen es autoritario, su sistema penal también lo será; por el contrario, si el sistema político es democrático sus instituciones jurídicas también lo serán o tendrán como meta serlo” (Velez, 2007, P. 06).

“En síntesis, la decisión política que defina el sistema, debe optar básicamente por dos alternativas: primar el interés público y fortalecer el poder del Estado en la persecución penal aun negando los derechos del individuo” (Velez, 2007, P. 06).

Otra “en otorgarle al individuo las suficientes garantías para que enfrente a ese poder punitivo, preservando su dignidad de persona en un plano en el que no se vea absolutamente desprotegido frente a las instituciones públicas de la persecución penal” (Velez, 2007, p. 06).

En consecuencia, “el modelo procesal penal propuesto, se caracteriza por afirmar los principios básicos de un proceso penal respetuoso de los derechos humanos y protector de la seguridad ciudadana” (Velez, 2007).

“Se debe tener en cuenta que, en el proceso penal se enfrentan los intereses colectivos con los individuales, siendo dirimidos éstos durante dicho proceso” (Velez, 2007, p. 06).

En tal sentido, el “Estado debe proteger al individuo de una persecución injusta y de una privación inadecuada de su libertad” (Velez, 2007, p. 06).

Entonces, “el imputado debe tener ocasión suficiente para defenderse, la meta del derecho procesal penal no es el castigo de una persona, idealmente del culpable, sino la decisión sobre una sospecha” (Velez, 2007, p. 06).

“La estructura del nuevo modelo de proceso penal apunta a constituir un tipo de proceso único para todos los delitos perseguibles por ejercicio público de la acción penal” (Velez, 2007, p. 06).

Es decir, “que se inicie con la actividad preparatoria de la investigación bajo la dirección del fiscal, continúe con la acusación, la audiencia preliminar y el juicio oral” (Velez, 2007, p. 06).

Dejando en claro que el “proceso único no excluye los procesos consensuales y abreviados, como la suspensión condicional del proceso, la terminación anticipada del mismo, entre otros que podrán tener lugar durante toda la etapa preparatoria, e inclusive antes de que se presente la acusación” (Velez, 2007, p. 06).

“La estructura del nuevo proceso penal se edifica sobre la base del **acusatorio garantista de corte adversarial**, cuyas líneas rectoras son la separación de funciones de investigación, juzgamiento y **la libertad del imputado es la regla durante todo el proceso**” (Velez, 2007, p. 07).

“De esta manera, la investigación penal estará a cargo del fiscal y la decisoria a cargo del juez” (Velez, 2007, p. 07). “Es por ello que, el artículo IV del Título Preliminar del NCPP señala que los actos que practican el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional” (Velez, 2007, p. 07).

“El carácter no jurisdiccional de la investigación preparatoria es relevante para discernir qué es materia de valoración, pues los elementos de convicción que se recolecten en dicha fase no servirán para fundar una sentencia.” (Velez, 2007).

Dado que, como señala Velez, (2007) “los actos de prueba se producen en el juicio, salvo las excepciones señaladas en el artículo 393.1” (p. 07).

“Así, se reestructura el proceso penal estableciendo un procedimiento común u ordinario, que se desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad de armas, bajo la vigencia de las garantías de la oralidad, inmediación y publicidad” (Velez, 2007).

De todo lo que se ha podido estudiar, a decir de Velez, (2007) el nuevo sistema tiene las siguientes características:

- “La separación de funciones de investigación y de juzgamiento” (Velez, 2007).
- “El desarrollo del proceso conforme a los principios de contradicción e igualdad” (Velez, 2007).
- “La garantía de oralidad como la esencia del juzgamiento” (Velez, 2007).
- “La libertad del imputado es la regla durante todo el proceso” (Velez, 2007).

- “El proceso penal se divide en 3 fases: Investigación Preparatoria, Fase Intermedia y Juzgamiento” (Velez, 2007).

“Con la adopción del sistema procesal **acusatorio garantista de tendencia adversarial** la estructura del proceso penal común, tanto el Ministerio Público cuanto los órganos jurisdiccionales deberán asumir plenamente las competencias exclusivas y excluyentes que la Constitución les asigna” (Velez, 2007, p. 07).

“El nuevo Código contiene una amplia regulación de las garantías procesales. Se regula integral y sistemáticamente en un sólo cuerpo normativo: la actividad procesal, el desarrollo de la actividad probatoria, las medidas de coerción real y personal” (Velez, 2007, p. 07).

Es preciso indicar que “[...] el nuevo Código regula también procedimientos especiales como el aplicable al principio de oportunidad (artículo 2), juzgamiento de acusado confeso (artículo 372.2), proceso inmediato (artículo 446), proceso de terminación anticipada (artículo 468) y proceso de colaboración eficaz (artículo 472)” (Velez, 2007).

2.1.3. El Paradigma Constitucional del Proceso Penal.

El paradigma “mixto” o “inquisitivo mitigado” del procedimiento penal preponderante en nuestra patria, no es respetuoso del modelo que atribuye la Constitución asimismo a las importantes herramientas internacionales en los que el Perú está vinculado, la prisión preventiva adoptada en el progreso del

procedimiento penal que es aplicada sin adoptar en consideración el derecho de presunción de inocencia.

La Contraposición de Intereses.

El procedimiento constitucional empieza de la plataforma de que, ontológicamente, el proceso (cualquier proceso) es un procedimiento que reflejan dos intereses contrapuestos, y así poder resolver sobre ellos: el provecho del Estado (que se ha apropiado del interés de la víctima) en punir la conducta delictiva que atribuye a un ciudadano, se enfrenta naturalmente con el interés (fundado o infundado) de éste de no ser sujeto a la pena⁶. Consecuentemente pone que un tercero (juez), ajeno a estos intereses, tanto que no son propios (como si es del imputado) como porque no les debe representar (Ministerio Público) decida sobre tales intereses contrapuestos bajo un debido proceso.

El Tribunal ¿Se convence o es convencido?

Un sistema constitucional, no tolera un procedimiento de averiguación unilateral y monopólica, en el sentido de un juzgado que usurpe las facultades para acusar y defender, bajo excusa de un interés común en establecer la verdad. Por el contrario, establece una cuestión en el que el tribunal no procure por sí las fuente de prueba del cual podrá inferir su convencimiento, sino que procuren el acusador y —si así lo quiere— el acusado; no piensa en un tribunal que se convenza por obra de su auto reflexión, sino cual sea convencido (o no) por obra e iniciativa probatoria y dialéctica argumentativa

⁶ FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón, Pág. 733.

de aquellos; no admite un monólogo unilateral del juez con la prueba para buscar la verdad, sino que quiere que se procure lograrla por vía de síntesis⁷. O sea, el sistema constitucional pretende que el conocimiento exigido al tribunal para poder decidir la obligación de una pena o cualquier otra medida. Porque no se agota toda la plenitud, policromía y fecundidad del mundo, sino sobre la forma mental de contradicción⁸.

2.2. Teoría Científica que sustenta la investigación

2.2.1. Teorías de Coerción Penal.

“La actual crisis del proceso penal en el Perú se explica primordialmente por el modo en que el Estado, a través de su órgano legislativo y judicial, ha amparado la libertad” (Ore, 2006, p. 02).

“Las dificultades que surgen del procedimiento estatal de la restricción personal no sólo pueden ser tratados desde una visión dogmática, sino estimando cuestiones prácticas” (Ore, 2006. p. 02).

“Por ello, cabe presentar la forma en que la restricción personal se utiliza en la realidad jurídico-penal peruana (legislativa y jurisprudencial)” (Ore, 2006, p. 02).

2.2.2. Modelos de Coerción Penal.

“De acuerdo a la importancia que una determinada sociedad (o sus legisladores o jueces) concede a los valores de libertad, presunción de inocencia y seguridad, surgen tres modelos de coerción personal: Garantista, eficiente y preventivismo radical” (Ore, 2006, p. 08).

⁷ José Ignacio Cafferata (Extracto): Manual de Derecho Procesal Penal, disponible en: <https://es.scribd.com/doc/305050627/CAFFERATA-Jose-Ignacio-Manual-de-Derecho-Procesal>. pág. 7.

⁸ José Ignacio Cafferata (Extracto): Manual de Derecho Procesal Penal, disponible en: <https://es.scribd.com/doc/305050627/CAFFERATA-Jose-Ignacio-Manual-de-Derecho-Procesal>. pág. 7.

El Modelo Garantista.

“El modelo garantista, o también llamado modelo liberal, se fundamenta en el fundamento de que la actuación del poder penal, en varias de sus manifestaciones, debe tener límites” (Ore, 2006, p. 08).

“Este modelo, manifiesta Alberto Binder, se define por asumir disposiciones de autolimitación, basándose en los principios de legalidad y certidumbre, esto es, en la idea de que la actividad de la política criminal debe ser racional y limitada” (Ore, 2006, p. 08).

Luigi Ferrajoli, citado por Arsenio Ore, (2006) dice refiriéndose al garantismo que “es una medida de racionalidad, de justicia, además de legitimidad de la intrusión punitiva”.

El cual “nació como una revelación al progresivo desarrollo de la discrepancia que existía en varias latitudes, entre principios establecidos en nuestra Carta Magna, la legislación penal ordinaria, jurisprudencia y prácticas administrativas o policiales” (Ore, 2006, p. 08).

“Respecto a la coerción personal” (Ore, 2006, p. 08). El modelo de corte garantista se identifica por:

“a) Reconocer la supremacía del derecho a la libertad y presunción de inocencia, b) **propugnar medidas alternativas a la detención preventiva judicial**” (Ore, 2006).

“c) Afirmar que ésta posee solo fines procesales, que tan sólo el peligro de fuga justifica su imposición, además que la peligrosidad procesal no debe ser presumida; y, d) Sostiene que la facultad persecuidora es limitada” (Ore, 2006, p. 09).

El Modelo Eficientista.

“Este modelo, de corte autoritario, se identifica primordialmente por supeditar el valor libertad al principio de autoridad, omitiendo la idea de términos al potestad penal” (Ore, 2006, p.09).

“En un modelo autoritario de seguimiento penal, en el que se reemplazan valores establecidos constitucionalmente como derechos fundamentales y se cambia su obediencia y cumplimiento en prácticas excepcionales” (Ore, 2006).

Así, bajo el alegato de las situaciones de emergencia o políticas coyunturales, “los derechos fundamentales a la libertad y presunción de inocencia se vuelven referentes, optándose por medidas que no sólo los degeneran, sino que se cambian en reglas de procedimiento” (Ore, 2006).

Arsenio Ore, (2006), precisa que este modelo se fija por: “a) Una transformación de valores, ya que la libertad termina siendo la excepción, y la prisión preventiva se vuelve en un anticipo de pena” (Ore, 2006).

En “b) Una instrumentalización de operadores del derecho, pues en el modelo los jueces abandonan su tradicional e imperativo deber de garantizar la protección de los derechos fundamentales y toman una ocupación persecutoria y parcializada, extraña a esta función suprapartes” (Ore, 2006).

“c) Una alarmante falta de relación intrasistémica, ya que resulta muy probable que un tipo de modelo penal de emergencia se trate en el marco de una Constitución con una consistente y locuaz declaración de principios” (Ore, 2006).

Pero con la exigida reseña a los Tratados Universales, los cuales pregonan la libertad como régimen y la excepcionalidad de detención.

Y “d) Al formar reseña a la regla de segundo orden (códigos, leyes especiales, etc.) “encontramos que ésta cambia y subvierte en la praxis la política criminal principista sujeta en la Constitución, con la resultante diligencia de la detención como una práctica regular”” (Ore, 2006).

“De tal manera que no sólo hallamos una falta de conexión intrasistémica en el sistema penal, acaso además una legislación notablemente inconstitucional” (Ore, 2006, p. 10).

En general “el marco legal que reglamenta estos ordenamientos establece términos, pero como señala Binder la idea de límite verifica una situación cosmética o decorativa, ya que en cualquier instante, si el poder lo decide, tales términos pueden ser sobrepasados” (Ore, 2006, p. 10).

El Modelo Preventivista Radical

“Este modelo indaga la seguridad de cualquier manera, a la luz de la base de argumentos que llevan que la acción del Estado y del sistema de justicia penal deben estar dirigidos, a evitar, la posibilidad siquiera de preparación de un delito” (Ore, 2006, p. 11).

“Expresión de esta postura son las consistentes medidas que se efectúan cuando se trata de criminalidad violenta, como el terrorismo internacional” (Ore, 2006, p. 11).

“No rastra excesivo advertir el gran riesgo de que una estrategia de coerción determinada por la "tolerancia cero" se instrumente con habilidad en países

con entidades democráticas frágiles, cargados de desigualdades que provocan la intranquilidad, cuando no la agitación social” (Ore, 2006, p. 11).

“Una manifestación de este modelo, muy presente y propio en el Perú de los últimos años, es el raro de la emergencia penal” (Ore, 2006).

“La contingencia es un concepto unido a la idea de crisis, de brevedad, de excepcionalidad, y tal vez también de imprevisibilidad” (Ore, 2006).

“El modelo de emergencia por definición constituye una respuesta inmediata a un fijo problema social que se muestra también de manera imprevista y que crea una gran afectación al logro público, alarma social y alto índice de inseguridad ciudadana” (Ore, 2006, p. 12).

“Cuando a proceso penal respecta el tipo de emergencia privilegia, a los valores de orden público y seguridad ciudadana en menoscabo del derecho a la libertad” (Ore, 2006, p. 12).

“Ahora bien, revisados los modelos de coerción existente, la interrogante que surge es a qué modelo se adhiere el sistema peruano” (Ore, 2006, p.13).

“Si bien es verdad la carta constitucional, específicamente en su artículo 1 reconoce que la protección de la persona humana y el respeto de su dignidad son fin supremo de la sociedad y el Estado” (Ore, 2006).

“El artículo 2 inciso 24 reconoce el derecho a la libertad y seguridad personales, el artículo 2 inciso 24 literal “e” que instituye la presunción de inocencia” (Ore, 2006).

Asimismo, “el artículo 43 que configura la aptitud de Estado democrático, así como el artículo 44 que establece como deber primordial del Estado el

acatamiento de los derechos, la seguridad y los Tratados internacionales respecto de los Derechos Humanos” (Ore, 2006).

Además “también es verdad que con la legislación de segundo orden (por ejemplo algunas disposiciones de represión al terrorismo y tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual)” (Ore, 2006).

Por otro lado “la jurisprudencia emitida por algunos órganos jurisdiccionales (por ejemplo aquellos casos de prórroga excesiva de la detención preventiva o detención domiciliaria) **nuestro modelo de coerción penal es eficientista y de preventivismo radical o sea es un tipo de corte mixto**” (Ore, 2006, p. 13).

“A ello hay que agregar, que la diversidad de criterios asumidos por los diferentes actores, sean éstos legisladores, jueces o académicos, hacen por ejemplo que el actual proceso penal esté regulado por 3 códigos” (Ore, 2006, p.13).

El Código de Procedimientos Penales de 1939 que entró en vigencia desde 1940, Código Procesal Penal de 1991 y el Código Procesal Penal de 2004. “Lo mismo sucede en el tema de la coerción personal, más aún donde existen leyes que regulan algunas de sus formas” (Ore, 2006).

Para este caso tenemos la Ley N° 27379 “Ley de procedimientos para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares”. La Ley N° 27934 “Ley que regula la intervención por la Policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito” (Ore, 2006, p. 13).

Resumiendo, las diversas definiciones propuestas sobre la prisión preventiva, como de las breves referencias históricas que preceden, podemos constatar: primero, que ni la noción que sobre esta institución se tiene es uniforme y, segundo, que el progreso de esta disposición no perennemente ha sido progresiva sino que más bien, su desarrollo ha seguido un movimiento pendular, cuando no francamente regresivo. De ello la función asignada a esta medida haya sido entendida de manera distinta por la doctrina con el decurso del tiempo.

2.2.3. Definiciones.

El profesor JUAN GOMEZ COLOMER, nos precisa que la prisión preventiva es una: “Medida privativa de libertad, emanada del juez competente, de duración indefinida, y esencialmente provisoria, que tiene como necesario antecedente la dictación del auto de procesamiento.”⁹

De su parte Chero, (s.f.), citando a MORENO CATENA, señala que:

“La prisión preventiva aceptada como un mal necesario en cualesquier ordenamiento jurídico, representa la más difícil intrusión que puede haber en la esfera de la libertad de la persona, sin que haya todavía una sentencia penal firme que la justifique. Consiste en la total ausencia al procesado a su derecho a la libertad ambulatoria, a través de su incorporación en un centro penitenciario, mediante la substanciación de un procedimiento penal” (Chero, s.f.).

⁹ GOMEZ COLOMER, Juan L. La instrucción del proceso penal por el ministerio fiscal: aspectos estructurales a la luz del derecho comparado. En revista peruana de derecho procesal, Nº 01, Lima –Perú, 1997.

Con igual criterio CUBAS VILLANUEVA señala: que la detención preventiva, reside en privarle al imputado su derecho trascendental a la libertad mecánica, con su entrada a un establecimiento penitenciario, en el desarrollo de un proceso penal¹⁰.

2.2.4. Planteamientos sobre su justificación.

Su implantación hasta hoy día ha sido imanada teóricamente en referencia a su justificación, cuestionada respecto a su regulación legislativa y jurídica en su aplicación práctica de tal cualidad que su incierta se ha planteado ineludiblemente bajo ese triple aspecto: i) teórico, ii) legislativo y iii) práctico.

En efecto, esta institución ha sido de siempre uno de las dificultades críticas y espinosos del medio penal tanto por un conflicto que plantea como por su falta de justificación. Entre las naturalezas que confluyen a suscitar al conflicto y ha fundamentar dicha falta de justificación, cabe mencionar dos que son esenciales al respecto a saber: Primero el apresuramiento de una reacción pronta e inmediata contra el delito, la cual no cabe simplemente representar la respuesta de la probidad penal contra la actividad delictiva, sino que al propio turno, debe formar un intermedio para resguardar el progreso del procedimiento penal, impidiendo al delincuente continuar su actividad delictiva, sea fugarse, sea falsear estas pruebas de su culpabilidad.

Esta necesidad de la renuencia inmediata forma en la actualidad el dispositivo principal de la rapidez de la prisión preventiva; segundo, la contradicción en que se encuentra mediante un anterior del elemento del derecho esencial de

¹⁰ CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El Nuevo Código Procesal: ¿Revolución Penal? Lima: Justicia Viva, 2004, Pág. 79

presunción de inocencia dado que la concentración de la prisión preventiva afecta a un individuo cuyo compromiso está aún por establecerse¹¹.

De ahí que para una teoría general de derecho penal, la reunión de una detención preventiva se traduzca como una permanente confrontación y un, al parecer irreducible conflicto entre el rendimiento individual y el colectivo.

De ahí también, para la avenencia de estos intereses haya sido y sea uno de los inconvenientes legislativos y de política de la ciencia criminal de más difícil solución. Y sí es cierto que la discusión doctrinaria sobre el mantenimiento o la interrupción general de la cárcel preventiva son muy antiguas, empero no es menos innegable que el debate abierto por esta medida ha sido tan marcadamente persistente y sobre cualquiera hoy día tan encerrado y al grado generalizado que de alguna manera puede idearse como una controversia para siempre destacada en el orden teórico ni menos y aquí estriba la efectiva importancia y dificultad del asunto como un dilema definitivamente resuelto sea en la secuencia legislativa o terreno práctico.

Confirman lo anterior los frecuentes, pero sobre todo los recientes, esfuerzos legislativos originarios y mundiales tendientes a lograr mayor y más justo equilibrio entre la obediencia de la libertad individual y amparo de la sociedad.

A nivel interno dicho esfuerzo legislativo, en su generalidad concretado durante la pasada década en muchos países de Europa occidental fueron, algunas veces resultado de las sátiras enderezadas contra la práctica de la detención preventiva, como de consiguiente exigencia de reformas al régimen

¹¹ Disponible en: archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/705/3.pdf.

jurídico de la institución; pero otras veces en mayor medida y profundidad fueron la consecuencia del cumplimiento del deber de éstos Estados de conformar su legislación interno con las reglas establecidas de coalición con los compromiso contraídos al ratificar o adherirse a determinados instrumentos internacionales en elemento de protección mundial de derechos humanos.

2.2.5. Regulación y Fundamentos.

Dentro de nuestra legislación está normada en el artículo 135º del Código Procesal Penal de 1991, en tanto el Código Adjetivo Penal de 2004 se encuentra en su artículo 268º y ss. En la Constitución, está establecida en el Art. 2, inc.20 apartado g.

En la regulación del NCPP, la cárcel preventiva renace, con una estructura acusatoria, es totalmente igual que el Código Procesal Penal de 1991 en cognición que toma los mismos requisitos de éste para su adopción siendo la única diferencia que se verifica en una audiencia.

El “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (PIDCP), establece como excepcional la efectuación de esta medida, además el PIDCP señala, que procederá, sólo para asegurar de la presentación del acusado.

De otro lado, “La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica”, regula de manera similar lo dicho por el PIDCP.

Por lo tanto, la positivación de la detención preventiva en nuestra Constitución y en el NCPP, presenta un dilema de constitucionalidad, pues se autoriza

sobre la ordenación de finalidades no reconocidas por los Tratados Internacionales vigentes en Perú, respaldadas por un marco inquisitivo derogado.

Sus fundamentos, son los propios que se instituyen para las medidas cautelares, es decir esta medida está concebida para lograr las terminaciones del procedimiento, debiendo regularse en equilibrio frente a los derechos del procesado, a un previo juicio y, de presumirse de su inocencia, la proporcionalidad, excepcionalidad, etc.

De acuerdo a este régimen de los derechos humanos y en observancia a los elementos fundantes del novísimo régimen procesal penal, por ser el contexto de mayor intensidad, procederá solo cuando las otras medidas, estuvieren escasos para afirmar el propósito del procedimiento.

2.2.6. Diferencias con la Detención.

En el aspecto a su duración, la detención tiene su plazo limitado por regla general, en cambio la detención preventiva tiene como plazo de duración de indefinido, al que puede colocársele término por la excarcelación del procesado, o en caso se emita sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria. En lo que respecta a quien afecta, la detención impresiona al inculcado y la prisión preventiva, al imputado por una infracción penal. En correspondencia a su procedencia, la detención requiere que se halle establecida la preexistencia de un determinado hecho que presente los caracteres de delito y que el juez tenga razonadas sospechas para imputar de autor, cómplice o encubridor a quien cuya detención se ordene. Para

decretarse la detención preventiva, debe encontrarse justificada la coexistencia del delito materia de indagación y que aparezcan presunciones fundadas, para apreciar que el procesado ha poseído intervención en el infracción en disposición de autor, cómplice o encubridor, en referencia a su ejecución la detención se cumple fuera de un estableciendo penitenciario, mientras la prisión preventiva se materializa adentro de un recinto penitenciario.

2.2.7. Naturaleza Jurídica.

Algunos autores como el Tribunal Constitucional, en el Exp. N° 1260-2002-HC/TC, señalan que la “prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal y excepcional” (2002).

Empero en este argumento tal como señala el jurista argentino Eugenio Raúl Zafaroni se incurre en una falacia normativa al confundir el ser con el debe ser, por cuanto la prisión preventiva no alcanza ser aparejada como una régimen cautelar porque no cumple con los presupuestos de una medida cautelar (verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela), además ésta tiene una identidad con la pena individual de libertad lo cual es examinado por el propio Tribunal Constitucional¹².

En tanto que otra sección de la doctrina al cual nos adherimos coherentemente señala que, la detención provisoria judicial es una institución penal por cuanto cualesquiera sean el fin o el nombre que se conjugue

¹² Mas allá de los distintos presupuestos que justifican el dictado, de un lado, de una detención preventiva, y, de otro, de una pena privativa de libertad, lo cierto es que los efectos personales generados por el dictado de una u otras son sustancialmente análogos. No solo resulta que ambas son cumplidas en un establecimiento penitenciario, sino que, en los hechos, producen el mismo grado de limitación de la libertad personal, la misma cesación de encierro, las misma aflicción psicosomática que conlleva la separación del núcleo familiar, la imposibilidad de desempeñar el empleo, y, en general, el brusco quiebre que representa el tránsito de una vida desarrollada fuera de las paredes de un penal, a una sometida al férreo régimen disciplinario propio de un cetro de reclusión(Exp. 1445-2002-HC/TC/2002).

(medida cautelar, medida no penal, etc.) es pena anticipada, antes del veredicto definitivo y tales calificativos de medida cautelar, medida no penal, etc., solo son una simulación de etiquetas; porque no son simples palabras sino de hechos.

2.2.8. Derecho de Presunción de Inocencia.

- Su Nacimiento Histórico.

“Si bien es posible encontrar referencias del derecho de presunción de inocencia en el Derecho Romano, fundamentalmente influido por el Cristianismo, éste se vio invertido por las actividades inquisitivas de la baja Edad Media” (Raña, 2007, p. 02).

“Así, es solo en la Edad Moderna que autores como Hobbes, Montesquieu y Beccaria, por mencionar algunos, ratifican este principio” (Raña, 2007).

Raña (2007), indica que Beccaria, señala en su obra capital “De los Delitos y de las Penas” instituye que la presunción de inocencia es un principio necesario, manifestando que: “Una persona no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad podrá quitarle la pública protección hasta cuando esté decidido que ha quebrantado los pactos sobre los que fue concedida” (Raña, 2007, p. 02).

“En el siglo XVIII se transforma una de las proposiciones fundamentales de la reforma liberal ante el sistema represivo imperante en la época, pues en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sanciona en forma explícita” (Raña, 2007, p. 02).

“Como es sabido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano forma un hito intrínsecamente del movimiento iluminista que protestó a una organización político-social totalitaria” (Raña, 2007, p. 02).

Este “tenía como uno de sus primordiales herramientas un modelo de justicia penal represiva, basado en las pruebas legales y en uso incontrolado de la tortura como medio válido para lograr la confesión” (Raña, 2007).

“Según la línea del sistema inquisitivo prerrevolucionario, el procesado no era apreciado como un simple sospechoso, por el contrario se le estimaba culpable, al que le correspondía el deber de arruinar las presunciones de culpabilidad, expresando su inocencia”.

Ya que “respondía a que en este tipo de enjuiciamiento se transformó el aforismo *actori incumbit probatio* lo que acarrió como resultado natural, inclusive después de la comprobación de la carencia de pruebas, medidas cautelares de carácter personal” (Raña, 2007, p. 02).

“Así, la representación inquisitiva de procedimiento criminal de la Edad Media, fue herramienta enérgica para uno de los razonamientos de la corriente absolutista, que gozó su desarrollo a mediados de la Edad Moderna”.

Esto significaba en “el poder de castigar entre los atributos personales del soberano unido a la potestad de prisión extraprocesal, mediante los cuales el rey o sus representantes disponían arbitrariamente de la liberación de sus súbditos, sin ningún juicio” (Raña, 2007, p. 03).

“Toda esta potestad del despotismo, que hizo y abusó de sus desmedidos poderes en el ámbito político como en lo judicial, el cual no resultó suficiente a

efectos de detener la creciente infracción claramente relacionada con el proceso fructuoso forjado por la Revolución Industrial” (Raña, 2007).

Así también con “la creciente migración de la población rural hacia las ciudades. Se hizo necesaria una reestructuración de la justicia penal, la máxima era: “no castigar menos, pero castigar mejor” (Raña, 2007, p. 03).

“La diatriba apta al Derecho represivo y a todo el sistema político que lo mantenía, apareció de la mano de la corriente iluminista del siglo XVIII” (Raña, 2007).

Pues en palabras de Juan Bustos Ramírez, citado por Raña, (2007): “se determinó por ser racionalista, utilitario y jus naturalista, siendo sus exponentes más importantes Montesquieu, Voltaire y Rousseau, entre otros; intelectuales que fundaron la idea reformista del sistema político-social que dominaba la persona y los derechos de la persona” (p.03).

“Decidida fue la opción de Montesquieu por la defensa de los inocentes sin desigualdad, aptitud que tiene toda persona previo una condena criminal, proposición en que fundamentó la relación entre libertad y seguridad del ciudadano” (Raña, 2007). A ello escribe Montesquieu:

“La libertad política reside en la seguridad, o en creer que se tiene la seguridad. Con lo que la seguridad nunca más estará enlazada con las acusaciones públicas o privadas. Como consecuencia de la bondad de las leyes criminales obedece primordialmente la libertad del ciudadano” (Raña, 2007).

De tal modo que “se puede aseverar juntamente con este autor que: cuando la inocencia de la persona no está asegurada, de igual forma lo está su libertad” (Raña, 2007, p. 03).

“Por su parte, Voltaire, fue uno de los más críticos del Derecho Penal de su tiempo y en atención a la Ordenanza Criminal Francesa de 1670, instó el juzgamiento por jurados en juicio oral y público; defendió la asistencia judicial por abogado” (Raña, 2007, p. 03).

Pues, “apoyó el sistema de inseparable persuasión en la apreciación de la prueba; estimó como irracional la tortura, resultado del sistema de prueba legal y defendió la libertad de defensa” (Raña, 2007).

“A su vez en Inglaterra, el utilitarista Jeremías Bentham forjó mención al estado de inocencia al reseñar sobre las cartas selladas, delimitadas por él cómo: “Un mandato de sancionar sin prueba, un determinado hecho contra el cual no hay ley”” (Raña, 2007, p. 04).

De esta manera “tratando el contenido de eliminar lo arbitrario como medio de evitar los abusos de autoridad” (Raña, 2007, p.04).

“Por otra parte, sin duda fue Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, el que logró más notoriedad en el análisis de las organismos penales de su época, materiales y procesales, siendo su única obra “De los Delitos y de las Penas”” (Raña, 2007).

Dado que “le importó inclusive el título de creador de la ciencia penal moderna. Confeso discípulo de Montesquieu, Beccaria demandó una reforma total en materia penal y procesal penal” (Raña, 2007).

Pues “observó el encarcelamiento como una medida preventiva, pena anticipada a lo que exigió para su nacimiento que la ley instituyera suficientes elementos que constituyeran una probabilidad satisfactoria sobre la participación del individuo en el supuesto delito que se le acusaba” (Raña, 2007).

Asimismo, “demandó el apartamiento en los espacios carcelarios entre acusados y convictos” (Raña, 2007).

El cual estaba “instituida en que: un hombre no puede ser aclamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede inhibir la pública protección sino cuando esté determinado que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida” (Raña, 2007).

Además, “favoreció el juicio por jurados en audiencia oral y pública, arremetió el régimen de prueba legal y estuvo por moderarlo, catalogando las pruebas legales en perfectas e imperfectas” (Raña, 2007).

“Beccaria es considerado como un bienaventurado mensajero de las ideas de la reforma cuyo mérito fue escribir sobre la necesidad de reestructurar el sistema penal de la época” (Raña, 2007).

Precisamente, pues “tanto material como procesal, consta que por la difusión que logró medió en la reforma de varias legislaciones penales” (Raña, 2007, p. 04).

“Finalmente se puede instituir que los intelectuales iluministas enaltecieron el estado de inocencia a un estado preponderante, siendo uno de los postulados esenciales de sus ideas reformistas en el marco de la justicia penal” (Raña, 2007).

El cual, “sustituía el proceso inquisitivo, por el de un procedimiento acusatorio, público y oral que cerciorara la igualdad entre la acusación y la defensa” (Raña, 2007, p. 04).

- Concepciones Jurídicas.

“La presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha ubicado en la categoría de derecho humano fundamental que tiene su valor en un doble plano”, Raúl Cárdenas Rioseso, citado por Raña, (2007).

Así, en un primer plano “opera en los escenarios extraprocesales y compone el derecho a tomar el miramiento a no ser tratado como autor o partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos” (Raña, 2007).

Y en segundo plano, “el referido derecho opera fundamentalmente en el ámbito procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba” (Raña, 2007, p. 04).

La significación de la presunción de inocencia, como expresión concreta “personifica una condición emocional de repudio al sistema procesal inquisitivo de la Edad Media, donde el acusado debía comprobar la improcedencia de la imputación de que era objeto” (Raña, 2007, p. 05).

“Los intelectuales revolucionarios manipularon para formular este principio fundamental del nuevo régimen de enjuiciamiento criminal, que cuenta con un fuerte contenido político en orden a avalar la libertad del acusado frente al interés social de la represión penal” (Raña, 2007).

En este sentido, dos terminologías que han sido el porque de la contienda doctrinal respecto de él: “así, el primero de ellos, presunción, viene del latín *présompction* derivación de *praesumptio-ónis*, que expresa idea anterior a toda experiencia; el segundo vocablo, inocencia, procede del latín *innocens* que significa virtuoso, característica del alma que no ha cometido pecado” (Raña, 2007, p. 05).

“Algunos juristas avistan al principio de inocencia como un aforismo jurídico que instituye la aptitud jurídica de no culpable penalmente, innato a la persona, situación de derecho que se tiene frente al *ius puniendi*” (Raña, 2007, p.).

“La cual es una condición a priori de la práctica y que, por tanto, tiene consecuencia absurda que sea probada por quien goza de ella, correspondiendo ser probada su pérdida con elementos objetivos y argumentos racionales” (Raña, 2007).

Argumentos, “por los órganos que practiquen la ocupación represiva del Estado, cuando una persona lesione o ponga en peligro los bienes jurídicos que la colectividad ha apreciado valiosos dignos de resguardar con la potestad punitiva de aquél” (Raña, 2007, p.05).

“Es obligatorio señalar que la presunción de inocencia simboliza una estado innato a la persona que, en tanto sujeto de derecho, puede ser objeto de persecución penal al existir probabilísticamente la posibilidad potencial de ser culpado de un delito” (Raña, 2007).

Como “consecuencia que exclusivamente alcanzaría sí y sólo sí se alcanza el grado de incertidumbre capaz, exigido en un ordenamiento jurídico dado, para

obtener la convicción de que la posibilidad infinitesimal que se tenía al empiezo del proceso penal” (Raña, 2007).

Que “se ha acrecentado de tal manera que, por elementos objetivos se ha reformado en la verdad procesal que se ve reflejado en una sentencia concluyente condenatoria, veracidad que aunque relativa” (Raña, 2007).

Esto “deviene de un raciocinio inductivo, es la única que se puede lograr y que como órganos de un Estado de Derecho se acepta implícitamente, porque es el medio dado para proteger valores que se estiman esenciales” (Raña, 2007, p. 05).

Con lo precedentemente determinado, “se tiene el cimiento de muchos institutos procesales, como el in dubio pro reo o el onus probandi, entre otras, dado que si los organismos del Estado, encargados de llevar a cabo la acción penal y la investigación de ella” (Raña, 2007).

Es evidente que no logran, por intermedio de elementos de prueba empíricos, “acrecentar la posibilidad infinitesimal, para una persona, de ser culpado de un crimen, se debe optar por considerar como verdad procesal la inocencia de aquélla, pues es ésta la situación la que apacienta de mayor grado de certeza” (Raña, 2007, p. 05).

- Naturaleza Jurídica.

Según Raña, (2007) “La presunción de inocencia sienta sus bases en postulados que denotan su naturaleza” (p. 06). Y continuando la doctrina descrita por Miguel Ángel Montañés Pardo, indica que la naturaleza jurídica son los siguientes:

- Como Garantía Básica del Proceso Penal.

“La presunción de inocencia es, en primer lugar, la percepción esencial en torno al que se edifica el modelo de procedimiento penal, concretamente el proceso penal de corte liberal, en el que se instituyen garantías para el imputado” (Raña, 2007).

“Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia forma, en el espacio legislativo, un límite al legislador en relación a la disposición de normas penales que significan una presunción de culpabilidad y conllevan para el acusado el deber de probar su inocencia” (Raña, 2007, p. 06).

- Como Regla de Tratamiento del Imputado.

Podemos entender también a la presunción de inocencia “como una premisa claramente referido al trato del procesado durante el procedimiento penal, acorde el cual habría de partirse del pensamiento de que el inculcado es inocente” (Raña, 2007).

Y, en consecuencia, “reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos del procesado en el decurso del proceso” (Raña, 2007, p. 06).

- Como regla del Proceso Penal.

“La primordial inclinación del derecho a la presunción de inocencia es conocido como regla probatoria del procedimiento penal” (Raña, 2007).

“La presunción de inocencia, en este sentido, puede suponer como una pauta directamente relatada al juicio de hecho de la sentencia penal, con acaecimiento en el espacio probatorio” (Raña, 2007).

Como agrega Raña, (2007) “conforme a la cual la prueba íntegra de la culpabilidad del procesado debe ser provista por la acusación, imponiéndose la absolución del imputado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada” (p.06).

- Como Presunción “iuris tantum”.

En cuanto presunción “iuris tantum”, “la presunción de inocencia” establece la supresión de la presunción contrapuesta de culpabilidad criminal de cualquier individuo durante el desarrollo del procedimiento, por apreciarse que no es culpable hasta que así sea declarado en Sentencia condenatoria” (Raña, 2007).

Porque, “el goce de una presunción (Iuris Tantum) con ausencia de culpabilidad, hasta que determinada conducta sea reprimida por la condena penal, posada en la acusación pública o privada, que contribuyendo pruebas procesales logre su aprobación por el Juez” (Raña, 2007).

“En relación a la figura de hechos subsumibles en el tipo delictivo, haciendo responsable al sujeto pasivo del proceso” (Raña, 2007, p.07).

- Como un Derecho Fundamental y Humano.

“La presunción de inocencia es parte del aparato constitucional de derechos, porque está sostenido y defendido tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (Raña, 2007, p. 08).

De acuerdo a Raña, (2007) “El artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas el 10 de diciembre de 1948” (p. 08), dispone que: “Todo individuo acusado de un delito cuenta con derecho a la presunción de su inocencia en tanto no se pruebe su culpabilidad, conforme a ley y en juicio público en el que se haya respetado todas las garantías suficientes para su defensa” (Raña, 2007).

“Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966” (Raña, 2007). Establece en su artículo 14.2 que “toda persona culpada de un delito tiene derecho a la presunción de su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad de acuerdo a ley” (Raña, 2007, p. 08).

“Los derechos fundamentales obtienen una extensión procedimental, en la forma que todos ellos deben respetarse en el proceso judicial, resultando ilegítimo e inconstitucional, si no se los observa en su avance o los vulnera en sus conclusiones” (Raña, 2007). “Lo que debe aseverarse de manera especial en el proceso penal, porque en él actúa el imperio del Estado en la manera más exagerada en la defensa social ante el crimen” (Raña, 2007). Esto “por medio de la pena, produciendo una honda injerencia en uno de los derechos más valorados de la persona, su libertad personal” (Raña, 2007).

En ese sentido, en este proceso penal el individuo se halla resguardada “por el derecho a la presunción de inocencia y demás derechos y garantías del procesado en las varias etapas del procedimiento (investigación, imputación, medidas cautelares, juicio oral, sentencia condenatoria, derecho al recurso)” (Raña, 2007, p. 09).

Asimismo, la lucha constante contra la delincuencia, afirma Raña, (2007) “manifiesta su superioridad ética en el Estado Constitucional Democrático respecto de otros tipos de Estado por el respeto y garantía cierta de los derechos fundamentales de toda persona, entre ellas, del imputado” (p. 09).

La presunción de inocencia establece para unos, un derecho y para otras personas una garantía. El español Jaime Vegas Torres, citado por Raña, (2007) presenta tres alcances:

“1) Como concepción primordial respecto del cual se construye todo un tipo de procedimiento penal, donde se mira fundamentalmente a establecer garantías para el inculcado ante la actuación punitiva estatal” (p.08).

“2) Como proposición directamente concerniente al tratamiento del inculcado durante el procedimiento penal, acorde al cual tendría de partirse de la idea de que el procesado es inocente y, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el imputado” (p.08).

“3) Como una pauta relatada al juicio de hecho de la sentencia penal, con acaecimiento en lo probatorio, conforme al cual, la prueba en su completitud de la culpabilidad del inculcado debe ser proveída por la acusación” (p. 08).
 “Imponiéndose la absolución del inculcado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada” (Raña, 2007, p 08).

“La presunción de inocencia como rotula RAMOS MÉNDEZ, es una situación de delantera que la constitución carga a la persona que se encuentra procesado” (Quispe, 2004, p. 167).

Nosotros siguiendo las líneas de TIEDMANN, citado por Quispe, (2004), podemos señalar que existen poderosas razones para afirmar que el presumir de inocente es el asiento del derecho penal actual y es “totalmente cierto, porque esta presunción que respeta seriamente al principio de la dignidad humana, sometido y portador de derechos individuales, no como un escueto objeto de persecución penal” (Quispe, 2004, p. 167).

“De este modo, en un estado constitucional de derecho, es preferente la existencia de culpables absueltos, no pudiéndose soportar la existencia de un inocente sufriendo una pena” (Quispe, 2004, p. 167).

“La presunción de inocencia, una de las más importantes conquistas de los modernos tiempos, se halla intrínsecamente concernida con un estado constitucional de derecho, por ello cuenta con un sitio privilegiado en los fundamentos del procedimiento penal actual” (Quispe, 2004).

“Tanto más cuando éste debe ser un maquil de los derechos y garantías constitucionales; el derecho procesal penal es el sismógrafo de la constitución” (Quispe, 2004, p. 167).

“Este sentido fundamental de la presunción de inocencia sobrelleva a que cualquier innovación del procedimiento penal que se establezca, no puede dejar a un lado su contenido” (Quispe, 2004).

Por ello es, importante tal como sostiene TIEDMANN, clarificar el significado y difundir su contenido, “a fin de que sea aplicada y desarrollada por nuestros magistrados y, de esta modo se originen desde los juzgados las fórmulas que guíen los cambios en el derecho procesal penal peruano” (Quispe, 2004, p. 167).

“La presunción de inocencia, mediante el cual se instituye que todo individuo es inocente en tanto no sea declarado judicialmente su culpabilidad, no es propiamente una presunción, en el sentido de las presunciones legales, generosamente precisadas en el derecho procesal penal” (Quispe, 2004).

Para ello, “debiendo entenderse la designación de presunción como una aprobación tradicional de nombre de este derecho, principio y garantía” (Quispe, 2004). Por ello “MAIER rotula que es uno de los límites más importantes al imperio del Estado” (Quispe, 2004, p. 168).

“Actualmente la presunción de inocencia exige, el tratamiento de no autor, para que actúe como una regla de tratamiento, es decir, como una actitud impuesta a favor del inculcado, que exige a los especialistas del derecho un comportamiento” (Quispe, 2004).

El cual “garantice al imputado, el tratamiento y consideración de un inocente hasta que una sentencia judicial declare condena, fundada en actividad probatoria suficiente para destruir la presunción, desplegándose además como una pauta de juicio que impone la obligación de la prueba” (Quispe, 2004, p. 168).

2.2.9. Significado de la Presunción de Inocencia.

El "principio de principios" “en materia de encarcelamiento preventivo es, sin duda, el principio de inocencia, también denominado presunción de inocencia” (Bivino, 2008, p. 12). “Este principio primordial del Estado de derecho es el punto de partida para analizar todos los problemas y aspectos de la privación de libertad procesal” (Abogados Jueñas, 2013, prr. 01).

“Según la formulación tradicional del principio, se impone una exigencia normativa que requiere que cualquier individuo sea pensada inocente hasta tanto no, se obtenga el pronunciamiento de una sentencia condenatoria firme que destruya el estado jurídico de inocencia” (Abogados Jueñas, 2013, prr. 02).

“Por ello, el imputado, a pesar de ser subordinado a persecución penal, debe recibir un tratamiento distinto de los individuos condenados” (Abogados Jueñas, 2013).

En esa línea, la CIDH ha establecido, al decidir un caso: "Este principio construye una presunción en favor del acusado de un delito según el cual, éste es considerado inocente mientras aún se haya establecido su responsabilidad penal mediante una fallo firme" (Abogados Jueñas, 2013).

“El comprendido de la presunción de inocencia, exige que `la sentencia de condena y, aplicación de una condena, sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla ante la objetividad de un hecho punible atribuible al acusado” (Abogados Jueñas, 2013, prr. 02).

“La exigencia impide que se trate como culpable a un individuo sólo sospechada de haber cometido una conducta delictiva, hasta que un tribunal competente no pronuncie una sentencia que afirme su responsabilidad e imponga una pena” (Abogados Jueñas, 2013, prr. 03).

"Según se observa la afirmación emerge directamente de la necesidad del juicio previo" (Abogados Jueñas, 2013).

“En tal ocasión se afirma que el inculpado es inocente durante el desarrollo del procedimiento o que la sociedad de una Nación gozan de un estado de

inocencia, en tanto no sean declarados culpables por sentencia firme” (Abogados Jujenías, 2013).

“Aun cuando respecto a ellos se haya abierto una causa penal y, cualquiera que sea el proceso de esa causa” (Abogados Jujenías, 2013).

“El principio no asevera que el inculcado sea, en verdad, inocente, es decir, que no haya participado en la perpetración de un hecho punible” (Abogados Jujenías, 2013).

“Su significado consiste, entonces, en atribuir a todo individuo un estado jurídico que exige un trato como inocente, sin importar, para ello, el hecho que sea, realmente, culpable o inocente por el hecho atribuido” (Abogados Jujenías, 2013, prr. 05).

Los términos "presumir inocente; reputar inocente o no considerar culpable; significa exactamente lo mismo; y, al mismo tiempo, estas declaraciones formales montan el mismo principio que emerge de la exigencia de un juicio previo para infligir una condena a una persona” (Abogados Jujenías, 2013).

En esa línea, el significado contemporáneo de la presunción de inocencia encuadra concerniente con la dignidad del hombre y opera cuando ocurre una imputación, es decir, incluso previo a la causa penal, a lo extenso del incluso más allá del mismo; pero entra en cuestión y deficiencia cuando se muestra la prisión preventiva judicial precedentemente del fallo firme, pues si es reputado inocente a un individuo entonces, por qué se procede en forma contraria de éste.

2.2.10. Regulación en el Derecho Positivo.

“La obligación de respetar el derecho de presunción de inocencia surge de diversos instrumentos internacionales” (Abogados Jueñas, 2013, prr).

“La Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 11, N° 1” (Abogados Jueñas, 2013, prr. 06), dispone que toda “persona culpada de delito goza del derecho a que se suponga su inocencia en tanto no se compruebe su responsabilidad de acuerdo a ley y en juicio público en que se hayan respetado todas las garantías de su defensa” (Abogados Jueñas, 2013).

“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 14, N° 2” (Abogados Jueñas, 2013), prevé: “Todo individuo inculpada de un delito goza del derecho a que se suponga su inocencia en tanto no se pruebe su culpabilidad de acuerdo a ley” (Abogados Jueñas, 2013).

“En las pautas mínimas para el tratamiento de los reclusos, regla 84, se instituye que “El inculcado gozará de una presunción de inocencia y así habrá de ser tratado en consecuencia” (11· 2)” (Abogados Jueñas, 2013), y que los no condenados “gozarán de un régimen especial” que se define en otras disposiciones (N° 3)” (Abogados Jueñas, 2013). “El Conjunto de Principios para la defensa de todos los individuos sometidas a cualquier forma de detención o prisión” (Abogados Jueñas, 2013). Dispone:

“Se presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o inculpada de un delito y se la tratará como tal mientras no haya sido probada su culpabilidad conforme al derecho en juicio público donde se haya respetado todas las garantías imprescindibles para su defensa” (principio 36, N° 1), y también que “Los individuos detenidos tomarán un trato adecuado a su estado de personas que no ha estado

condenada. En consecuencia, siempre que sea posible se las mantendrá separadas de los individuos presos" (principio 8)" (Abogados Jujeños, 2013).

"La CIDH entiende que el derecho de inocencia obliga al Estado a demostrar la culpabilidad del imputado respetando las garantías del procedimiento que protegen su equidad e imparcialidad" (Abogados Jujeños, 2013).

Agrega que conforme a "las normas internacionales, el acusado debe ser estimado inocente en tanto se compruebe su culpabilidad" (Abogados Jujeños, 2013).

"El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha desarrollado la importancia de la presunción contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (Abogados Jujeños, 2013).

En los términos siguientes: "En virtud de la presunción de inocencia, la obligación de la prueba recae en la acusación y el inculpado tiene el beneficio de la duda" (Abogados Jujeños, 2013).

"No puede suponerse a nadie culpable a menos que se demostró la acusación fuera de toda duda razonable" (Abogados Jujeños, 2013).

"Además, la presunción de inocencia envuelve el derecho a ser tratado como tal. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar la consecuencia de un proceso" (Abogados Jujeños, 2013, prr. 06).

"El reconocimiento del principio ofrece problemas en el derecho interno cuando se analiza su compatibilidad con la prisión preventiva judicial. El derecho constitucional comparado considera al principio como una de las pautas fundamentales del Estado de derecho" (Abogados Jujeños, 2013).

La Constitución de Guatemala, por ejemplo, instituye en su Art. 14 que: "Toda persona es inocente, en tanto no se haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada" (Abogados Jujeñas, 2013).

La Constitución de Costa Rica, de su lado, dispone en su Art. 39° que: "A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en atención de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa, mediante necesaria demostración de culpabilidad" (Abogados Jujeñas, 2013).

2.2.11. Contenido del Derecho de Presunción de Inocencia.

El contenido del derecho de presunción de inocencia son varios. "***En primer lugar***, éste exige la actuación de un juicio penal de determinadas características, como presupuesto indispensable para lograr la sentencia condenatoria capaz de echar abajo el estado jurídico de inocencia del imputado" (Abogados Jujeñas, 2013).

"A pesar que los autores suelen tratar a la evicción de juicio previo como una evicción independiente del principio de inocencia, tal exigencia es una de sus derivaciones" (Abogados Jujeñas, 2013).

El literal de la "Declaración Universal de Derechos Humanos, en este sentido, expresa este punto de vista" (Abogados Jujeñas, 2013).

Su Art. 11, N° 1, dispone que toda "persona imputada de delito posee derecho a que se presuma su inocencia en tanto no se compruebe su responsabilidad, de acuerdo a ley y en *juicio público* donde se hayan

respetado todas las garantías imprescindibles para su defensa" (Abogados Jueñas, 2013).

Una "**segunda exigencia** derivada del principio de inocencia se expresa mediante el aforismo in *dubio pro reo*, que requiere que el fallo de condenatorio y la aplicación de una sanción penal estén fundadas en la certeza del tribunal" (Abogados Jueñas, 2013).

Es por eso, que se señala "la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de echar abajo el estado de inocencia, construida por ley (presunción), que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución" (Abogados Jueñas, 2013).

"La tercera derivación del principio de inocencia radica en la atribución de la obligación de la prueba al órgano acusador, exigencia que se denomina *onus probando*" (Abogados Jueñas, 2013).

"Dado que el derecho de inocencia maniobra como un escudo que resguarda al inculcado, le incumbe al acusador-particular o estatal la tarea de mostrar elementos de prueba que demuestren con certeza los presupuestos de la responsabilidad penal del imputado" (Abogados Jueñas, 2013).

Eso en razón que el inculcado "no posee carestía de fundar su inocencia, ya edificada por la presunción que lo ampara, sino que, antes bien, quien lo condena debe destruir completamente esa posición, arribando a la certeza sobre la perpetración de un hecho punible" (Abogados Jueñas, 2013).

“El cuarto aspecto derivado de la garantía de inocencia requiere que el imputado sea tratado como inocente en la sustanciación del proceso” (Abogados Jujeñas, 2013).

“La consecuencia más importante de esta exigencia consiste en el reconocimiento del *derecho a permanecer en libertad* en tanto dure el proceso y precisamente este contenido del derecho de presunción de inocencia es vulnerado inevitablemente cuando se impone la prisión preventiva judicial” (Abogados Jujeñas, 2013).

2.2.12. Presunción de Inocencia como Mandato de Libertad: la Detención como Última Ratio.

El presumirse de inocente como pauta de libertad es incompatible inevitablemente con la prisión preventiva judicial, empero, el sistema interamericano de derechos humanos admite su excepcionalidad o de última ratio¹³, en ese sentido ALBERTO BOVINO señala: “El carácter excepcional de la reclusión preventiva surge claramente de la combinación del derecho general a la libertad de tránsito —de jerarquía constitucional— y la interdicción de emplear una sanción previo de que se ordene una sentencia condenatoria firme (principio de inocencia)”¹⁴ de forma que su imposición de conformidad a este procedimiento alega al requerimiento de extrema necesidad es por ello que la privación de la libertad solo puede ser autorizada cuando sea necesario y, en tanto, no cambiabile por ninguna medida de singular eficiencia pero menos gravosa. Es por eso FERRAJOLI sostiene el

¹³ Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en el artículo 9.3 que: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general ”

¹⁴ BOVINO, Alberto. Problemas del Derecho Procesal Contemporáneo. Editores del Puerto S.R.L. Primera Edición, Buenos Aires, mayo del 2006. Pág. 71 y SS

presumir de inocencia solo no es una presunción de no culpabilidad, sino es una presunción de no peligrosidad a mérito del cual tampoco será legítimo aplicar cautelas procesales para neutralizar la contingencia de reiteración delictiva, posibilidad de las situación de seguridad.

2.3. Definición operacional de palabras clave.

- 1.- **Prisión preventiva.-** Es la de falta de autonomía temporal dirigida al investigado de la perpetración de un delito en aguarda de la celebración del juicio y mientras dura el mismo, "el fiscal solicitó en la etapa preliminar prisión preventiva para aquellos acusados aduciendo que podían huir del país". "Es una providencia cautelar de forma personal que perturba el derecho de autonomía personal en un lapso más o menos de tiempo" (Wikipedia, s.f.).

- 2.- **Vulneración del Derecho.-** Transgresión, menoscabo, quebranto de una ley o precepto, la infracción de irrefutables leyes es castigado con la cárcel. La detención preventiva viene a ser un quebrantamiento de un derecho constitucional.

- 3.- **Presunción de inocencia.-** "La presunción de inocencia concierne a las garantías fundamentales del individuo y del procedimiento penal en cualquier Estado de Derecho. Por ello, todo individuo imputado, debe respetarse el Derecho individual ser estimado inocente" (Cardenas, s.f.). "La presunción de inocencia, calificada también como un **estado jurídico**, constituye hoy un derecho primordial reconocido constitucionalmente" (Cardenas, s.f.). "Lejos de constituir un simple

principio teórico de Derecho, simboliza un principio procesal insoslayable de todos; es el máximo respeto al imputado y uno de los pilares del procedimiento penal acusatorio” (Cardenas, s.f.).

- 4.- **Procesado.-** Someter a proceso penal dictando auto contra un reo: le procesaron por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, colusión, etc.
- 5.- **Imputado.-** “Individuo a quien se le imputa la perpetración o participación en un delito” (Cardenas, s.f.). La definición “de inculcado coloca un uso excluyente en el espacio judicial porque de ese modo se denomina a aquel individuo a la quien se le culpa la comisión de un determinado delito o su participación en algún acto delictivo” (Cardenas, s.f.). “En tanto, a la acción se la llama imputar, mientras a la acción y al efecto de imputar a alguien se la designa como imputación” (Cardenas, s.f.). “Desde luego, tres nociones que se emplean frecuentemente en el campo judicial y que los individuos que no constamos en éste acostumbramos oír frecuentemente en las noticias cuenta de ello” (Cardenas, s.f.).
- 6.- **Libertad.-** “La libertad es un significación indeterminado de dificultosa definición; en iniciación, está sujeta a la potestad que tiene todo ser viviente para realizar una acción de conformidad a su voluntad propia” (DefiniciónDe, s.f.). “A partir del siglo XVIII, la libertad comenzó unirse a otras facultades o virtudes como la justicia y la igualdad” (DefiniciónDe, s.f.). “Esta transformación social estuvo escoltado por el proceso de nuevas circunstancias de ordenación de la colectividad y el aparecimiento de sistemas políticos hasta aquella

vez inéditos” (DefiniciónDe, s.f.). “Un ser libre no está atado a la energía de otros de forma coercitiva. La libertad garantiza la obediencia por la voluntad individual y envuelve que cada uno debe hacerse responsable de sus actos” (DefiniciónDe, s.f.).

- 7.- **Indicios.-** “Conjetura o signo que viabiliza el discernimiento de algo que ha estado o va a ocurrir. Ejercicio o signo que facilita saber lo oculto. Cosa o signo que permite inferir algo de lo que no se tiene conocimiento directo” (Thefre Dictionary, s,f).
- 8.- **Acción penal.-** Conjunto de actuaciones de un juzgado para determinar la responsabilidad en un criminal. Conglomerado de períodos continuadas de un acontecimiento. Acumulado de instrucciones al cual se somete una cosa para transformarla un proceso informático.
- 9.- **Defensa.-** Circunstancia que exime de culpabilidad. Abogado o grupo de abogados que defienden al acusado en un juicio. Ejercicio y consecuencia de defender o defenderse. Protección, amparo.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Método, nivel y tipo de investigación.

Tipo de investigación.

- Por su finalidad es BÁSICA, porque, está dirigido a producir conocimientos y teorías o también destina su objetivo a la mejor agudeza de los fenómenos.
- Por el alcance es TRANSVERSAL, porque, está consagrado a analizar la correspondencia entre un vinculado de variables en un tiempo determinado.
- Por el diseño es no experimental, DESCRIPTIVO CORRELACIONAL.

Nivel de investigación:

La presente labor de tesis se enmarca dentro del nivel de investigación DESCRIPTIVA – CORRELACIONAL.

Métodos de Investigación.

General:

En esta tesis se utilizarán los métodos lógicos, que se pormenorizan a continuación:

- **Analítico–Sintético:** este método permitirá descomponer todo el problema en sus partes para luego ser estudiadas individualmente, y después de ello recomponer esas partes dispersas mediante la síntesis.
- **Inductivo-Deductivo:** Permitirá establecer particularidades de la problemática mediante el razonamiento mental; asimismo de efectuar un análisis de la particularidad, de todos los apuros que se exteriorizaron en el estudio, también permitió inferir ciertas conclusiones partiendo de aspectos generales, para arribar a aspectos particulares.
- **Histórico y Dialéctico:** Permitirá elaborar el marco histórico de los institutos forenses en estudio — la disposición de preventiva prisión y el derecho de presumirse de la inocencia— así como identificar su avance y cambios con el devenir del tiempo.
- **Método Comparativo:** Permitirá determinar semejanzas y diferencias de la regulación jurídica existente de los estudios jurídicos en exposición con otras legislaciones del mundo.

Específicos.

En el presente labor de tesis se utilizarán el método dogmático, hermenéutico, exegético para hacer estudio e exégesis de normas ordenadoras de la preventiva prisión y el derecho de presumirse de inocencia; además del método comparativo para hacer la exposición comparativa de los estudios materia de exposición en el derecho confrontado con otros del mundo y finalmente se utilizó el método

jurisprudencial para analizar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia y también de Tribunal Constitucional de los temas de estudio.

3.2. Operacionalización de variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	TÉCNICAS	ESCALA DE MEDICIÓN E INSTRUMENTOS
V. INDEPENDIENTE (X) Prisión preventiva judicial	<p>“La prisión preventiva” se “vincula con el objeto de probar” los hechos referido a la imputación, la punibilidad y la determinación de la “pena o medida de seguridad”, así como los referidos a la “responsabilidad civil derivada del delito.” Destinada la “investigación preparatoria”, “expediente fiscal”, “prisión preventiva” y “juez de la investigación preparatoria”, se debe “interpretar” que dichos términos hacen referencia, respectivamente a “instrucción”, “expediente fiscal”, “mandato de detención” y “juez penal”</p>	<p>“Cuando existan fundados y graves elementos” de “convicción” para estimar “razonablemente la comisión de un delito” que “vincule al imputado como autor o partícipe del mismo”. “En la valoración” de la “prueba de los jueces” y “tribunales” “deberá observar las “reglas” de la “lógica”, la “ciencia” y las “máximas de la experiencia” y “expondrá los resultados obtenidos” y los “criterios adoptados”.</p> <p>“Hasta que no se exhiba prueba en contrario”.</p> <p>Art. 156, 158, 268 del CPP. D. Leg. 957. 2da. DCF de la ley Nro. 30076</p>	Medidas de coerción procesal penal	<p>“Resolución del Juez” de la “investigación preparatoria” “ordenando la medida coercitiva de prisión preventiva”.</p> <p>“Relación entre” la “prisión preventiva judicial” y la “presunción de inocencia”.</p> <p>“Efectos perjudiciales irreversibles e irreparables”.</p> <p>“Gravedad de la pena” que se espera “como resultado del procedimiento</p> <p>“Peligro de fuga” “Peligro de obstaculización”.</p>	<p>Análisis documental</p> <p>Encuesta</p> <p>Trabajo de gabinete</p>	<p>Cuestionario</p> <p>Ficha de análisis documental</p>
V. DEPENDIENTE (Y) “Presunción de inocencia”	<p>“Toda persona atribuida de delito” tiene “derecho a que presumamos su inocencia” “mientras no se compruebe su culpabilidad”, “conforme a ley y en juicio público” en el que se le sucedan afirmado todas las “garantías necesarias para su defensa”.</p> <p>La “Corte ha afirmado que”, en el “principio” de “presunción de inocencia” “subyace el propósito” de las “garantías judiciales”, al “afirmar la idea” de que “una persona es inocente” “hasta que su culpabilidad” es “demostrada”.</p> <p>Los DDFF reconocidos por la “Constitución y los Tratados” relativos a DDHH ratificados por el Perú, sólo podrán ser restringidos en el “marco del proceso”.</p>	<p>“La restricción de un derecho fundamental” requiere “expresa autorización legal” y se “impondrá con respeto” al “principio de proporcionalidad” y “siempre que”, en la “medida y exigencia” “necesaria”, existan “suficientes elementos de convicción”.</p> <p>(Art. 253 del CPP. D. Leg. 957) Ar. 11.1 de la “Declaración Universal” de los DDHH, Ar. 14.2 del “Pacto Internacional” de los “Derechos Civiles y Políticos”. Art. 8.2 de la “Convención Americana” sobre “Derechos Humanos”. Art. 2 Inc. 24 de la Constitución Política</p>	Derecho Fundamental Derecho Constitucional Penal	<p>“La defensa de la persona humana” y el “respeto de su dignidad”.</p> <p>“Conceptual”, “teórico” y “definición de la normatividad”.</p> <p>“Exclusión” de la “medida de coerción”.</p>	<p>Trabajo de gabinete</p>	<p>Ficha de análisis documental</p>

a) Hipótesis

Hipótesis General:

“La prisión preventiva judicial” “como medida de aseguramiento” de la “finalidad del proceso” “vulnera significativamente” el “derecho de presunción” de “inocencia del investigado”, en el Distrito judicial de Padre Abad, Ucayali, 2014 – 2015”.

Hipótesis Específicas:

- “Entre la prisión preventiva judicial” y el “derecho de presunción” de “inocencia del investigado”, existe una “relación directa”.
- “La prisión preventiva judicial, al “vulnerar el derecho” de “presunción de inocencia” del “investigado”, es “inconstitucional”.

b) Sistema de variables

Variable independiente.

“Prisión preventiva judicial”.

Variable dependiente.

“Presunción de inocencia”.

PROPUESTA DE INDICADORES

Variable independiente:

Prisión preventiva judicial.

- “Resolución del juez” de la “investigación preparatoria” ordenando la “medida coercitiva” de “prisión preventiva”.
- “Relación entre” la “prisión preventiva judicial” y la “presunción de inocencia”.

- “Efectos perjudiciales, irreversibles e irreparables”.
- “Gravedad” de la “pena que se espera” como “resultado del procedimiento”.
- “Peligro de fuga”.
- “Peligro de obstaculización”.

Variable dependiente:

“Presunción de inocencia”.

- “La defensa” de la “persona humana” y el “respeto de su dignidad”.
- “Conceptual, teórico” y “definición de la normatividad”.
- “Exclusión” de la “medida de coerción.”

c) Esquema del diseño

Este trabajo de tesis corresponde al diseño no experimental, descriptivo correlacional, correspondiéndole el siguiente esquema:

Ox **M** = muestra

M **r** **O** = observación

Oy **x,y** = variables

r = relación entre las variables

Unidad de análisis.

Esta investigación se circunscribió su estudio a las siguientes unidades de análisis:

PERSONAS:

- Magistrados
- Abogados.

DOCUMENTOS:

- Expedientes judiciales.
- Jurisprudencias.
- Doctrina.

INSTITUCIONES:

- Poder Judicial.

3.3. Cobertura de estudio**a) Población.**

Número total de magistrados que trabajan en el Distrito de Padre Abad, Ucayali, durante el período judicial 2014- 2015, con un total de **08 magistrados**, entre ellos: 03 fiscales penales, 02 fiscales civiles de familia, 01 juez en lo penal, 01 juez de familia y 01 juez paz letrado y **17 abogados** que litigan en el referido Distrito de Padre Abad.

b) Muestra.

La muestra objeto de análisis será de tipo no probabilística, por cuya causa y bajo criterio del investigador se trabajará con todos los magistrados que trabajan en el Distrito de Padre abad, los cuales que se indican en la población-muestra, **es decir: 08 magistrados y 17 abogados**, puesto que el general de magistrado y abogados, reúnen las condiciones necesarias tendientes al logro de una muestra de alto nivel de representatividad. $N = n$.

c) Delimitación geográfico-temporal y temática.

La investigación se realizó en el “Distrito de Padre Abad”, Departamento de Coronel Portillo – Pucallpa, Región Ucayali, durante el periodo del 2014 al 2015

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos**3.4.1. Encuesta.**

Regentada a la muestra seleccionada, observando criterios metodológicos para determinar sus términos, para lo cual previamente se confeccionó el cuestionario de preguntas.

3.4.2. Entrevista.

En la indagación se entrevistó a magistrados que trabajan en el Distrito de Padre Abad, Ucayali, seleccionados de la población, entrevistándolos en forma verbal, previo cuestionario de preguntas, tomando en cálculo las variables de estudio.

3.4.3. Documental.

Se efectuará un análisis en las sentencias de casos relacionados con la privación preventiva, con la entidad de reforzar la confección de los instrumentos.

3.4.4. Fichaje de información doctrinaria.

En la exploración se emplearon fichas de registro: bibliográficas, hemerográficas, website; de investigación: textuales, de resumen y comentario, con la intención de guardar búsqueda obtenida de

las diversas obras consultadas para luego analizarlas, procesarlas e interpretarlas acorde a criterios metodológicos adecuados.

3.5. Procesamiento y Análisis de los Resultados.

Los resultados se mostrarán en tablas y gráficos, los cuales han sido analizados aplicando la estadística descriptiva, seguidamente se procederán a analizarlos e interpretarlos.

Para el procesar de los datos se utilizaron las herramientas informáticas como: Excel, Word, otros, presentándose los resultados en cuadros de doble entrada y gráficos respectivamente, tomando a consideración las variables de investigación.

CAPITULO IV

RESULTADOS

Los resultados se indican en “cuadros” y “gráficos” y según las encuestas realizadas para finalizar con la prueba de hipótesis.

4.1. Guía de entrevista para los señores “magistrados” que “laboran” en el distrito de padre abad, Ucayali.

CUADRO Nº 1

1.- ¿Considera Ud., que es constitucional privar de la libertad al sindicato mediante la “prisión preventiva” judicial, antes de la “sentencia” firme, no “obstante” que a éste le asiste el “derecho” de “presunción de inocencia”?

CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	1	12,5%
NO	7	87,5%
TOTAL	8	100%

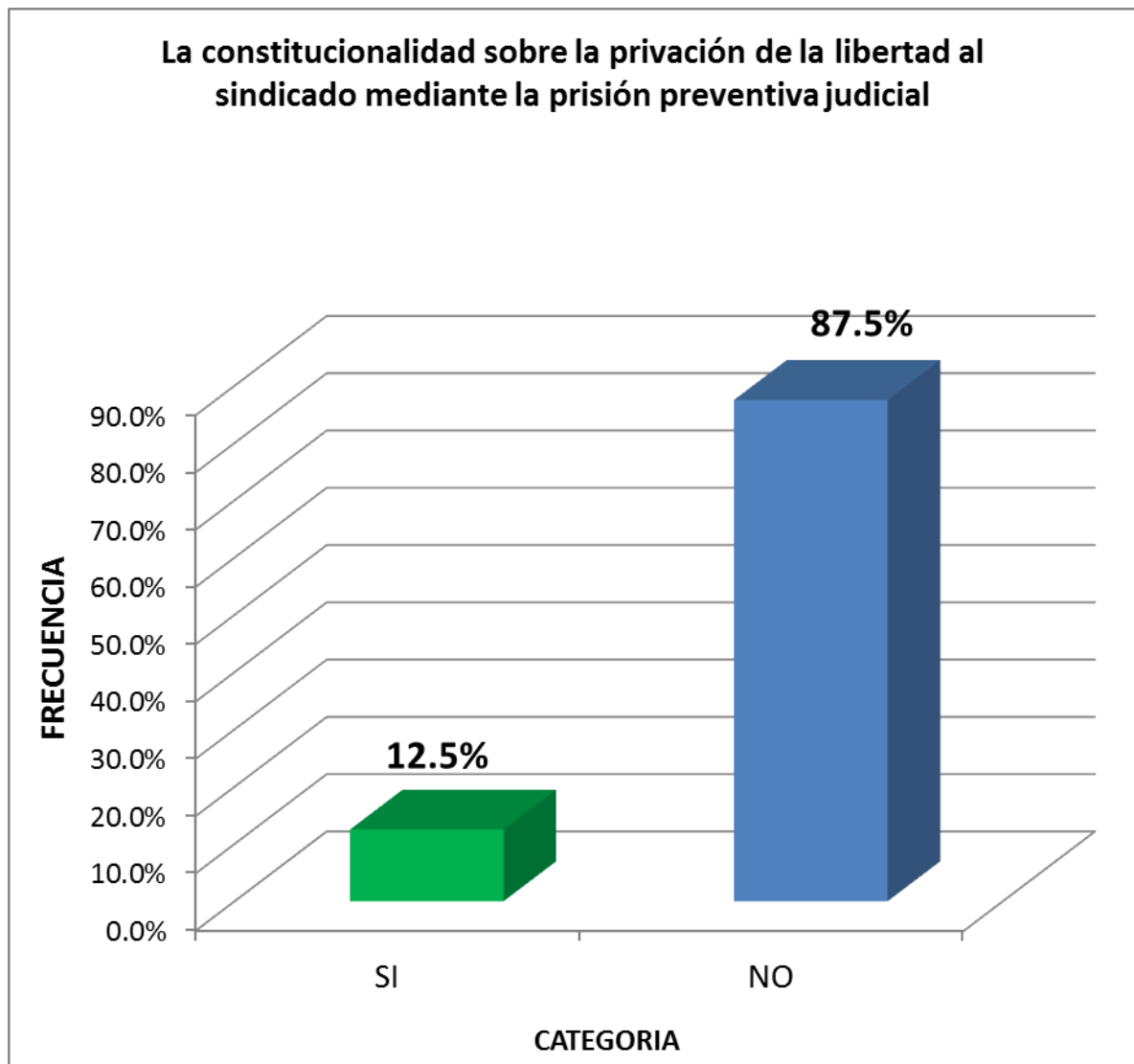
Fuente:

INTERPRETACIÓN

Se comprueba en el recuadro que, el 87,5% (7) magistrados encuestados consideran que no es Constitucional privar de la libertad al sindicato mediante la “prisión preventiva” judicial, antes de una “sentencia firme” y, el 12,5% (1) magistrado considera que si es Constitucional la “aplicación” de dicha medida al sindicato a través de la “prisión preventiva” judicial, antes de una sentencia firme,

desprendiéndose que los mismos magistrados reconocen que, “privar de la libertad” al sindicado, mediante la “prisión preventiva” no es Constitucional.

FIGURA N° 1



CUADRO Nº 2

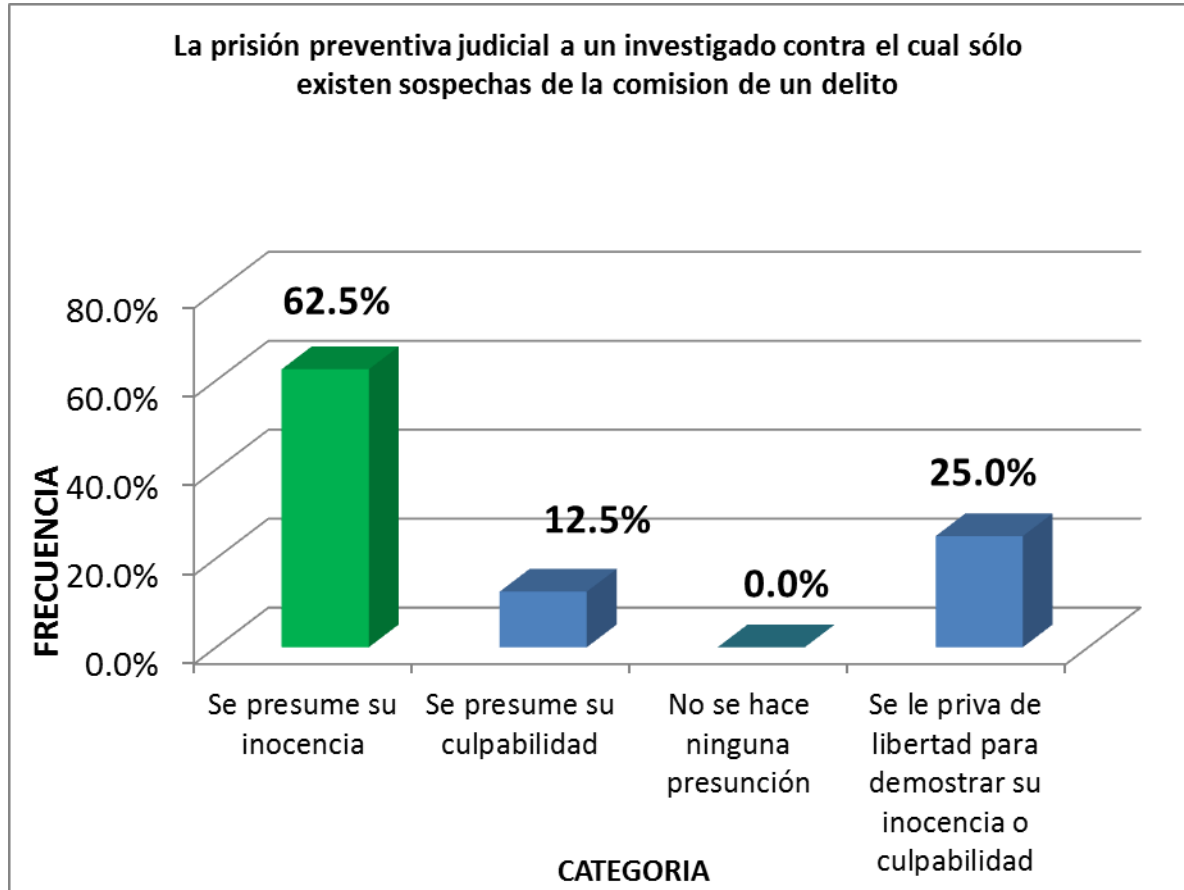
2. Cuando se impone la “prisión preventiva” judicial a un investigado contra el cual sólo existen sospechas, que hacen “suponer que ha cometido” o participado en la “comisión de un delito” ¿Qué se presume de éste investigado?

CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Se “presume su inocencia”	5	62,5%
Se presume su culpabilidad	1	12,5%
“No se hace ninguna presunción”	0	0,0%
Se le “priva de su libertad” para “demostrar” su “inocencia o culpabilidad”	2	25,0%
TOTAL	8	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

En el recuadro se advierte que, el 62,5% (5) magistrados indican que, cuando se impone la medida de “prisión preventiva” judicial a un investigado contra el cual sólo coexisten sospechas de que ha incurrido en la “comisión de un delito”, se presume su inocencia, el 25% (2) magistrados encuestados indican que, se le “priva de su libertad” para “demostrar su inocencia” o culpabilidad, el 12,5% (1), magistrado encuestado indica que, se impone prisión preventiva judicial al investigado cuando se presume su culpabilidad.

FIGURA Nº 2

CUADRO Nº 3

3. ¿Qué efectos representa la “prisión preventiva” judicial, cuando quien sufre resulta declarado inocente “después” de un largo proceso penal?

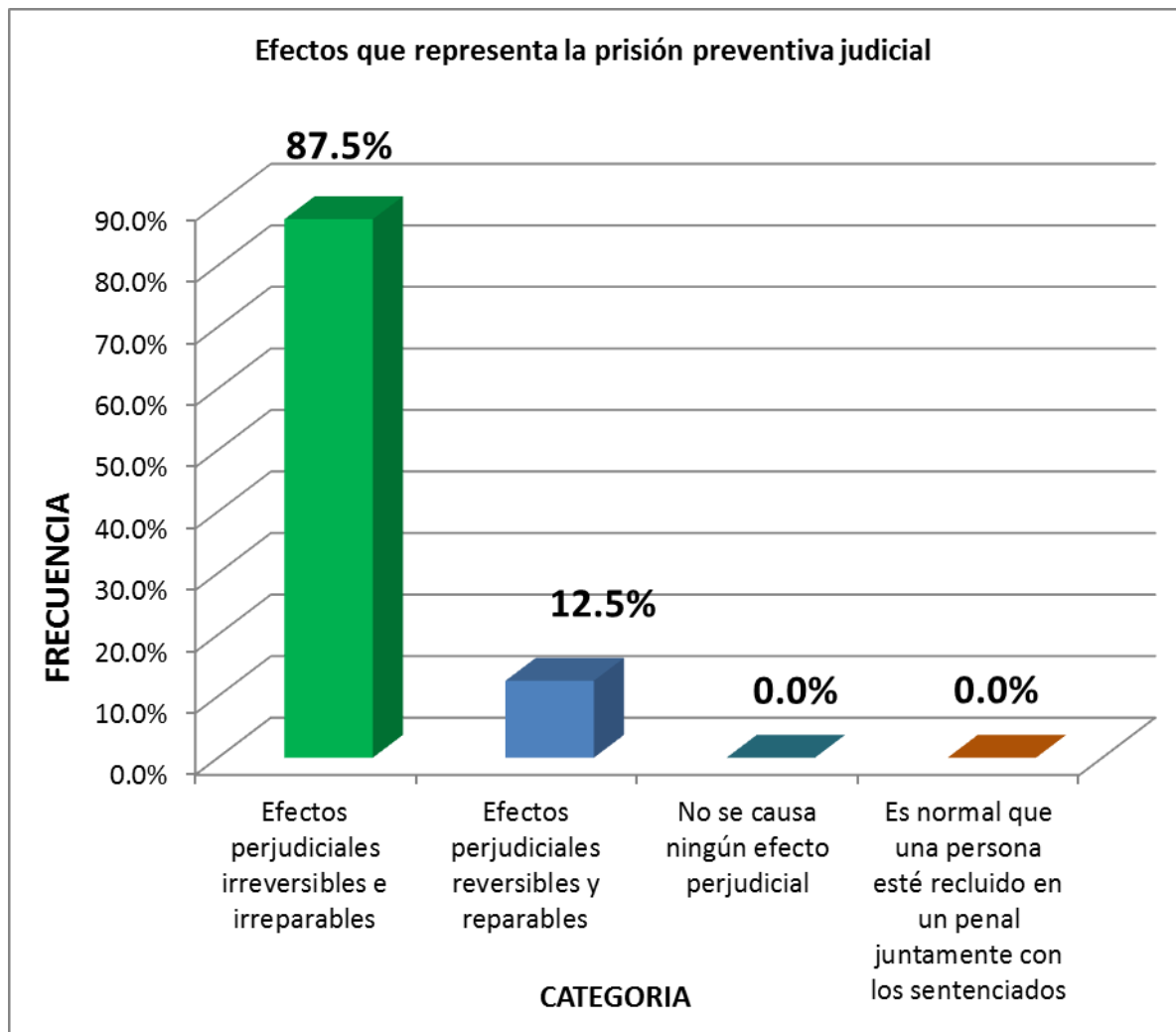
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Efectos perjudiciales “irreversibles e irreparables”	7	87.5%
Efectos perjudiciales reversibles y reparables	1	12.5%
No se causa ningún efecto perjudicial	0	0.0%
Es normal que “una persona esté” recluso en un penal juntamente con los sentenciados	0	0.0%
TOTAL	8	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

En el recuadro se advierte que, el 87,5% (7) magistrados encuestados “indican que la medida” de “prisión preventiva” representa efectos perjudiciales “irreversibles e irreparables”, el 12,5% (1), magistrado indica que, la “prisión preventiva” judicial representa efectos perjudiciales reversibles y reparables.

FIGURA Nº 3



CUADRO N° 4**4. “¿Qué relación existe entre la “prisión preventiva” judicial y la “presunción de inocencia” del investigado?”**

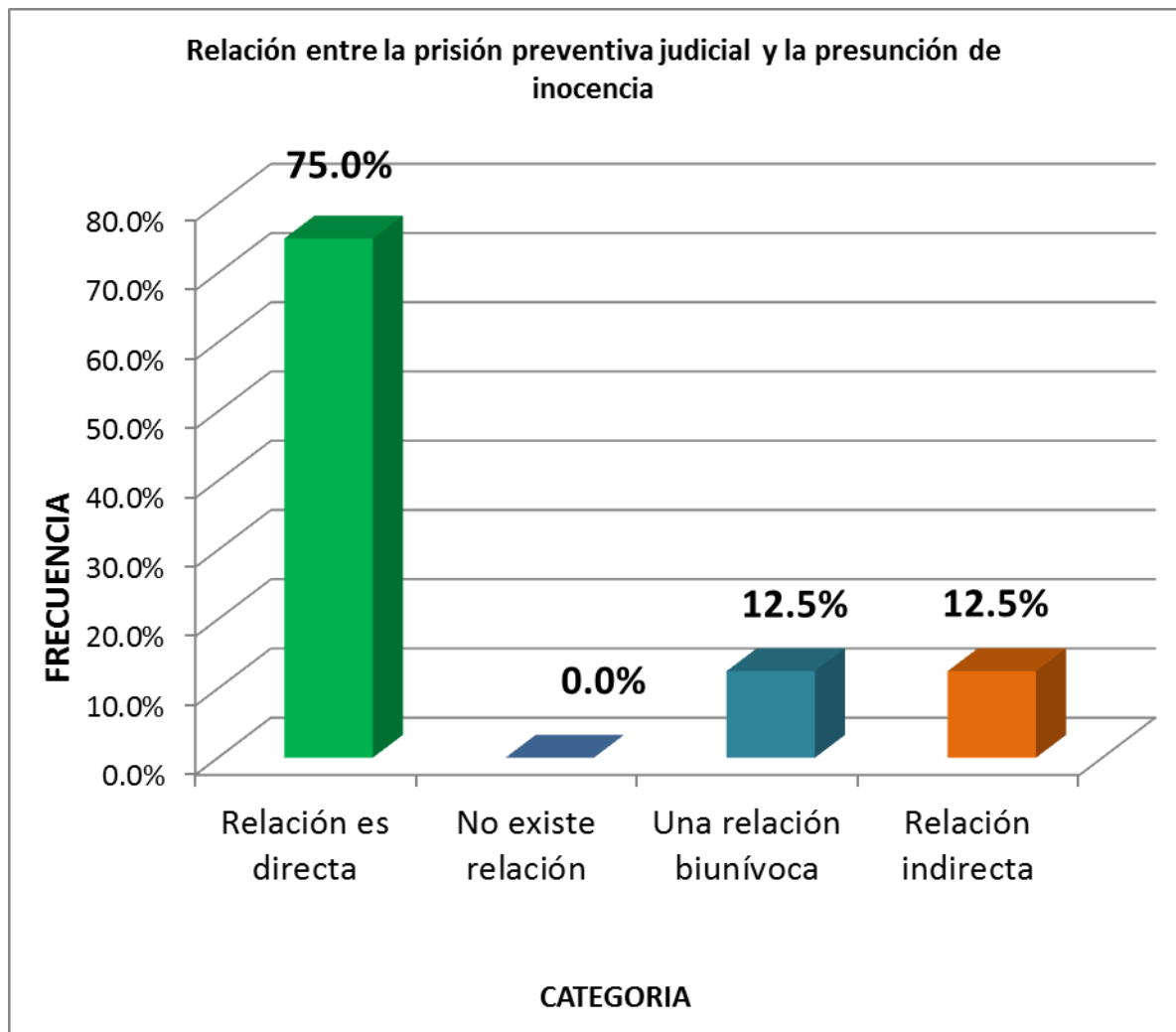
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Relación es directa	6	75,0%
No existe relación	0	0,0%
Una relación biunívoca	1	12,5%
Relación indirecta	1	12,5%
TOTAL	8	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

En el recuadro se advierte que, el 75% (6) magistrados refieren que, existe una “relación directa” entre la “prisión preventiva” judicial y la “presunción de inocencia” del investigado, el 12,5% (1) magistrado encuestado indica que, existe una relación biunívoca y otro 12,5% (1) magistrado indica que existe una relación indirecta entre la “prisión preventiva” y la “presunción de inocencia” del investigado.

FIGURA Nº 4



CUADRO Nº 5

5. ¿Cómo considera Ud., en su condición de Magistrado, ordenar la “prisión preventiva” judicial en contra del investigado, con el “argumento de la gravedad” de la “pena que se espera” como “resultado del procedimiento”?

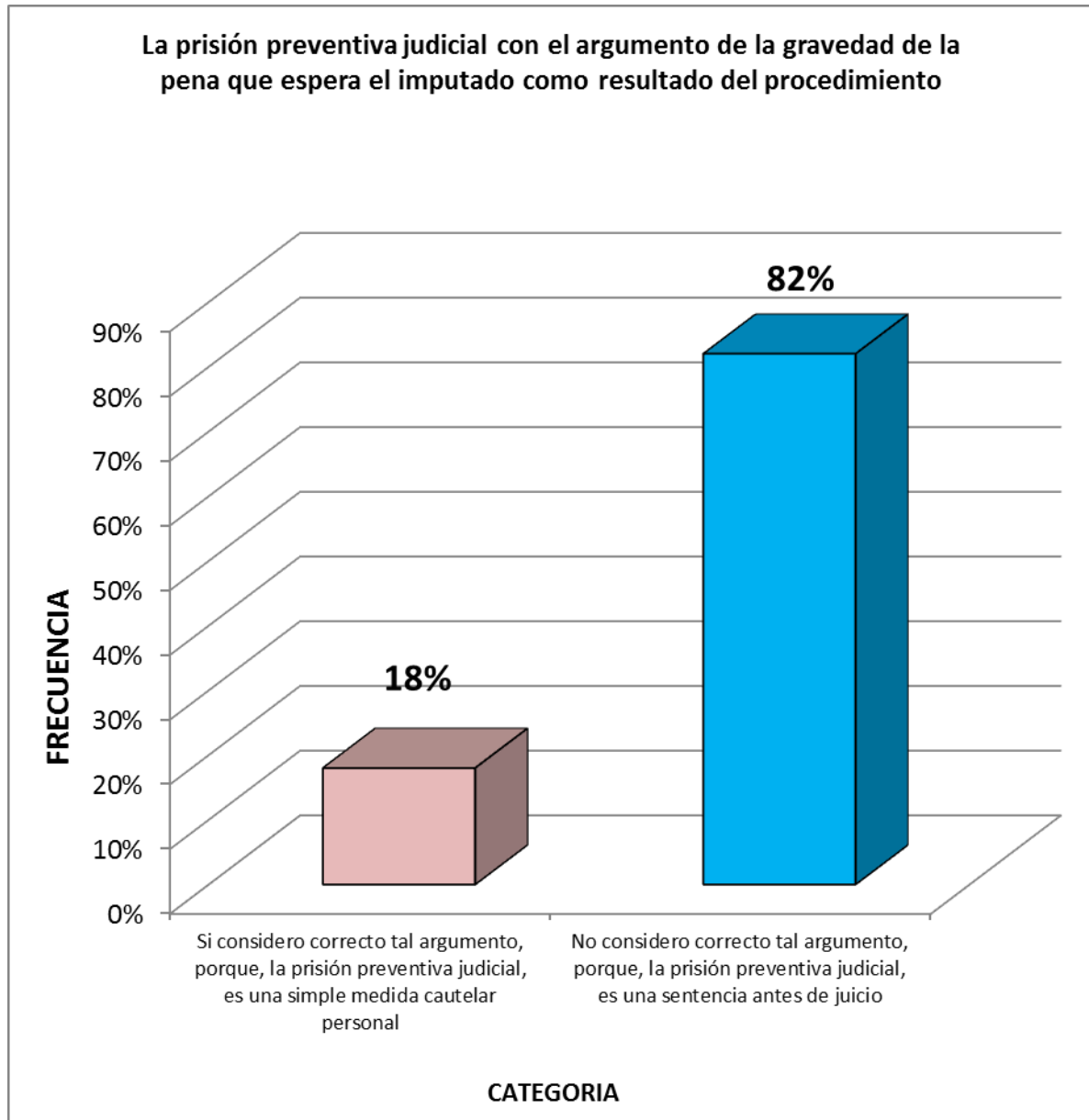
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCEN TAJE
Si considero correcto tal argumento, porque, la “prisión preventiva” judicial, es una simple “medida cautelar personal”.	3	37,5%
No considero correcto tal argumento, porque, la prisión preventiva judicial, es una sentencia antes de juicio	5	62,5%
TOTAL	8	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

Según el cuadro se advierte que, el 62,5% (5) magistrados indican que, no consideran correcto tal argumento, porque, la “prisión preventiva” es una sentencia antes de juicio y, el 37,5% (3), si consideran correcto tal argumento, porque dicha medida es una simple medida cautelar personal.

FIGURA N° 5



CUADRO Nº 6

6. Ud., en su “condición de magistrado” ¿considera correcto ordenar la “prisión preventiva” judicial del investigado con los “argumentos de peligro de fuga” y peligro de obstaculización?

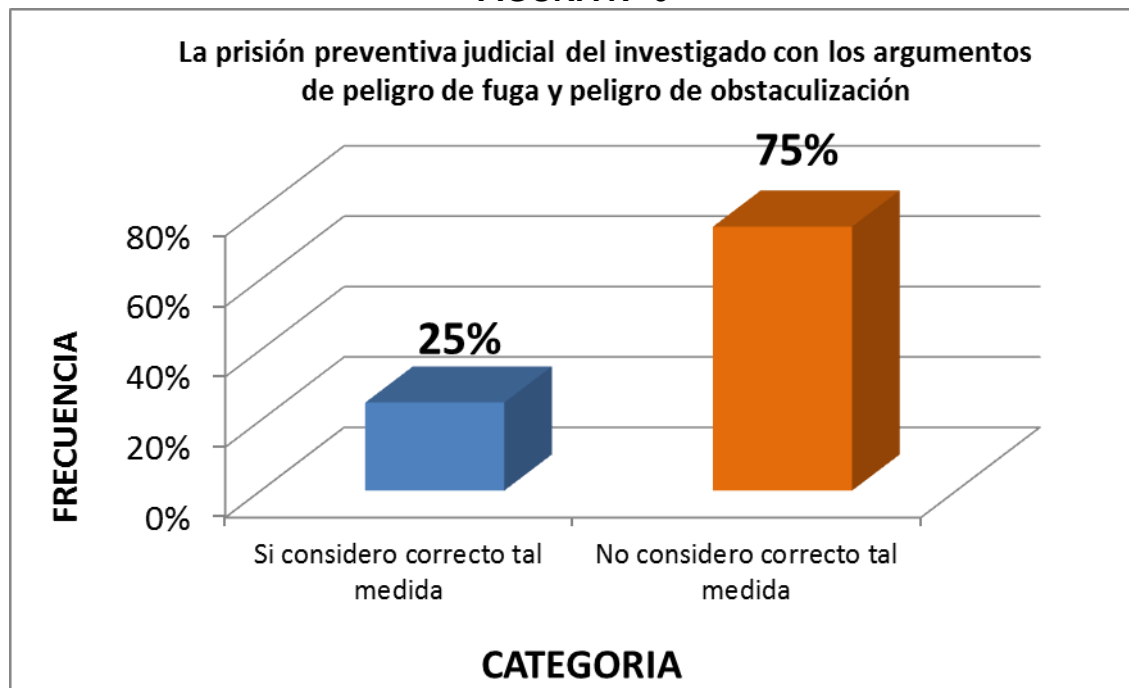
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si considero correcto tal medida	2	25%
No considero correcto tal medida	6	75%
TOTAL	8	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

Se advierte “en el cuadro que”, del total de 8 magistrados encuestados, el 75% (6) magistrados no consideran correcto tal medida y, el 25% (2) magistrados si consideran correcto tal medida.

FIGURA Nº 6



CUADRO Nº 7

7. La “presunción de inocencia”, comporta la “exclusión” de cualquier “medida que conlleve coerción” en “contra de la libertad personal”, éste derecho termina cuando se impone la “prisión preventiva” judicial a un investigado antes de la “sentencia firme”: ¿Ud., en su “condición” de magistrado, como considera ésta afirmación?”

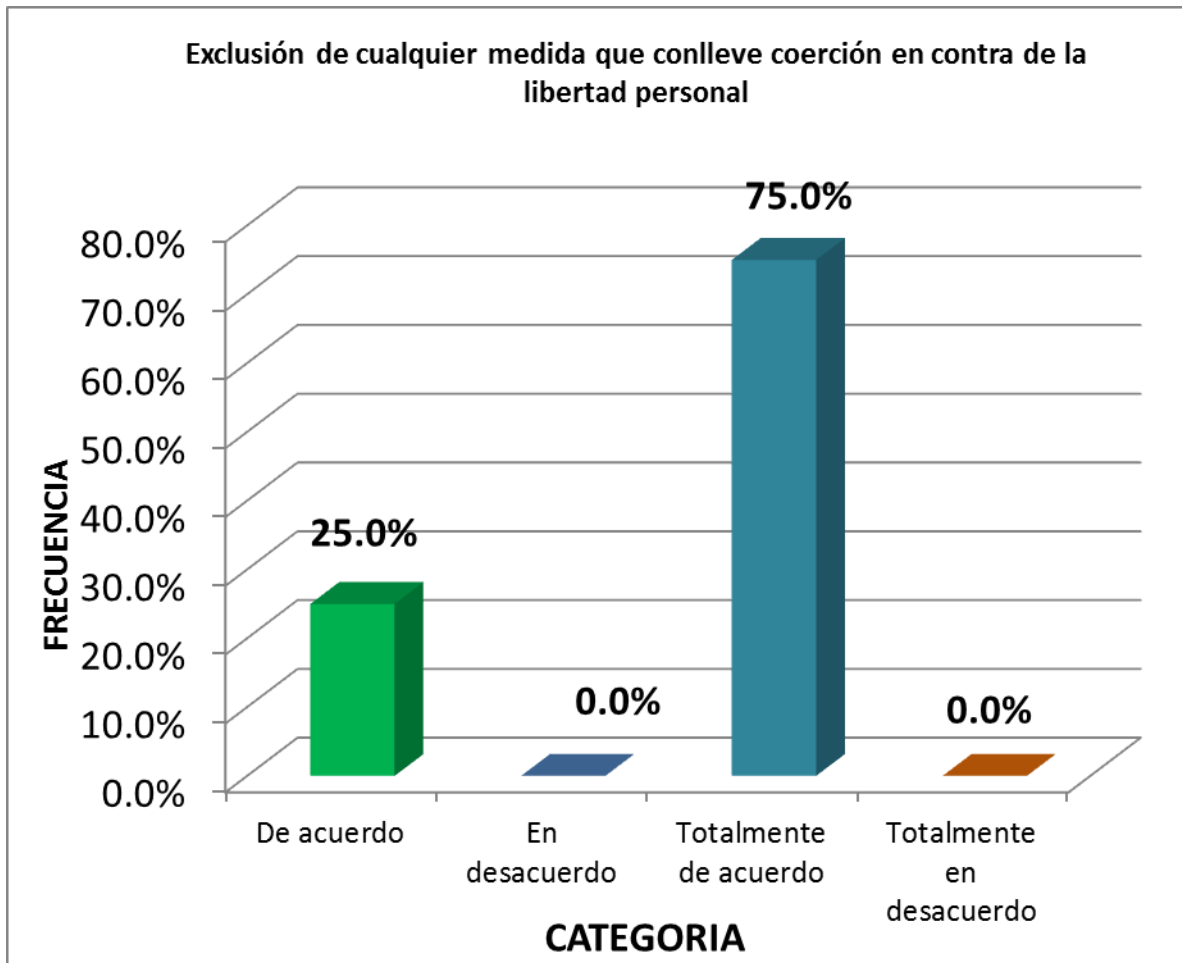
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
De acuerdo	2	25.0%
En desacuerdo	0	0.0%
Totalmente de acuerdo	6	75.0%
Totalmente en desacuerdo	0	0.0%
TOTAL	8	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

Como se anota en el presente recuadro, el 75% (6) magistrados refieren, estar cabalmente de acuerdo con la “supresión” de “cualquier medida que conlleve” a la “restricción de la libertad personal” y, el 25% (2) magistrados refieren lo contrario.

FIGURA Nº 7



CUADRO Nº 8

8. ¿Cómo considera Ud., la justificación de la “prisión preventiva” judicial, con el “argumento” de que ésta “no contradice” a la “presunción de inocencia” porque, no es una pena, sino una “medida cautelar” personal?

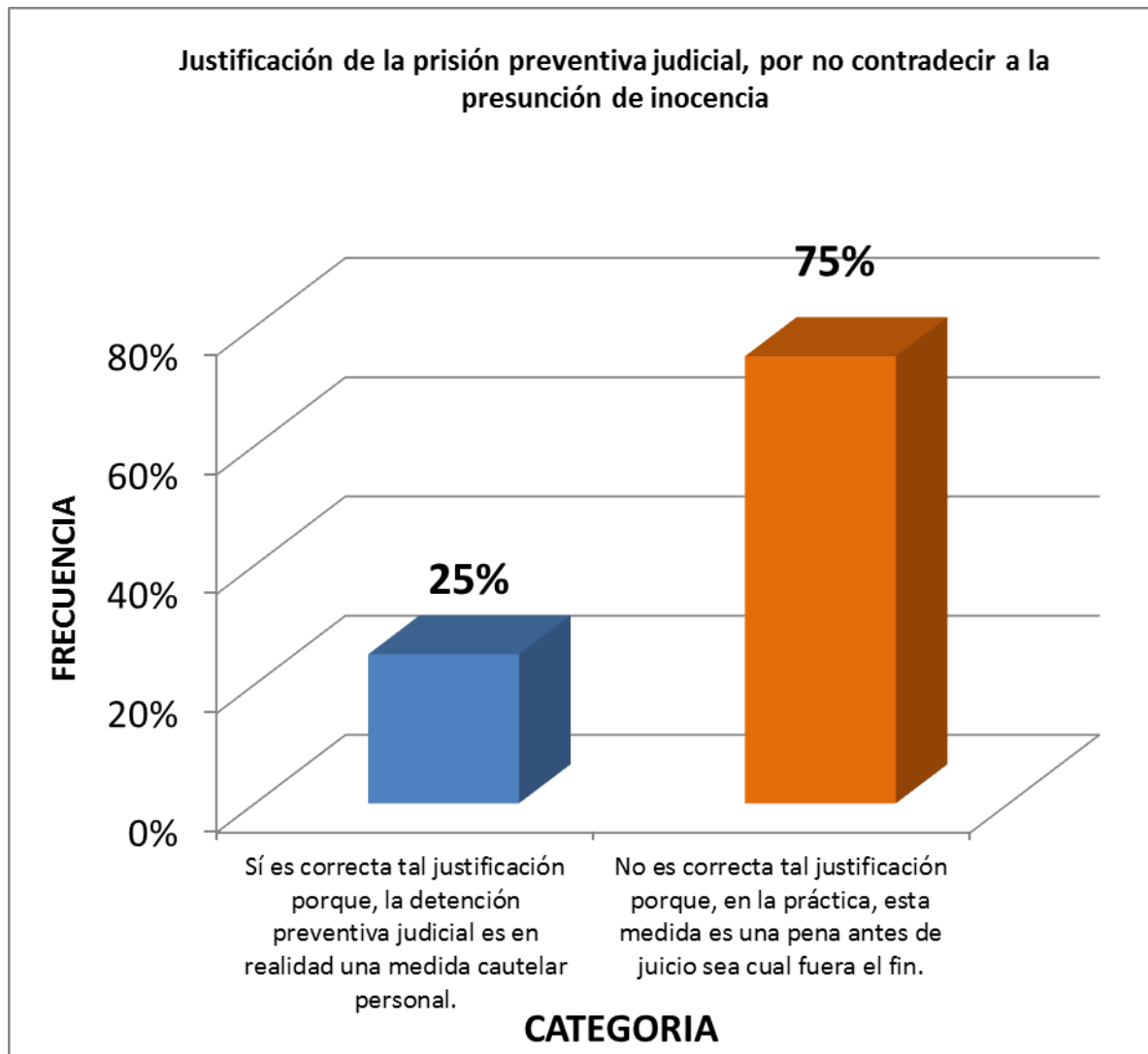
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sí es correcta tal justificación porque, la “detención preventiva” judicial es en realidad una “medida cautelar” personal.	2	25%
No es correcta tal justificación porque, en la práctica, esta medida es una “pena antes” de juicio sea cual fuera el fin.	6	75%
TOTAL	8	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

Se aprecia en el recuadro que, el 75% (6) de magistrados sostienen incorrecta tal justificación porque, en la praxis dicha medida es “una pena” “antes de juicio”, sea cual fuera el fin y, el 25% (2) magistrados indican que, si es correcta tal justificación porque, la “prisión preventiva” es en realidad una “medida cautelar” de carácter personal.

FIGURA Nº 8



CUADRO Nº 9

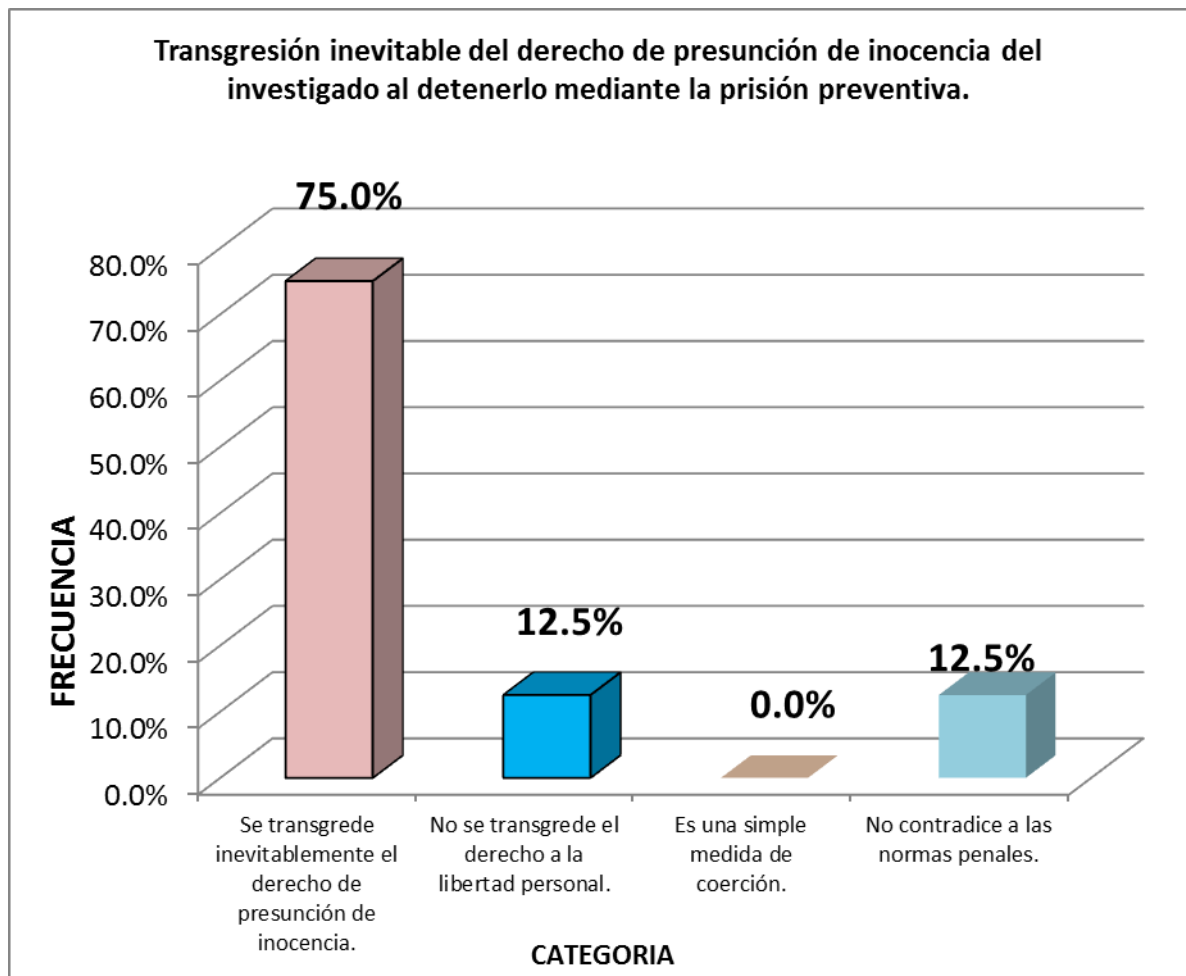
9. Según su criterio, cuando primero se detiene a un sindicado mediante la “prisión preventiva”, luego se investiga por la inocencia o culpabilidad del investigado ¿se transgrede inevitablemente el “derecho de presunción de inocencia” del investigado?

CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Se transgrede inevitablemente el derecho de “presunción de inocencia”.	6	75.0%
No se transgrede el “derecho a la libertad personal”.	1	12.5%
Es una simple medida de coerción.	0	0.0%
No “contradice” a las normas penales.	1	12.5%
TOTAL	8	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

El cuadro nos indica que, el 75% (6) de magistrados encuestados refieren que, cuando se opta en primer término por detener a un sindicado a través de la “prisión preventiva”, luego se investiga para determinar la inocencia o culpabilidad del imputado, se transgrede inevitablemente el “derecho a la presunción” de su inocencia, el 12,5% (1) magistrado indica lo contrario, mientras que el 12,5% (1) magistrado refieren que, no “contradice” a las normas penales.

FIGURA Nº 9

4.2. GUIA DE ENTREVISTA PARA LOS SEÑORES ABOGADOS LIBRES QUE “LABORAN” EN EL “DISTRITO DE PADRE ABAD”, UCAYALI.

Cuadro Nº 10

10. “¿Considera usted que es constitucional “privar de la libertad” al sindicado mediante la “prisión preventiva” judicial, antes de la “sentencia firme”, “no obstante” que “a éste le asiste” el “derecho de presunción de inocencia”?

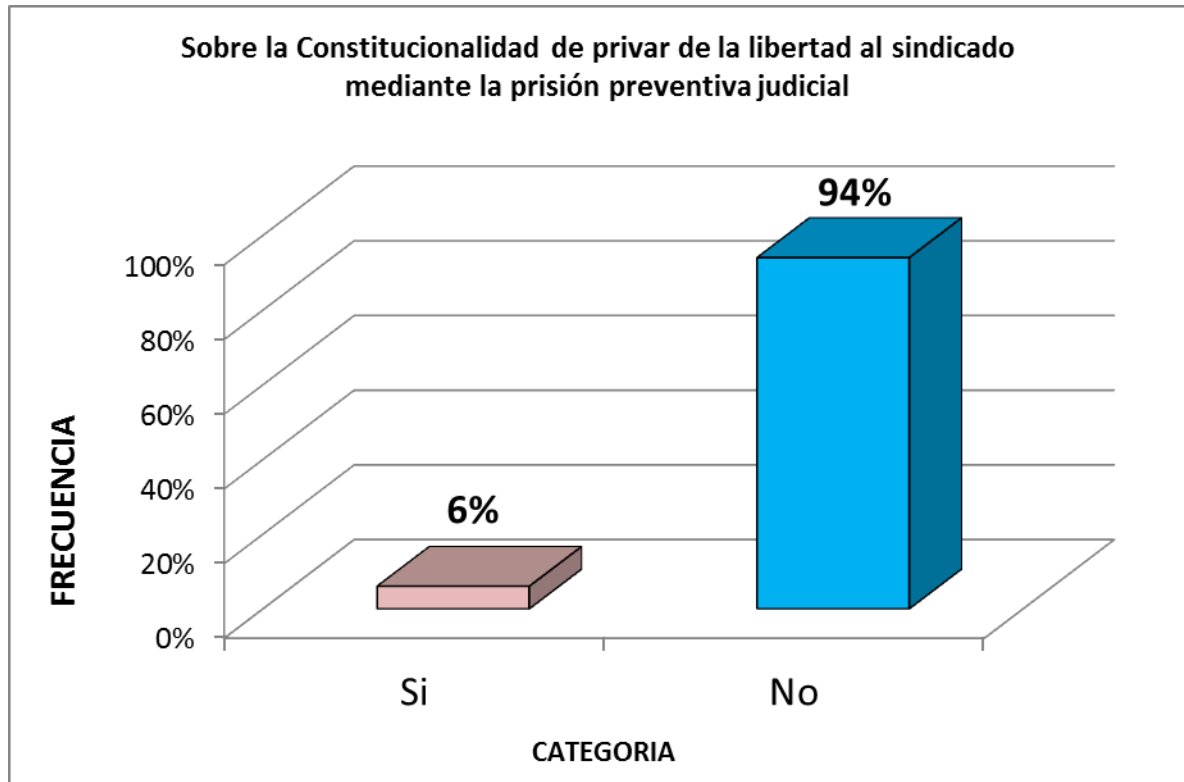
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	1	6%
No	16	94 %
TOTAL	17	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

En el presente cuadro nos indica que, el 94% (16) abogados encuestados consideran que no es Constitucional privar “de su libertad” al sindicado a través de la “prisión preventiva”, antes de la “sentencia firme” y, el 6% (1) abogado considera que si es Constitucional, coligiéndose que, los mismos magistrados reconocen que, “privar de la libertad” al sindicado mediante la “prisión preventiva” no es Constitucional.

FIGURA N° 10



CUADRO Nº 11

11. Cuando se impone la “prisión preventiva” judicial a un investigado contra el cual sólo existen sospechas, que “hacen suponer” que ha “cometido” o participado en la “comisión de un delito” ¿Qué se presume de éste investigado?

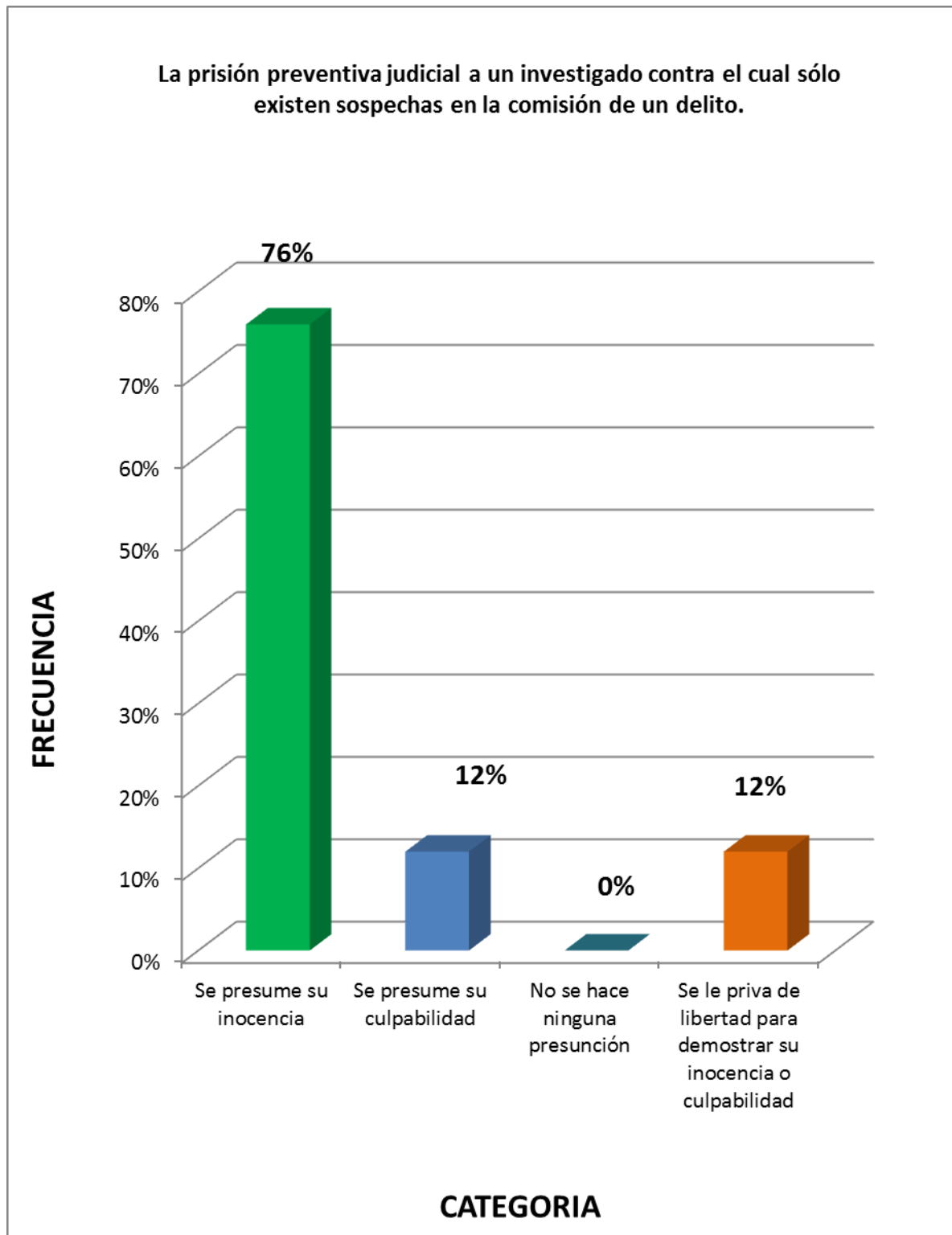
CATEGORÍA	FRECUENCIA	%
Se “presume su inocencia”	13	76%
Se presume su culpabilidad	2	12%
No se hace ninguna presunción	0	0%
Se le “priva de libertad” para “demostrar su inocencia” o culpabilidad	2	12%
TOTAL	17	100

Fuente:

INTERPRETACIÓN

En el recuadro se advierte que, el 76 (13) abogados encuestados indican que, cuando se impone la “prisión preventiva” a un investigado contra el cual sólo coexisten sospechas de la “comisión de un delito”, se presume su inocencia, el 12,0% (2) abogados indican que, se presume su culpabilidad, también el 12% (2), abogados indican que, se le “priva de su libertad” para “demostrar su inocencia” o culpabilidad.

FIGURA Nº 11



CUADRO Nº 12

12. “¿Qué efectos representa la “prisión preventiva” judicial cuando quien sufre resulta declarado inocente “después” de un largo proceso penal?”

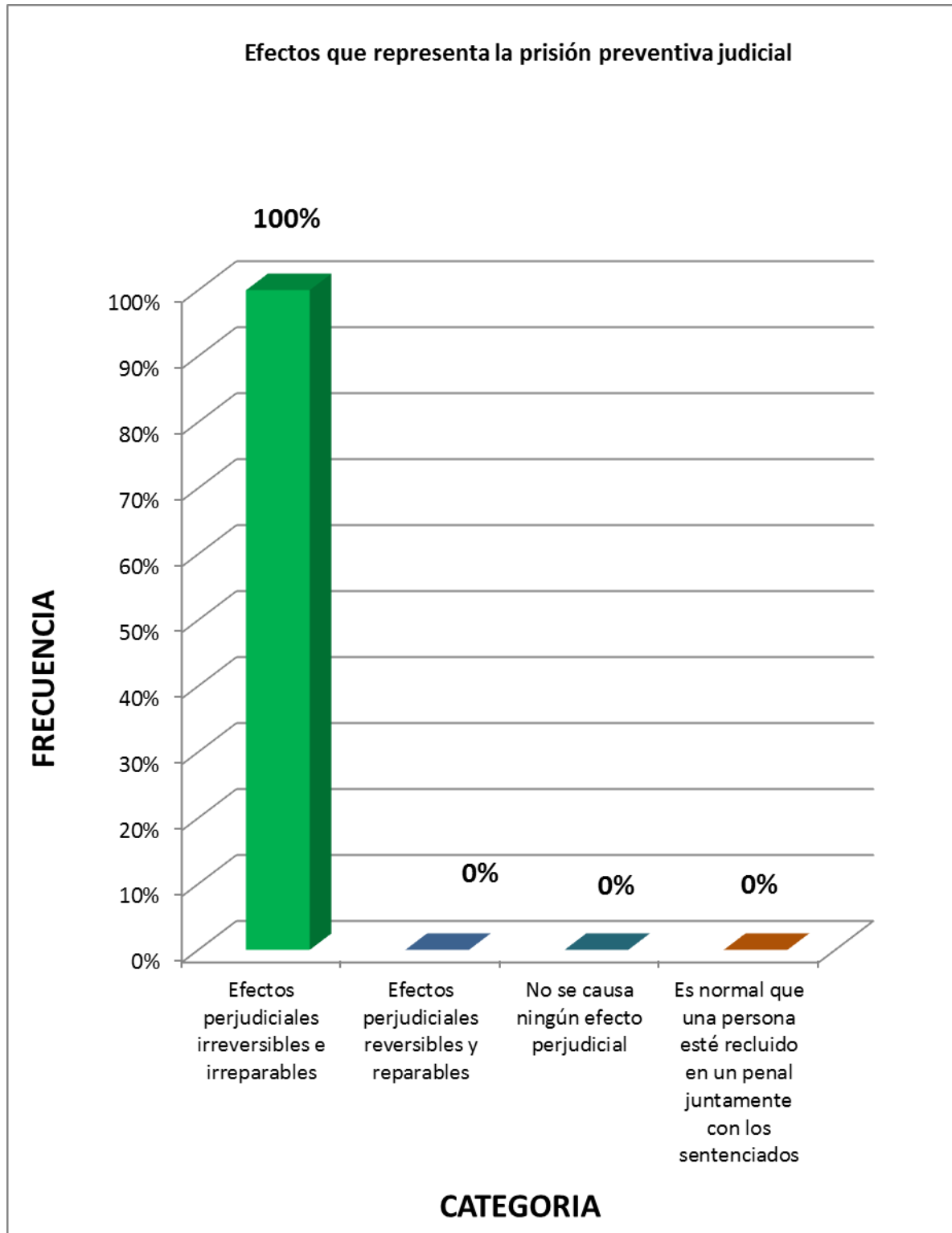
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCEN TAJE
Efectos perjudiciales irreversibles e irreparables	17	100%
Efectos perjudiciales reversibles y reparables	0	0%
No se causa ningún efecto perjudicial	0	0%
Es normal que una persona esté recluido en un penal juntamente con los sentenciados	0	0%
TOTAL	17	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

Como se coteja en el presente recuadro, el 100% (17), de abogados encuestados indican que la “prisión preventiva” representa efectos perjudiciales irreversibles e irreparables.

FIGURA Nº 12



CUADRO Nº 13

13. ¿Qué relación existe entre la “prisión preventiva” “judicial” y la “presunción de inocencia” del investigado?

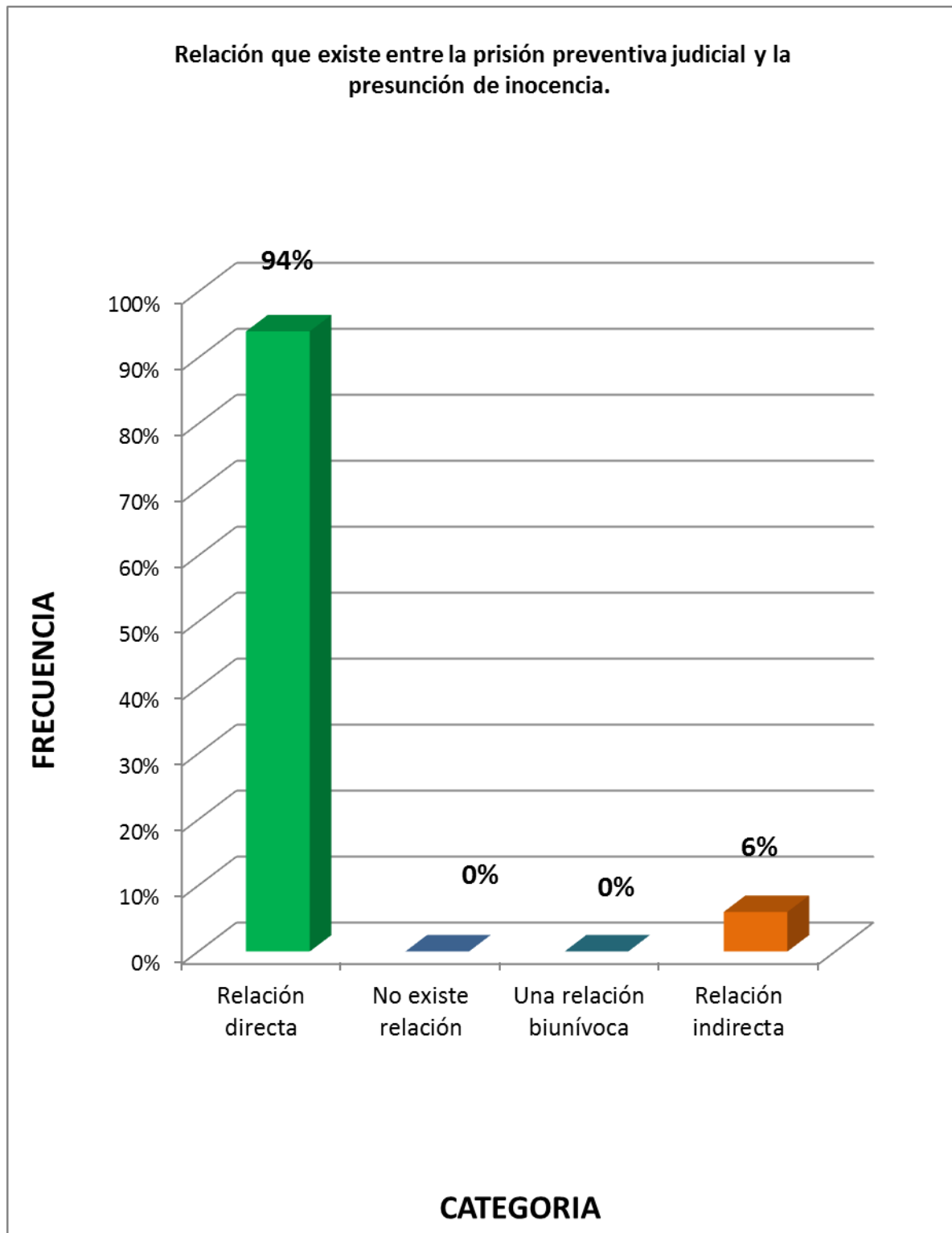
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Relación directa	16	94%
No existe relación	0	0%
Una relación biunívoca	0	0%
Relación indirecta	1	6%
TOTAL	17	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

Se coteja en el presente cuadro que, el 94% (16) abogados encuestados refieren que, existe una “relación directa” entre la “prisión preventiva” judicial y la “presunción de inocencia” del investigado y, el 6% (1) abogado encuestado indica que, existe una relación indirecta entre la “prisión preventiva” judicial y la “presunción de inocencia” del investigado.

FIGURA Nº 13



CUADRO Nº 14

14. ¿Considera Ud., en su “condición” de Magistrado, ordenar la “prisión preventiva” judicial en contra del investigado, con el “argumento de la gravedad” de la pena que se espera como “resultado del procedimiento”?

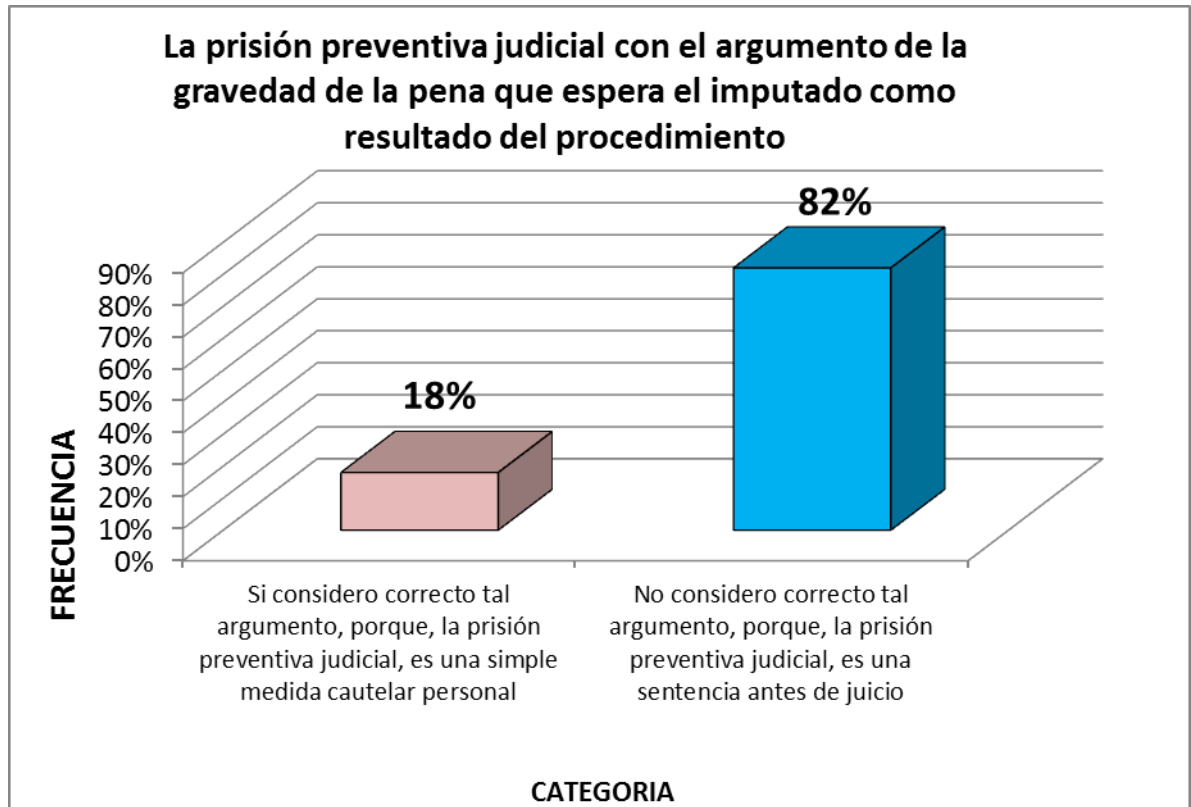
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si considero correcto tal argumento, porque, la “prisión preventiva” judicial, es una simple “medida cautelar” personal.	3	18%
No considero correcto tal argumento, porque, la “prisión preventiva” judicial, es una sentencia antes de juicio.	14	82%
TOTAL	17	100

Fuente:

INTERPRETACIÓN

Según el cuadro se advierte que, 82% (14) abogados indican que, no consideran correcto tal argumento, porque, la “prisión preventiva” judicial sería una sentencia antes de juicio y, el 18% (3), abogados, si consideran correcto tal argumento,

FIGURA Nº 14



CUADRO Nº 15

15. Ud., en su “condición” de abogado ¿considera correcto que el juez “ordene” la “prisión preventiva” judicial del investigado con los “argumentos de peligro de fuga” y “peligro de obstaculización”?

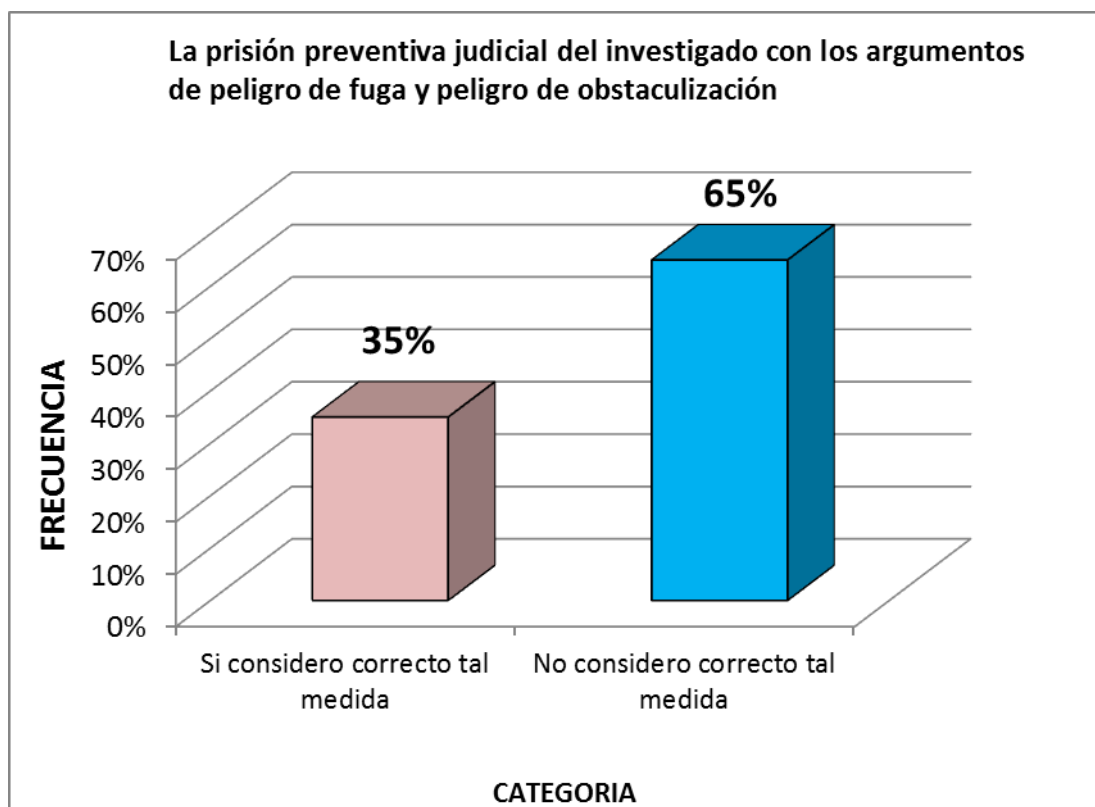
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si considero correcto tal medida	6	35%
No considero correcto tal medida	11	65%
TOTAL	17	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

Se advierte en el cuadro que, del total de 17 abogados encuestados, el 65% (11) abogados no consideran correcto tal medida y, el 35% (6) abogados si consideran correcto tal medida.

FIGURA Nº 15



CUADRO Nº 16

16. La “presunción de inocencia”, comporta la “exclusión” de cualquier “medida que conlleve coerción” en contra de la “libertad personal”, éste derecho termina cuando se impone la “prisión preventiva” judicial a un investigado antes de la “sentencia” firma: ¿Ud., en su “condición” de abogado, cómo considera ésta afirmación?”

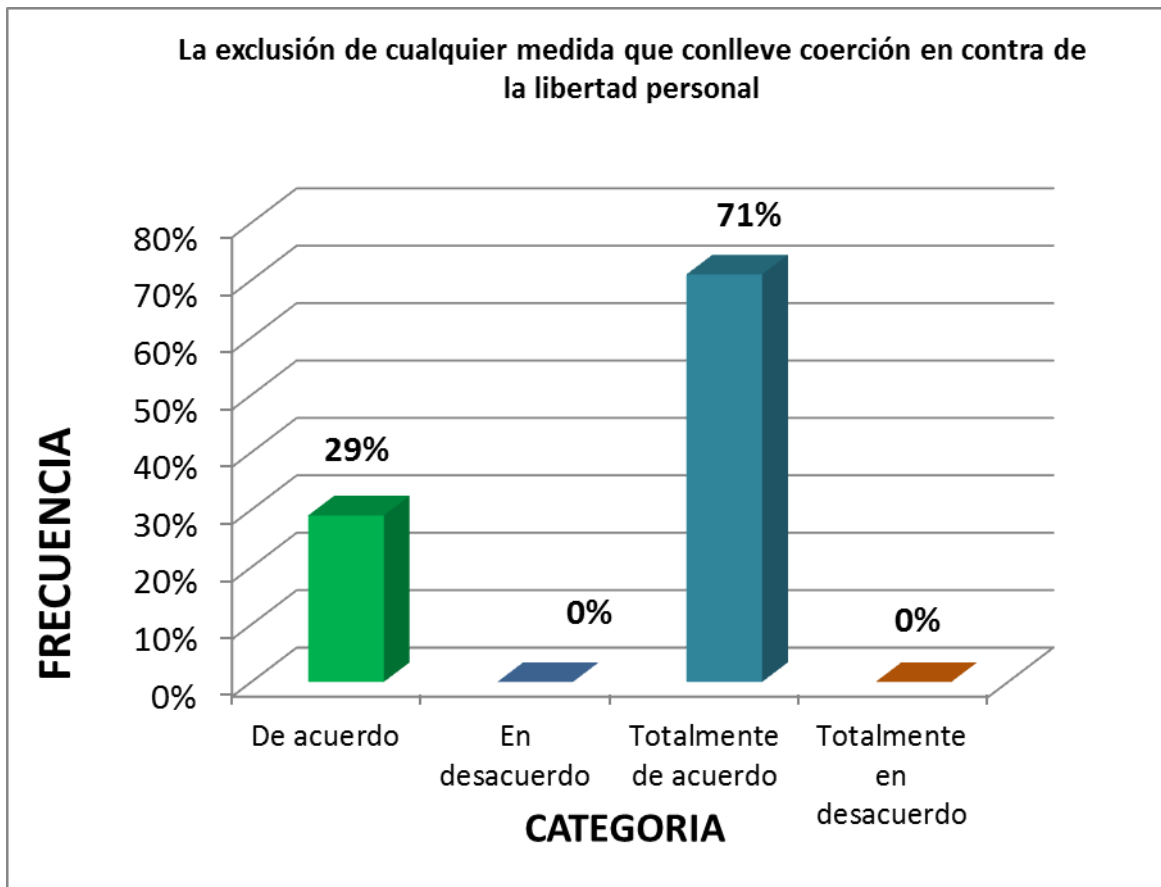
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
De acuerdo	5	29%
En desacuerdo	0	0%
Totalmente de acuerdo	12	71%
Totalmente en desacuerdo	0	0%
TOTAL	17	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

Como se ve en el presente cuadro, el 71% (12) abogados encuestados refieren que, están “totalmente de acuerdo” con la “supresión de cualquier medida” que “conlleve a la limitación” de la “libertad personal”, el 29% (5) abogados refieren lo contrario.

FIGURA Nº 16



CUADRO Nº 17

17. “¿Cómo considera Ud., la justificación de la “prisión preventiva” judicial, con el “argumento de que ésta” no “contradice” a la “presunción de inocencia” porque, no es una pena, sino una “medida cautelar personal”?”

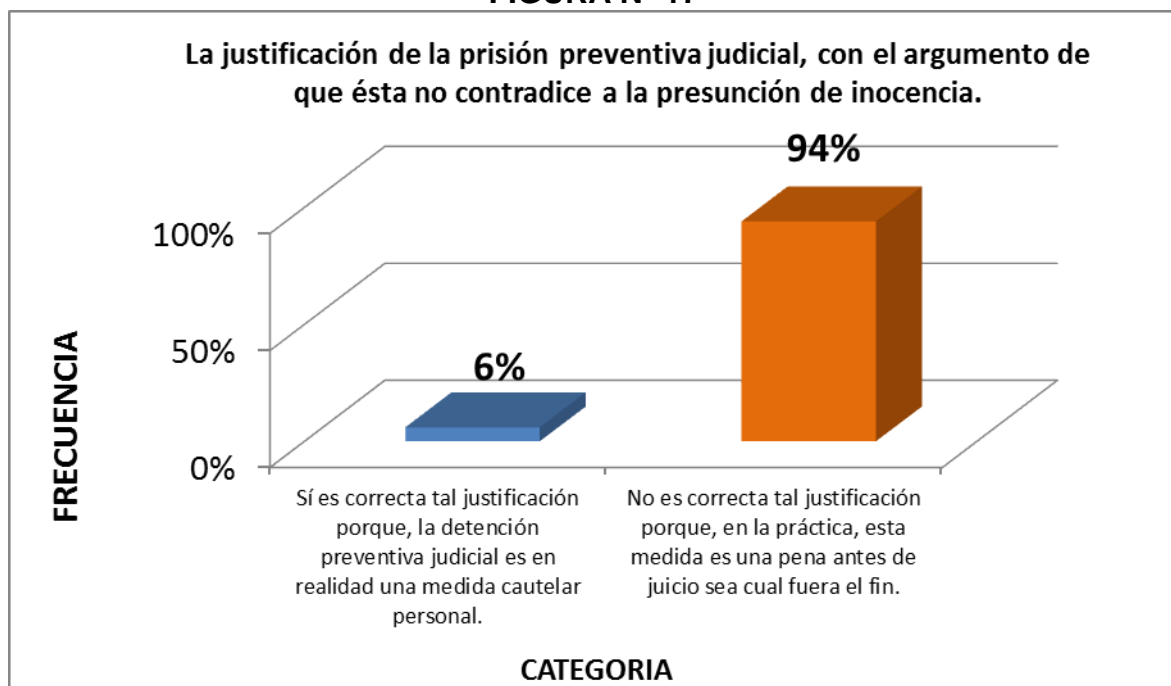
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sí es correcta tal justificación porque, la preventiva detención judicial es en realidad una “medida cautelar” personal.	1	6%
No es correcta tal justificación porque, en la práctica, esta medida es una “pena” antes de juicio sea cual fuera el fin.	16	94%
TOTAL	17	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

Como se aprecia en el recuadro, el 94% (16) abogados encuestados indican que es incorrecta tal justificación porque, en la práctica, esta medida es una pena, antes de juicio, sea cual fuera el fin y, el 6% (1) abogado indican lo contrario.

FIGURA Nº 17



CUADRO Nº 18

18. “Según su criterio, cuando primero se detiene a un sindicado mediante la “prisión preventiva”, luego se investiga por la inocencia o culpabilidad del investigado ¿se transgrede inevitablemente el “derecho de presunción de inocencia” del investigado?

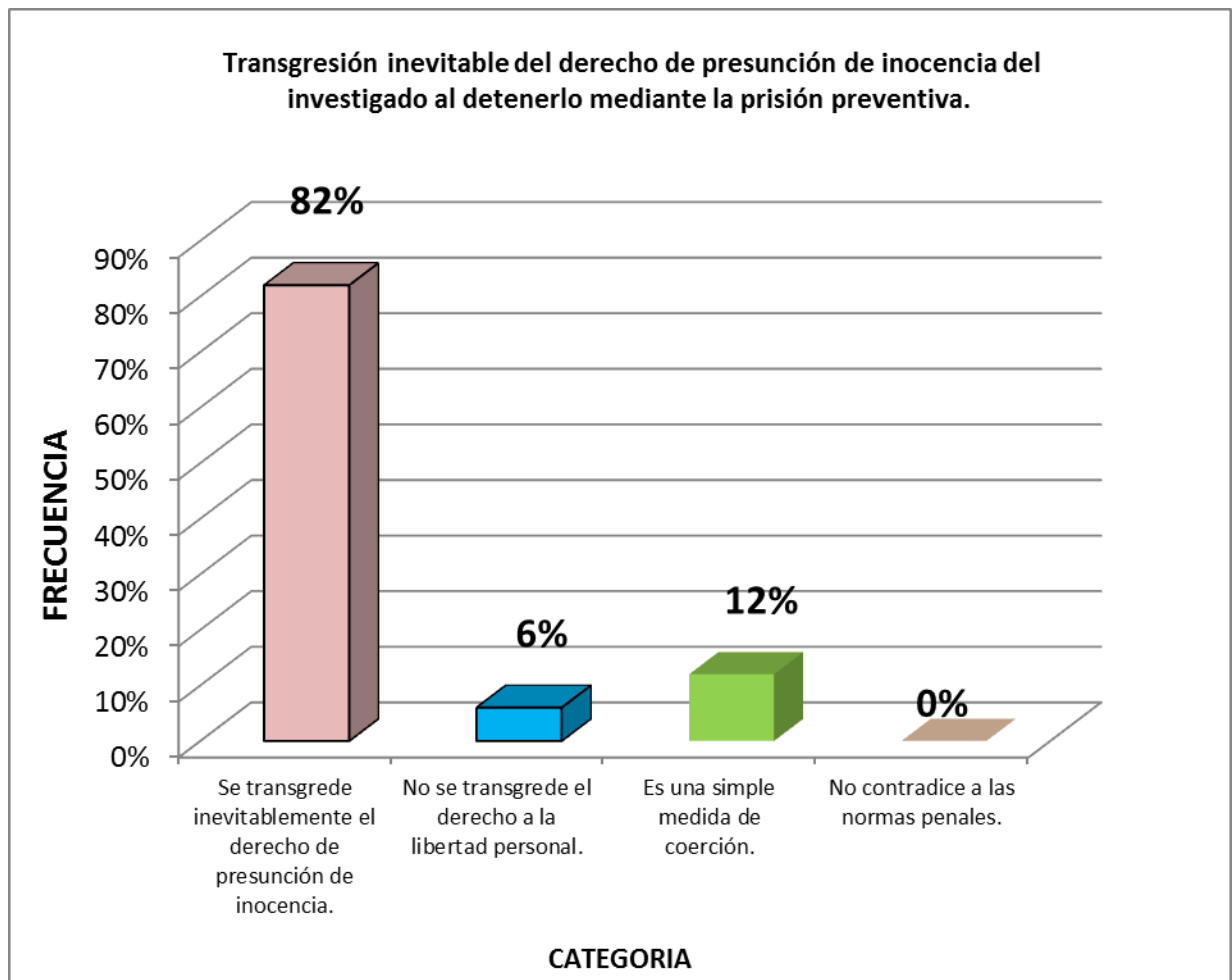
CATEGORÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Se transgrede inevitablemente el derecho de “presunción de inocencia”.	14	82%
No se transgrede el derecho a la “libertad personal”.	1	6%
Es una simple medida de coerción.	2	12%
No “contradice” a las normas penales.	0	0%
TOTAL	17	100%

Fuente:

INTERPRETACIÓN

El cuadro nos indica que, el 82% (14) abogados encuestados refieren que, cuando se opta en primer momento por la “detención” de un sindicado a través de la “prisión preventiva”, luego se investiga por la inocencia o culpabilidad del investigado, se transgrede inevitablemente el “derecho de presunción de inocencia”, el 12% (2) abogados indican que, es una simple medida coercitiva y el 6% (1) abogado, refiere que no se transgrede el “derecho a la libertad personal”.

FIGURA Nº 18



4.3 PRUEBA DE HIPOTESIS

Los resultados deben ser contrastarlos con la hipótesis general donde se indica que, la “prisión preventiva” judicial como “medida de aseguramiento” de la “finalidad del proceso” vulnera significativamente el “derecho” de “presunción de inocencia” del investigado en el “Distrito de Padre Abad”, Ucayali, sustentados en la opinión de los “Magistrados y abogados” donde se aprecia que, los magistrados ordenan la “prisión preventiva” judicial del investigado, vulnerando el derecho de la “presunción de inocencia”, plasmado en la “Constitución Política del Estado”, como es de verse del cuadro Nro. 1 y del cuadro Nro. 10, “donde” se advierte claramente que los “magistrados y abogados” refieren que, “privar de la libertad” al sindicado mediante la “prisión preventiva” judicial antes de una sentencia firme, no es Constitucional, toda vez que, cuando existen sospechas de la “comisión de un delito”, se “presume su inocencia” como se advierte en los cuadros Nro. 2 y 11, porque, privar de la libertad con la “prisión preventiva” judicial al investigado, esto significa efectos perjudiciales, “irreversibles e irreparables” como se advierte en los cuadros Nro. 3 y 12, seguidamente la “prisión preventiva” judicial en contra del investigado, con el “argumento” de la “gravedad de la pena” que se espera como “resultado del procedimiento”, tanto los mismos “magistrados y abogados” no consideran correcto tal argumento, porque, la “prisión preventiva” judicial es una sentencia antes de juicio, “como se advierte” en los cuadros Nro. 5 y 14, así también, los “magistrados y abogados” no consideran correcto ordenar la “prisión preventiva” judicial del investigado con los “argumentos” de “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización”, esto se

puede estimar de en los cuadros Nro. 6 y 15, seguidamente, tanto los “magistrados y abogados” están totalmente de acuerdo, así también de acuerdo sobre la “exclusión” de cualquier “medida que conlleve” “coerción en contra de la libertad personal”, se aprecia esto en los cuadros Nro. 7 y 16, la justificación de la preventiva prisión judicial con el “argumento” de que éste no objeta a presumir de inocencia, tanto los “magistrados y abogados” indican que no es correcta tal justificación, porque, en la práctica, esta medida es una “pena” antes de juicio sea cual fuere el final, como se divisa en los cuadros Nro. 8 y 17, sobre la transgresión inevitable del derecho de presumir de inocencia del investigado, tanto los magistrados y abogados refieren que efectivamente se transgrede inevitablemente el derecho de presumir de inocencia, cuando primero se detiene a un sindicado, como se divisa en los cuadros Nro. 9 y 18, éstos resultados están acorde con las hipótesis específicas propuestas, determinándose que se topan probadas.

La primera Hipótesis Especifica señala que, entre la preventiva prisión judicial y el derecho de presumir de inocencia del investigado existe una relación directa, lo que se encuentra debidamente probado como se divisa en el cuadro Nro. 4 y cuadro Nro. 13, donde efectivamente, tanto los “magistrados y abogados” refieren que, entre la preventiva prisión judicial y de presumirse de inocencia existe una relación directa.

Respecto a la segunda hipótesis específica, la preventiva prisión judicial, al vulnerar el derecho de presumir de inocencia del investigado es inconstitucional, de igual manera esto se prueba con los cuadros Nro. 1 y 10,

donde, los “magistrados y abogados” indican que privar de la libertad al investigado mediante la preventiva prisión judicial es inconstitucional (12,5% y 6%).



CAPITULO V

DISCUSION

5.1. LA “PRISIÓN PREVENTIVA” JUDICIAL Y LA “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA” SEGÚN LOS “MAGISTRADOS Y ABOGADOS” EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD, UCAYALI.

Luego de la terminación de la investigación, es sumamente necesario realizar la confrontación de la situación problemática de los asientos teóricos y de la conjetura propuesta con las resultas obtenidas, subsecuentemente, se confirma que, la preventiva prisión judicial como disposición de aseguramiento del propósito del proceso vulnera el derecho de la presumir de inocencia.

La interrogante que hemos planteado al iniciar el trabajo de indagación es: ¿”De qué manera” la “prisión preventiva” judicial como “medida de aseguramiento” de la “finalidad del proceso” “vulnera el derecho” de “presunción de inocencia” del investigado, en el Distrito de Padre Abad, Ucayali?, luego de haber concluido la investigación y, a la luminiscencia de los “resultados obtenidos”, se pudo determinar que, la preventiva prisión judicial, como medida de “aseguramiento” de la finalidad del proceso, vulnera el derecho de “presunción de inocencia”, tal como se evidencia den los “cuadros y gráficos” obtenidos al concluir la investigación.

Sabemos que, “**La PREVENTIVA PRISION** es una compostura represiva cautelar personal, prevista por nuestro Código Procesal Penal, que

eventualmente se puede aplicar a una individuo inmersa a una Investigación Preparatoria, en los casos en que así lo intente el proceso” (ORTIZ, 2013).

“Para las conclusiones de afirmar el impulso de la investigación, la vinculación del atribuido a la idéntica y al Juzgamiento, que de ser el caso compondrá la culminación del proceso” (ORTIZ, 2013).

“Es en esencia la medida represiva propia más grande que toca sufrir una persona” (ORTIZ, 2013).

“Castañeda Otsu siguiendo a especialistas como Sanguine, marca: que es un régimen de imposición que representa la intrusión más grave que puede desplegar el poder público en la independencia individual” (ORTIZ, 2013).

Como señala (ORTIZ, 2013):

“En efecto, la imposición, por ejemplo, de la prisión preventiva, no implica adelantar un juicio en casilla a la base del argumento, esto es discurrir criminal al atribuido, sino que la medida restrictiva es la réplica que da el régimen de justicia penal ante los trances o azares judiciales que la gestión del imputado puede generar.”

“No dejar de lado, el cuadro general, instituido en nuestro novo proceso penal, con analogía a las medidas cautelares que ciñen derechos fundamentales, por el Artículo 253º numeral 3 del CPP” (ORTIZ, 2013); que a la letra dice:

“La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere “indispensable”, en la medida y por el “tiempo estrictamente necesario”, para prevenir, según los casos, los “riesgos de fuga”, de “ocultamiento de bienes” o de “insolvencia sobrevenida”, así como para “impedir” la obstaculización de la “averiguación” de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.”

En definitiva, la preventiva prisión judicial obedece al principio de jurisdiccionalidad que textualmente dice: “La privación de la libertad “necesariamente” debe ser “dispuesta por un Juez competente”. Solo la “autoridad judicial”, en un “debido proceso” y por “resolución suficientemente motivada”, puede “disponer una medida así” (ORTIZ, 2013).

En la SENTENCIA EXP. N^o 2050-2002-HC/TC, se precisa. “Esta sentencia igualmente considera la privación de la libertad, de la restricción de la libertad, señalando que el “arresto” es una “restricción de la libertad” pero no una privación de la libertad”.

El TC ha reiterado que la “PRISION PREVENTIVA” para ser reconocida como “constitucional” debe eludir tales principios, “precisando que las razones que acreditan esta medida son: a) La presunción (firme) de que el procesado habría cometido un delito, b) El “peligro de fuga” y la posibilidad de “perturbación” de la actividad “probatoria” (ORTIZ, 2013).

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos” en diferentes veredictos, como el Caso Bayarri contra Argentina, acápite 69, o el Caso Acosta Calderón versus Ecuador, párrafo 74” (ORTIZ, 2013). Asimismo ha señalado que “la

PRISION “PREVENTIVA” es la medida más rigurosa que se puede aplicar a un individuo a la cual se le atribuye un delito, por lo cual su aplicación debe tener naturaleza excepcional, circunscrito por el Principio de Legalidad” (ORTIZ, 2013).

“La presunción de inocencia”, la “necesidad y proporcionalidad”, de armonía con lo que es estrictamente apremiante en una sociedad democrática” (ORTIZ, 2013).

ANALIZADO DESDE EL “PUNTO DE VISTA DE LOS RESULTADOS”

Desde un enfoque de los resultados obtenidos, podemos indicar que, la opinión de los “magistrados y abogados” del distrito judicial de Padre Abad, Ucayali, respecto a: **¿considera Ud., que es constitucional privar de la libertad del sindicado mediante la prisión preventiva?**, el 87,5% (7) magistrados y 94% (16) abogados indican que no es constitucional privar de la libertad del sindicado mediante la prisión preventiva **(CUADRO Nros. 01 y 10)**. Cuando se impone la prisión preventiva a un investigado, se presume su inocencia, tal situación es referido por los magistrados en un 62,5% y abogados en un 76% **(CUADRO Nros 2 y 11)**, ¿qué efectos representa la prisión preventiva judicial? 87% (7) magistrados, 100% de abogados (17) indican que tienen efectos perjudiciales, irreversibles e irreparables **(CUADRO Nros. 3 y 12)**. Sobre la nómima existente entre la “prisión preventiva” judicial y la “presunción de inocencia” del investigado, el 75% de magistrados y el 94% de abogados refieren que, existe una relación directa **(CUADRO Nros. 4 y 13)**. Con relación a la “medida” de “prisión preventiva” contra el investigado,

bajo el “argumento de la gravedad” de la pena que se espera como “resultado del procedimiento”, el 62,5% de magistrados no consideran correcto tal argumento y el 82% de abogados tampoco consideran correcto tal argumento **(CUADRO Nros. 5 y 14)**. Con relación a que si consideran correcto ordenar la “prisión preventiva” del investigado bajo el “argumento” de “peligro de fuga” y peligro de obstaculización, el 75% de magistrados consideran incorrecto tal medida y el 65% de abogados también consideran que no es correcto tal medida **(CUADRO Nros. 6 y 15)**. Sobre la “presunción de inocencia” que comporta la “supresión de cualquier medida” que entraña “coerción” en contra de la “libertad personal”, el 75% de magistrados están enteramente de acuerdo y el 71% de abogados también están enteramente de acuerdo **(CUADRO Nros. 7 y 16)**. Sobre la justificación de la preventiva prisión bajo el argumento de que éste no contradice el “derecho de presunción de inocencia”, el 75% de magistrados y el 94% de abogados indican que es incorrecta tal justificación porque, en la praxis, dicha medida es “una pena antes” de juicio sea cual fuera el fin **(CUADRO Nros. 8 y 17)**. Finalmente, cuando primero se procede a la detención de un sindicado a través de la prisión preventiva, luego se investiga por su inocencia o culpabilidad, el 75% de magistrados y el 82% de abogados refieren que se trasgrede inevitablemente el derecho de presumir de la inocencia **(CUADRO Nros. 9 y 18)**.

En este caso, el juez debe efectuar un balance de los poderes en forma muy sutil preservando el “principio” de imparcialidad y no “privar de la libertad”

a ningún investigado “vulnerando” el “principio” de “presunción de su inocencia”.

5.2 APOORTE CIENTÍFICO

Después de acontecer concluido con el progreso del ahora trabajo de investigación relacionada a “la preventiva prisión judicial y la “vulneración” del derecho de presumir de inocencia del investigado”, considero de trascendental importancia, habida cuenta que, sienta un precedente científico y académico destinado a la reorientación de ciertos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico relacionado al imponer de la preventiva prisión, que tiene trascendencia y relevancia social, pues, quien disputa contra la criminalidad tempranamente por intermedio de la prisión preventiva, no venera el principio de la presumir de inocencia, de tal manera que, en la actualidad, ésta se ciñe en un verdadero adelanto de una pena sin una sentencia final.

La presente investigación tiene por objeto aportar alcances relacionadas a reformas normativas que suministran efectos importantes en la racionalización del rito de la preventiva prisión en el régimen que vayan escoltadas de procesos de consumación más macizos, en específico, sujetos a variables como el preámbulo de audiencias orales en las fases preliminares y a una segura reducción de los plazos y cláusulas de los procesos.

Del mismo modo lo que se investiga es que, de armonía al sistema de derechos humanos y en observancia a los compendios fundantes del nuevo sistema judicial penal, por ser la situación de mayor intensidad, se planteen y

adopten criterios para que su procedencia esté condicionada a que las restantes medidas resulten escasos para asegurar la intención del proceso, medidas que pasan a constituir parte de las aludidas reformas.

La investigación realizada no pretende dar solución a la “incidencia” de la delincuencia sino, pretende afianzar un sistema de judicial penal constitucionalizado, respetuoso de la eficacia positiva de todos los derechos básicos, constitucionales y humanos de todas las personas, además coadyuvar en la ardua tarea de suscitar y garantizar la eficacia praxis y no formal de los derechos esenciales y principios constitucionales.

En tal sentido, constituye un aporte científico que puede ser empañado como un antecedente en la formulación de teorías ulteriores respecto a este tema.

CONCLUSIONES

DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL TRABAJO SE HA LLEGADO A LAS CONCLUSIONES QUE DETALLO:

A. CON RELACIÓN A LA “PRISIÓN PREVENTIVA” JUDICIAL:

- La investigación no permitió establecer que, los señores “Magistrados” en un 87,5% y los señores abogados, en un 94% indican que no es constitucional privar de la “libertad” al sindicado mediante la preventiva prisión judicial antes de la sentencia firme y un 12,5% de magistrados frente a un 6% de abogados, consideran que si es constitucional “privar de la libertad” al sindicado mediante la preventiva prisión judicial, antes de la sentencia firme.
- El 62,5% de magistrados y el 76% de abogados consideran que, imponer la preventiva prisión a un investigado contra el cual únicamente ocurrir sospechas que hacen figurarse que ha cometido o participado en cometer de un delito, significa presumir su inocencia, y el 12,5% de magistrados y 12% de abogados indican que, se presume su culpabilidad.
- Tanto los señores “magistrados” y los señores abogados refieren que, la prisión preventiva judicial representa efectos perjudiciales, “irreversibles e irreparables”, cuando la persona quien sufre resulta declarado inocente después de un largo proceso, representado por un 87% de magistrados y un 100% de abogados.
- Así también el 75% de magistrados y el 94% de abogados refieren que, existe una serie directa entre la preventiva prisión judicial y la “presunción de inocencia” del investigado.

- También nos permitió establecer que, la preventiva prisión judicial en contra del investigado, con el argumento de la “gravedad” de la condena que se espera como consecuencia del procedimiento, al respecto, el 62,5% de magistrados y el 82% de abogados, refieren que, no consideran correcto tal argumento, porque, la preventiva prisión judicial, es una sentencia antes de juicio.
- El 75% de magistrados y el 65% de abogados no consideran correcto la preventiva prisión judicial del indagado con los argumentos de “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización”.

B.- CON RELACIÓN A LA “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”

- En esta postura se ha llegado a determinar que, el 75% de magistrados y el 71% de abogados refieren estar completamente de convenio que presumir de inocencia comporta la eliminación de cualquier medida que sobrelleve sujeción en versus de la libertad personal, asimismo el 25% y el 29% refieren estar de acuerdo.
- Con referencia a la justificación de la preventiva prisión judicial con el “argumento” de que éste no contradice a la de presumir de inocencia, el 75% de magistrados y el 94% de abogados relatan que no es correcto tal justificación, porque, en la práctica, esta medida es una condena a priori de un juicio sea cual fuere el fin.
- Con relación a la transgresión inevitable del derecho de presumirse de inocencia del sindicado, al ordenar la prisión preventiva judicial, el 75% de magistrados y el 82% de abogados refieren que, se trasgrede inevitablemente el derecho de presumirse de inocencia.

SUGERENCIAS

- Establecer políticas criminales destinadas a regular el uso de la medida judicial de preventiva prisión judicial en contra del investigado, con la finalidad de coadyuven a la reducción del porcentaje de presos preventivos, optando por la comparecencia simple, que a su vez permitirán efectuar sobre el investigado una labor resocializadora.
- Lograr que la preventiva prisión judicial se aplique de manera provisional basado en los principios de legalidad, proporcionalidad y principalmente de excepcionalidad, con el propósito de avalar la libertad del procesado en frente al interés colectivo de la represión penal; de manera que se destierre la reincidencia del uso indistinto de esta entidad procesal.
- Se debe establecer reformas normativas que suministren efectos importantes en la racionalización del uso de la preventiva prisión, en la lógica que vayan acompañadas de juicios de implementación más fornidos, en especial, sujetos a variables como el exordio de audiencias orales en los decursos preliminares y a una efectiva reducción de los plazos de los procesos, en correspondencia con el “régimen” de los derechos humanos y en observancia a los “principios básicos del novísimo sistema adjetivo penal.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- ALBERTO BINDER. (1995). Tratado sobre el proceso penal a la luz de los derechos humanos. Editorial Heliasta. México.
- ANDRÉS ZAVALA, ABEL (1999) Metodología de la Investigación Científica. Segunda Edición. Editorial San Marcos. Perú.
- ALARCÓN, REYNALDO (1991) Método y Diseños de Investigación del Comportamiento. Universidad peruana Cayetano Heredia. Primera Edición. Lima.
- BUSTOS RAMÍREZ Juan, (1989). Manual de Derecho Penal, Parte General, Editorial Ariel S.A., Tercera Edición, Pág. 105, Madrid.
- BUNGE, MARIO (1993) La Investigación Científica. Editorial Ariel. S.A. Segunda Edición. España
- CAFERATA NORRES. (1985). Teoría de la prueba. Editorial Uba Buenos Aires. pág. 76.
- CABALLERO ROMERO, ALEJANDRO E. (2005) Guías Metodológicas para los planes y tesis de Maestría y Doctorado. Editorial Ugraph. Perú.
- CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Estudios del proceso penal comparado. En revista de ciencias penales. Universidad de Bogotá, Colombia. 1998, Pág. 42.
- CÁRDENAS RIOSECO Raúl F. (2006). “La Presunción de Inocencia”, Editorial Porrúa S.A., 2da. Edición, Pág. 23, México.
- DICCIONARIO LATINO ESPAÑOL. 1981). Editorial Bibliograf, Barcelona, 13ª edición, Barcelona, /Diccionario Etimológico Español e Hispánico, Editorial S.E.T.A., Madrid, 1954.
- FERRAJOLI Luigui, Diritto e Ragione. (1995). Teoría del Garantismo Penale, Editorial Trota S.A., Pág. 550, Madrid.

- FELIPE VILLAVICENCIO Terrero. (2006). Las instituciones procesales en Europa. Editorial ara. Perú. Pág. 14.
- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. (1999). Los derechos humanos y el derecho penal. México. Pág. 456.
- GARCÍA RADA Domingo. (1987). Protección de los derechos humanos. Revista internacional de derecho penal. Tercer trimestre. Pág. 49.
- HERNÁNDEZ SAMPIERE, ROBERTO Y OTROS. (1999) Metodología de la Investigación. Tercera Edición. México
- MELIÁ, Cancio. (2005). El proceso penal español. Editorial. Justitia. Lima. pág. 123.
- MONTESQUIEU. (1951). El Espíritu de la Leyes, Libro XII. Capítulo 2, Editorial El Ateneo, Pág.234, Madrid.
- MANZINI Vizenzo, (1951). Tratado de Derecho Procesal Penal, Volumen I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Pág. 180, Buenos Aires.
- MONTAÑÉS PARDO, Miguel Ángel. (1999). “La Presunción de Inocencia. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Pamplona, España, Editorial Aranzadi. Pág. 38.
- ORE GUARDIA. El proceso penal constitucionalizado. En estudios de derecho procesal penal. Universidad Pedro Ruiz Gallo, Perú, Pág. 141.
- PEDRO SAGUES, Néstor. (1991). Estudio de las instituciones democráticas. Editorial UBA. Buenos Aires. Pág. 125- 141.
- RAMOS MEJIA, Enrique. (2004). La protección de los derechos fundamentales en el proceso penal. Editorial Académico. Bogotá. Pág. 85.
- ROXIN, Claus. (1998). Derecho procesal penal. Editorial ELIASTA., México. pág. 14.

- SAN MARTÍN CASTRO, César. (1999). "Derecho Procesal Penal", Editora Jurídica Grijley, Tomo I, Pág. 67, Lima.
- SEBASTIÁN, Soler. (1985). Estudio de derecho penal y procesal penal contemporáneo. Revista de derecho comparado. Argentina. Pág. 78.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

- Exp. N° 1260-2002-HC/TC, 09/07/02 (Tribunal Constitucional 09 de julio de 2002).
- Abogados Jujeñas. (17 de enero de 2013). *Abogados Jujeñas - Facebook*.
Obtenido de El principio de inocencia:
https://m.facebook.com/AbogadasJujenas/posts/570123866350901?locale2=es_LA.
- Bivino, A. (09 de abril de 2008). *Revista Pensamiento Penal*. Obtenido de Contra la Inocencia:
<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2005/11/doctrina30205.pdf>.
- Cardenas, R. M. (s.f.). *Derecho y cambio social*. Obtenido de Presunción de inocencia: <http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista15/inocencia.htm>.
- Chero, M. F. (s.f.). *Monografías.com*. Obtenido de Prisión Preventiva en el Perú, Eficacia Procesal o Juicio Mediático:
<http://www.monografias.com/trabajos107/prision-preventiva-peru-eficacia-procesal-o-juicio-mediatico/prision-preventiva-peru-eficacia-procesal-o-juicio-mediatico.shtml>.
- Correo, D. (30 de marzo de 2009). *Política y Economía*. Recuperado el 22 de junio de 2015, de <http://diariocorreo.pe/politica-y-economia/echaiz-recepcionara-primera-denuncia-penal-371563/>.
- DefiniciónDe. (s.f.). *Definición de*. Obtenido de <http://definicion.de/libertad/>.
- Huanca, P. A. (s.f. de s.f. de s.f.). *Libertas et justitia Blog*. Recuperado el 23 de junio de 2015, de <http://antoniohuancapacheco.blogspot.pe/2012/10/sistema-acusatorio-adversarial-en-el.html>.
- Ore, G. A. (s.f. de junio de 2006). *Instituto de Ciencia Procesal Penal*. Recuperado el 26 de junio de 2015, de Las medidas cautelares personales en el proceso penal peruano: incipp.org.pe/modulos/documentos/archivos/medidascautelares.aog.pdf.

- ORTIZ, N. M. (17 de noviembre de 2013). *Nuevo Proceso Penal Comentarios*.
Obtenido de PUCP:
<http://blog.pucp.edu.pe/blog/nuevoprocesopenal/2013/11/17/la-prision-preventiva/>.
- Quispe, F. F. (06 de setiembre de 2004). *Anuario de Derecho Penal 2004*.
Obtenido de Presumirse inocente, sentirse libre y amparado: Momentos clave para defender la presunción de inocencia.:
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_2004_09.pdf.
- Raña, A. W. (09 de mayo de 2007). *Monografías.com*. Obtenido de Principio de Presunción de Inocencia: <http://www.monografias.com/trabajos86/principio-inocencia/principio-inocencia.shtml>.
- Rosas, Y. J. (01 de abril de 2011). *Escuela del Ministerio Público*. Recuperado el 20 de junio de 2015, de
http://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2257_modulo1_tema1.pdf.
- SPIJ. (s.f de s.f de s.f). *Sistema Peruano de Información Jurídica*. Obtenido de
<http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-nuevocodprocpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo>.
- Thefre Dictionary. (s,f). *Thefre Dictionary*. Obtenido de
<http://es.thefreedictionary.com/indicio>.
- Velez, F. G. (2015 de marzo de 2007). *Justicia viva*. Recuperado el 20 de junio de 20, de www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2007/marzo/01/5_vezel.doc.
- Wikipedia. (s.f.). *Wikipedia - La enciclopedia libre*. Obtenido de
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_preventiva.

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
Escuela de Post Grado

Investigador : Gabriela Marleni Serrano Vega
Título de la Investigación : La “prisión preventiva” judicial y la “vulneración” del “derecho” de “presunción de inocencia” del investigado en el “distrito de padre abad”, ucayali, 2014 – 2015.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
Problema principal ¿De qué manera la “prisión preventiva” judicial como medida de “aseguramiento de la finalidad” del proceso, “vulnera” el derecho de “presunción de inocencia” del “investigado” en el Distrito de Padre Abad, Ucayali, 2014 – 2015?	Objetivo General Determinar si la “prisión preventiva” judicial como medida de “aseguramiento” de la “finalidad del proceso penal” “vulnera” el “derecho de presunción de inocencia” del investigado, en el Distrito de Padre Abad, Ucayali, 2014 – 2015.	Hipótesis general La “prisión preventiva” judicial como medida de “aseguramiento” de la “finalidad del proceso” vulnera significativamente el derecho de “presunción de inocencia” del investigado en el Distrito de Padre Abad, Ucayali, 2014 – 2015.	V. Independiente Prisión preventiva judicial V. Dependiente “Presunción de inocencia”.	a). Medidas de “coerción procesal penal” a) Derecho Fundamental b) Derecho Constitucional	a.- Resoluciones del juez de la investigación preparatoria ordenando la “medida coercitiva” “de prisión preventiva” b.- Efectos perjudiciales, irreversibles e irreparables. c- Relación entre la “prisión preventiva” judicial y la “presunción de inocencia” d.- “Gravedad” de la “pena que se espera” como resultado del procedimiento. e.- Peligro de fuga f) “Peligro de obstaculización” “La defensa” de la “persona humana” y el “respeto de su dignidad” Conceptual, teórico y definición de la normatividad Exclusión de la “medida de coerción”
Problemas Específicos	Objetivos específicos	Hipótesis específicas	Variables	DIMENSIONES	INDICADORES
1. ¿Qué relación existe entre la “prisión preventiva” judicial y el derecho de “presunción de inocencia” del investigado?	1. Determinar la relación que existe entre la “prisión preventiva judicial” y el derecho de “presunción de inocencia” del investigado.	1. Entre la “prisión preventiva” judicial y el “derecho de presunción de inocencia” del investigado, existe una relación directa.			
2. ¿La prisión	2. Determinar si la	2. La prisión			

preventiva judicial, al vulnerar el derecho de presunción de inocencia del investigado, es constitucional?.	prisión preventiva judicial al vulnerar el derecho de presunción de inocencia del investigado, es Constitucional.	preventiva judicial, al “vulnerar el derecho” de “presunción de inocencia” del investigado es inconstitucional.			
---	---	---	--	--	--

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN	POBLACIÓN, MUESTRA	DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
<p>Tipo de investigación. Básica Porque, se orienta a producir conocimientos y teorías o también tiene como intención la mejor comprensión de los fenómenos. Nivel de investigación: Descriptivo - Correlacional. Por la función principal que cumplirá responde al nivel Descriptivo, toda vez que su finalidad consiste en realizar un análisis del estado actual del fenómeno, determinando sus características y propiedades. Correlacional por que estará orientada a descubrir y predecir de manera rigurosa la problemática jurídica relacionando las variables a la aplicación de la preventiva prisión y la vulneración del derecho de presumir de inocencia en el Distrito de Padre Abad, Ucayali.</p>	<p>Población. Constituida por. - 08 magistrados del Distrito de Padre Abad Ucayali que laboraron durante el periodo 2014 – 2015. - 17 Abogados que laboran en su situación de abogados libres en el Distrito de Padre Abad, es decir, 25, entre magistrados y abogados.</p> <p>Muestra (n). El muestreo es no probabilístico por lo que a criterio del investigador, se trabajará con todos los magistrados y abogados, los mismos que se indican en la población, es decir, población – muestra.- N = n</p>	<p>El diseño de la exploración es no experimental en su forma transversal, porque, se orienta a analizar la correspondencia entre un contiguo de variables en un punto del tiempo. Técnicas estadísticas. Se utilizará Análisis de Contenidos Documentales ya que se podrá extraer datos relevantes para nuestro objeto de estudio. La Entrevista con lo que se procura recabar información confiable de los directamente involucrados.</p>	<p>Técnicas bibliográficas Fichaje Análisis documental.</p> <p>Técnicas de campo Encuesta</p>	<p>Instrumentos: . Fichas de registro o localización (Bibliográficas y hemerográficas) . Fichas de legajo y averiguación (textuales, resumen, comentario.) Instrumentos Cuestionario</p>

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Título: Prisión preventiva judicial y la “vulneración” del derecho de “presunción de inocencia” del “investigado” en el Distrito de Padre Abad Ucayali 2014 - 2015

Tesista: Gabriela Marleni SERRANO VEGA

Asesor: Dr. Erasmo Santillán Oliva

Correo: erasmosantillanoliva@hotmail.com

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	TÉCNICAS	ESCALA DE MEDICIÓN E INSTRUMENTOS
V. INDEPENDIENTE (X) Prisión preventiva judicial	<p>La "prisión preventiva" se vincula con el objeto de probar los hechos referido a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o "medida de seguridad", así como los reseñados al gravamen civil procedido del delito.</p> <p>Destinada la "investigación preparatoria", "expediente fiscal", "prisión preventiva" y "juez de la indagación preparatoria", se debe descifrar que dichos términos hacen referencia, respectivamente a "instrucción", "expediente fiscal", "mandato de detención" y "juez penal"</p>	<p>Cuando existan constituidos y graves recapitulaciones de convencimiento para estimar sensatamente la comisión de un delito que relacione al imputado como autor o partícipe del mismo. En la estimación de la prueba de los jueces y tribunales corresponderá observar las reglas de la lógica, la sabiduría y los axiomas de la experiencia y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados.</p> <p>Hasta que no se exhiba prueba en contrario.</p> <p>Art. 156, 158, 268 del CPP.</p> <p>D. Leg. 957.</p> <p>2da. DCF de la ley Nro. 30076</p>	Medidas de sujeción procesal penal	<p>Resolución del Juez de la indagación preparatoria ordenando la medida represiva de prisión preventiva.</p> <p>Relación entre la preventiva prisión judicial y la de presumirse de inocencia</p> <p>Efectos perjudiciales irreversibles e irreparables.</p> <p>Amenaza de la pena que se expectativa como consecuencia del procedimiento</p> <p>Peligro de huida "Peligro de obstaculización".</p>	<p>Análisis documental</p> <p>Encuesta</p>	<p>Cuestionario</p>
V. DEPENDIENTE (Y) Presunción de inocencia	<p>Toda persona inculpada de delito posee derecho a presumirse su inocencia mientras no se examine su culpabilidad, acorde a ley y en juicio público en el que se le hayan fortalecido todas las evicciones ineludibles para su defensa.</p> <p>La Corte ha asentado que, en el principio de presumirse de inocencia subyace la intención de las cauciones judiciales, al aseverar la idea de que un individuo es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada.</p> <p>Los DDFF reconocidos por la Constitución y los Tratados relativos a DDHH ratificados por el Perú, sólo podrán ser restringidos en el recuadro del proceso.</p>	<p>La limitación de un derecho elemental intima formula permisión legal y se asignará con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción.</p> <p>(Art. 253 del CPP. D. Leg. 957)</p> <p>Ar. 11.1 de la Declaración Universal de los DDHH, Ar. 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 2 Inc. 24 de la Constitución Política</p>	<p>Derecho Fundamental</p> <p>Derecho Constitucional Penal</p>	<p>La defensa de la individuo humano y el respeto de su dignidad.</p> <p>Conceptual, teórico y esclarecimiento de la normatividad</p> <p>Supresión de la medida de coerción.</p>	<p>Trabajo de gabinete</p>	<p>Ficha de análisis documental</p>

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
ESCUELA DE POST GRADO



Estimado señor

Por intermedio de la reciente me dirijo a Ud. para solicitarle su colaboración en el trabajo de indagación que se está realizando a nivel de la Escuela de Post Grado de la Universidad de Huánuco cuyo propósito es, determinar si la “prisión preventiva” judicial como régimen de fortalecimiento de la finalidad del proceso penal, quebranta el derecho de presumirse de inocencia del investigado en el Distrito de Padre Abad, Ucayali, 2014 – 2015.

Después de leer detenidamente las preguntas que aparecen a continuación, ponga una “X” sobre la letra de la alternativa que Ud., crea es la correcta.

El cuestionario es anónimo, por favor trate de contestar todas las preguntas.

Agradeciéndole de antemano su colaboración, me suscribo de Ud.

Atentamente

Gracias

CUESTIONARIO N° 01
ENCUESTA A LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LABORAN EN EL
DISTRITO DE PADRE ABAD, UCAYALI.

VARIABLE INDEPENDIENTE

1. ¿"Considera" usted que es constitucional privar de la libertad al sindicado mediante la "prisión preventiva" judicial, antes de la sentencia firme, no obstante que a éste le asiste el derecho de "presunción de inocencia"?
 - a) Sí
 - b) No
2. Cuando se impone la "prisión preventiva" judicial a un investigado contra el cual sólo existen sospechas, que "hacen suponer" que ha cometido o participado en la comisión de un delito ¿Qué se presume de éste investigado?.
 - a) Se presume su inocencia.
 - b) Se presume su culpabilidad.
 - c) No se hace ninguna presunción.
 - d) Se le priva de libertad para demostrar su inocencia o culpabilidad.
3. ¿Qué efectos representa la "prisión preventiva" judicial cuando quien sufre resulta declarado inocente después de un largo proceso penal?
 - a) Efectos perjudiciales irreversibles e irreparables.
 - b) Efectos perjudiciales reversibles y reparables.
 - c) No se causa ningún efecto perjudicial.

- d) Es normal que una “persona” esté recluido en un penal juntamente con los sentenciados.
4. ¿Qué relación existe entre la “prisión preventiva” judicial y la “presunción de inocencia” del investigado?.
- a) Relación es directa
 - b) No existe relación.
 - c) Una relación biunívoca.
 - d) Relación indirecta.
- 5.- ¿Cómo considera Ud., en su condición de Magistrado, ordenar la “prisión preventiva” judicial en contra del investigado, con el “argumento” de la “gravedad de la pena” que se espera como “resultado” del procedimiento?
- a) Si considero correcto tal argumento, porque, la “prisión preventiva” judicial, es una simple “medida cautelar” personal
 - b) No considero correcto tal argumento, porque, la “prisión preventiva” judicial, es una sentencia antes de juicio
6. Ud., en su “condición de magistrado” ¿considera correcto ordenar la “prisión preventiva” judicial del investigado con los “argumentos” de “peligro de fuga” y peligro de obstaculización?
- a) Si considero correcto tal medida
 - b) No considero correcto tal medida

VARIABLE DEPENDIENTE

7. “La presunción de inocencia”, comporta la “exclusión” de cualquier “medida” que “conlleve coerción” en “contra de la libertad personal”, éste derecho termina cuando se impone la “prisión preventiva” judicial a un investigado antes de la “sentencia firme”: ¿Ud., en su “condición” de magistrado, como considera ésta afirmación?
- a) De acuerdo.
 - b) En desacuerdo.
 - c) Totalmente de acuerdo.

d) Totalmente en desacuerdo.

8. ¿Cómo considera Ud., la justificación de la “prisión preventiva” judicial, con el “argumento” de que ésta no “contradice” a la “presunción de inocencia”, porque no es una pena, sino una “medida cautelar personal”?
- a) Sí es correcta tal justificación porque, la “detención preventiva” judicial es en realidad una “medida cautelar personal”.
 - b) No es correcta tal justificación porque, en la práctica, esta medida es una pena antes de juicio sea cual fuera el fin.
9. Según su criterio, cuando primero se detiene a un sindicado mediante la “prisión preventiva”, luego se investiga por la inocencia o culpabilidad del investigado ¿se transgrede inevitablemente el derecho de “presunción de inocencia” del investigado?
- a) Se transgrede inevitablemente el derecho de “presunción de inocencia”.
 - b) No se transgrede el derecho a la “libertad personal”.
 - c) Es una simple medida de coerción.
 - d) “No contradice” a las normas penales.

Gracias por su colaboración

CUESTIONARIO N° 02**ENCUESTA A LOS SEÑORES ABOGADOS LIBRES QUE LABORAN EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD, UCAYALI.****VARIABLE INDEPENDIENTE**

1. ¿Considera usted que es constitucional privar de la libertad al sindicado mediante la prisión preventiva judicial, antes de la sentencia firme, no obstante que a éste le asiste el derecho de presunción de inocencia?
 - e) Sí
 - f) No
2. Cuando se impone la prisión preventiva judicial a un investigado contra el cual sólo existen sospechas, que hacen suponer que ha cometido o participado en la comisión de un delito ¿Qué se presume de éste investigado?.
 - g) Se presume su inocencia.
 - h) Se presume su culpabilidad.
 - i) No se hace ninguna presunción.
 - j) Se le priva de libertad para demostrar su inocencia o culpabilidad.
3. ¿Qué efectos representa la prisión preventiva judicial cuando quien sufre resulta declarado inocente después de un largo proceso penal?
 - k) Efectos perjudiciales irreversibles e irreparables.
 - l) Efectos perjudiciales reversibles y reparables.
 - m) No se causa ningún efecto perjudicial.

- n) Es normal que una persona esté recluido en un penal juntamente con los sentenciados.
4. ¿Qué relación existe entre la prisión preventiva judicial y la presunción de inocencia del investigado?.
- o) Relación es directa
 - p) No existe relación.
 - q) Una relación biunívoca.
 - r) Relación indirecta.
5. ¿Cómo considera Ud., en su condición de Abogado, ordenar la prisión preventiva judicial en contra del investigado, con el argumento de la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento?
- a) Si considero correcto tal argumento, porque, la prisión preventiva judicial, es una simple medida cautelar personal
 - b) No considero correcto tal argumento, porque, la prisión preventiva judicial, es una sentencia antes de juicio
6. Ud., en su condición de Abogado ¿considera correcto ordenar la prisión preventiva judicial del investigado con los argumentos de peligro de fuga y peligro de obstaculización?
- a) Si considero correcto tal medida
 - b) No considero correcto tal medida

VARIABLE DEPENDIENTE

7. La presunción de inocencia, comporta la exclusión de cualquier medida que conlleve coerción en contra de la libertad personal, éste derecho termina cuando se impone la prisión preventiva judicial a un investigado antes de la sentencia firme: ¿Ud., en su condición de abogado, cómo considera ésta afirmación?+++⁰
- a) De acuerdo.
 - b) En desacuerdo.
 - c) Totalmente de acuerdo.
 - d) Totalmente en desacuerdo.

8. ¿Cómo considera Ud., la justificación de la prisión preventiva judicial, con el argumento de que ésta no contradice a la presunción de inocencia porque, no es una pena, sino una medida cautelar personal?
 - a) Sí es correcta tal justificación porque, la detención preventiva judicial es en realidad una medida cautelar personal.
 - b) No es correcta tal justificación porque, en la práctica, esta medida es una pena antes de juicio sea cual fuera el fin.
9. Según su criterio, cuando primero se detiene a un sindicado mediante la prisión preventiva, luego se investiga por la inocencia o culpabilidad del investigado ¿se transgrede inevitablemente el derecho de presunción de inocencia del investigado?
 - a) Se transgrede inevitablemente el derecho de presunción de inocencia.
 - b) No se transgrede el derecho a la libertad personal
 - c) Es una simple medida de coerción.
 - d) No contradice a las normas penales.

Gracias por su colaboración